Señores.

**JUZGADO TRECE (13) CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI, VALLE**

[j13cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:J13cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co)

E. S. D.

|  |  |
| --- | --- |
| **PROCESO:** | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL |
| **RADICACIÓN:** | 76001-31-03-013-**2023-00109**-00 |
| **DEMANDANTES:** | WILLIAM DAVID PEREA MONTAÑO Y OTROS |
| **DEMANDADOS*:*** | JULIAN DAVID CAICEDO ENCARNACIÓN Y OTROS |

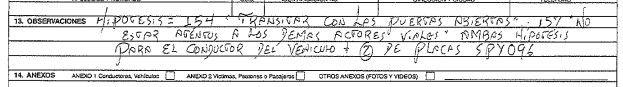
**ASUNTO: CONTESTACIÓN A LA REFORMA DEMANDA**

**GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA**, domiciliado y residente en la ciudad de Cali, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 19.395.114 de Bogotá D.C., abogado en ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional No. 39.116 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de Apoderado General de la **COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**,sociedad anónima de seguros, sometida al control y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, identificada con el NIT 860.037.013-6, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C., según consta en el certificado de existencia y representación legal que se anexa, en donde figura inscrito el poder general conferido al suscrito a través de la Escritura Pública No. 13771, otorgada el 01 de diciembre de 2014, en la Notaría Veintinueve (29) del Círculo de Bogotá D.C. De manera respetuosa y encontrándome dentro del término legal, manifiesto comedidamente que procedo a **CONTESTAR LA REFORMA DE LA DEMANDA** formulada por William David Perea Montaño y Otros, en contra de la Compañía Mundial de Seguros S.A. y Otros, anunciando desde ahora que me opongo a la totalidad de las pretensiones formuladas en la demanda, de acuerdo con los fundamentos fácticos y jurídicos que se esgrimen a continuación:

# PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LOS HECHOS DE LA DEMANDA

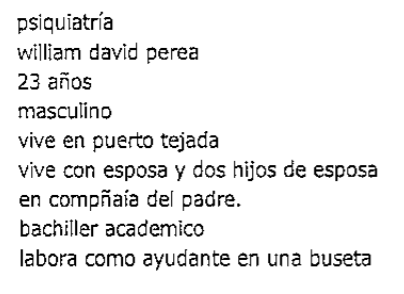
**FRENTE AL HECHO “1”:** No me consta que el pasado 16 de mayo de 2022, en la dirección indicada en este hecho, se hubiese producido la colisión entre los vehículos de placas SKR112 y SPY096, así como tampoco las circunstancias de tiempo, modo o lugar que enmarcaron el accidente de tránsito descrito. Lo anterior debido a que son premisas fácticas que exceden el conocimiento de mi representada como compañía de seguros, motivo por el cual la parte actora deberá probar su dicho de acuerdo con la carga dinámica de la prueba que le asiste.

No obstante, no podrá perder de vista el Despacho que dentro del Informe Policial de Accidente de Tránsito (IPAT) No. A001403214 se estableció la hipótesis No. 154 que corresponde a “*transitar con las puertas abiertas”* y la No. 157 “no estar atentos a los demás actores viales”; ambas hipótesis atribuibles al conductor del vehículo de placas SPY096. Como se observa en la siguiente imagen:



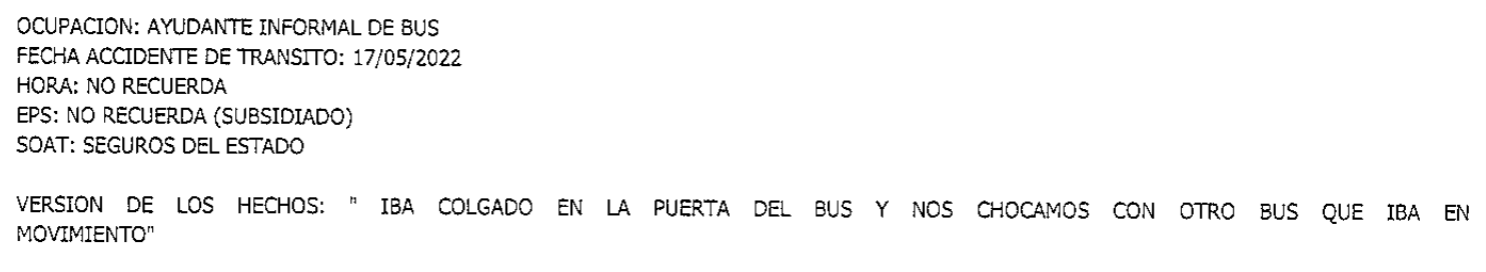
**Transcripción literal: *“****Hipótesis 154 “Transitar con las puertas abiertas”. 157 “No estar atentos a los demás actores viales” ambas hipótesis para el conductor del vehículo #2 de placas SPY096”*

Así mismo, notará su señoría que de acuerdo con los golpes descritos en el vehículo de placas SKR112, los mismos se ocasionan en el bómper trasero lado izquierdo, paral trasero izquierdo y otros por determinar. Por lo que, por ilación lógica y aplicación de las reglas de la experiencia, no hubo injerencia de este vehículo en el accidente de tránsito y quien tuvo el factor determinante en la colisión fue el vehículo de placas SPY096 como acertadamente lo describió el agente de tránsito, Alonso Caicedo Albornoz. Aunado a lo anterior, es incontrovertible que, según los hechos planteados en la demanda y las pruebas documentales obrantes en el proceso, el señor William David Perea Montaño no se encontraba como pasajero, sino como tripulante o ayudante del vehículo SPY096, y que además se encontraba colgando de la puerta de dicho vehículo, lo cual se constata tanto en la Historia Clínica allegada por la parte actora como en el Informe de Accidente de Tránsito, donde se establece de manera clara que el señor Perea se transportaba como acompañante y no como pasajero. Este hecho refuerza la naturaleza laboral del incidente y, por ende, corresponde a la jurisdicción laboral, no a la civil.





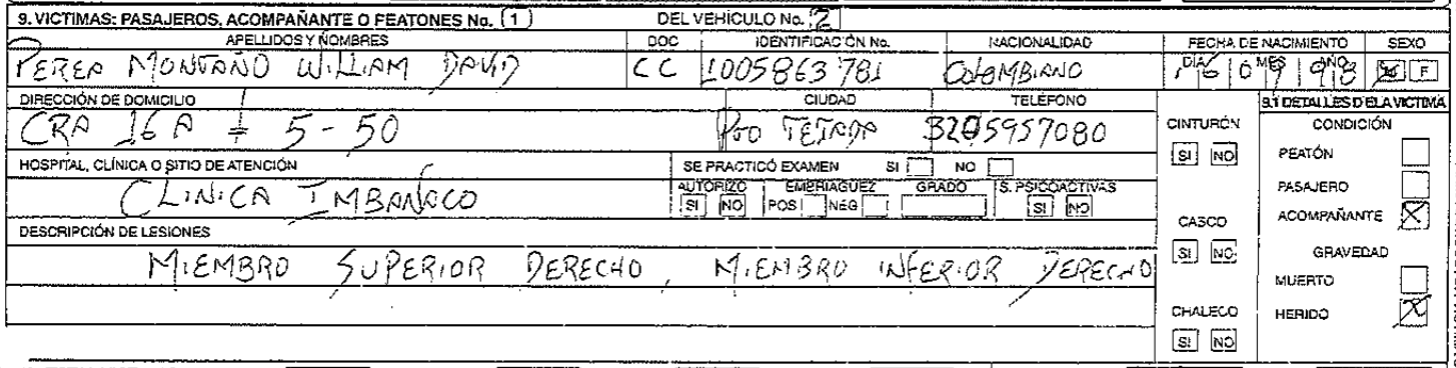
**Transcripción literal: *“****Labora como ayudante en una buseta”*





**Transcripción literal: *“****Ocupación: Ayudante Informal de Bus (…)*

*Versión de los hechos: Iba Colgado en la puerta del bus”*

**

Por lo demás, se evidencia que éste agente transitaba en un vehículo con las puertas abiertas exponiéndose a su propio riesgo y actuando de forma negligente e imprudente, rompiendo el nexo de causalidad siendo la causa determinante de las lesiones que reprocha en su demanda.

Al margen de los argumentos expuestos, deberá tener en cuenta el Despacho que el nexo de causalidad respecto de la conducta del conductor del vehículo de placas SKR112 se rompe, por la participación e incidencia que tuvo sobre la ocurrencia del accidente, el señor Juan Camilo Salinas Valencia, conductor del vehículo de placas SPY096 y la propia víctima. De esta manera, se verifica que se configuran las causales exonerativa de responsabilidad denominadas “hechos de un tercero” y “hecho exclusivo de la víctima”.

En este orden de cosas, teniendo en cuenta que mi representada es vinculada al proceso en virtud de los contratos de seguro que ampara al vehículo de placas SKR112, no existe prueba de la supuesta responsabilidad atribuida al conductor del vehículo asegurado, y por no tanto, no es posible acreditar los elementos establecidos en el artículo 1077 del Código de Comercio para hacer exigible la obligación indemnizatoria en cabeza de la compañía de seguros que represento.

**FRENTE AL HECHO “2”:** No me consta lo afirmado en este hecho por la parte demandante, pues se trata de circunstancias totalmente ajenas y desconocidas por la COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A., Compañía Aseguradora sin relación alguna con los hechos expuestos. En todo caso y sin perjuicio de lo anterior, la parte actora deberá acreditar su dicho debida y suficientemente, conforme a los medios de pruebas útiles, conducentes y pertinentes para el efecto y en las oportunidades procesales previstas para ello.

**FRENTE AL HECHO “3”:** No me consta lo afirmado en este hecho por la parte demandante, pues se trata de circunstancias totalmente ajenas y desconocidas por la COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A., Compañía Aseguradora sin relación alguna con los hechos expuestos. En todo caso y sin perjuicio de lo anterior, la parte actora deberá acreditar su dicho debida y suficientemente, conforme a los medios de pruebas útiles, conducentes y pertinentes para el efecto y en las oportunidades procesales previstas para ello.

Sin embargo, podrá notar el Despacho que la parte actora pretende probar el presente hecho a partir de una declaración extraproceso, prueba documental que no es idónea para demostrar la relación que enrostra el señor William David Perea Montaño y la señora Yuri Vanessa Tenorio Valencia. Por lo que, no podrá perder de vista el Despacho que la parte demandante no se encuentra facultada para constituir su propia prueba de conformidad con el principio universal del Derecho y en este sentido al ser una declaración en la que intervienen dos personas que actúan como parte demandante dentro del presente proceso dicha probanza no tiene mérito probatorio alguno. En consecuencia, se observa una clara falta de legitimación en la causa por activa de la señora Yuri Vanessa Tenorio Valencia, ya que no se presenta ninguna prueba que respalde su relación con el asunto en cuestión, lo que le impide solicitar indemnización alguna.

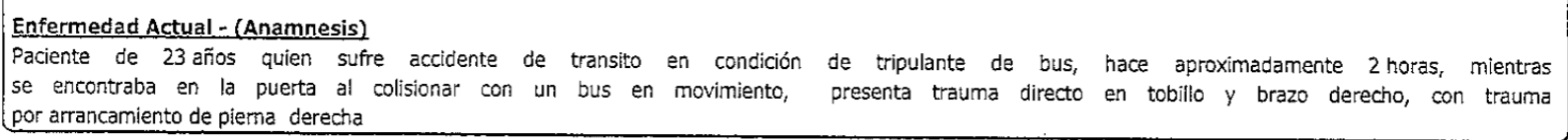
**FRENTE AL HECHO “4”:** No me consta lo afirmado en este hecho por la parte demandante, pues se trata de circunstancias totalmente ajenas y desconocidas por la COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A., Compañía Aseguradora sin relación alguna con los hechos expuestos. En todo caso y sin perjuicio de lo anterior, la parte actora deberá acreditar su dicho debida y suficientemente, conforme a los medios de pruebas útiles, conducentes y pertinentes para el efecto y en las oportunidades procesales previstas para ello.

**FRENTE AL HECHO “5”:** No me consta lo afirmado en este hecho por la parte demandante, pues se trata de circunstancias totalmente ajenas y desconocidas por la COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A., Compañía Aseguradora sin relación alguna con los hechos expuestos. En todo caso y sin perjuicio de lo anterior, la parte actora deberá acreditar su dicho debida y suficientemente, conforme a los medios de pruebas útiles, conducentes y pertinentes para el efecto y en las oportunidades procesales previstas para ello.

**FRENTE AL HECHO “6”:** No me consta lo afirmado en este hecho por la parte demandante, pues se trata de circunstancias totalmente ajenas y desconocidas por la COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A., Compañía Aseguradora sin relación alguna con los hechos expuestos. En todo caso y sin perjuicio de lo anterior, la parte actora deberá acreditar su dicho debida y suficientemente, conforme a los medios de pruebas útiles, conducentes y pertinentes para el efecto y en las oportunidades procesales previstas para ello.

**FRENTE AL HECHO “7.”:** No me consta lo afirmado en este hecho por la parte demandante, pues se trata de circunstancias totalmente ajenas y desconocidas por la COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A., Compañía Aseguradora sin relación alguna con los hechos expuestos. En todo caso y sin perjuicio de lo anterior, la parte actora deberá acreditar su dicho debida y suficientemente, conforme a los medios de pruebas útiles, conducentes y pertinentes para el efecto y en las oportunidades procesales previstas para ello.

Sin embargo, note su señoría, como la parte demandante no allega siquiera una certificación laboral, comprobante de ingreso, contrato de prestación de servicios, declaración de impuestos, o algún otro elemento probatorio que pudiese dar razones de juicio al Despacho para poder determinar que en efecto el señor Willian David Perea al momento del accidente laboraba como mensajero y devengaba los ingresos que afirma en su escrito de demanda. Esta manifestación resalta una incongruencia significativa entre lo alegado por el demandante y lo registrado en la historia clínica, donde se señala que el demandante se desempeñaba como ayudante de buseta, como se observa:





En consecuencia, dado que la única prueba existente en el proceso demuestra que el señor **William David Perea** era tripulante de bus, el accidente en cuestión debe considerarse de naturaleza laboral. Esto implica que el presente proceso debería ser tramitado ante la jurisdicción laboral, y no ante la jurisdicción civil. Por lo tanto, no asiste razón alguna para que este asunto se ventile en el ámbito civil, ya que, al probarse la relación laboral, el reclamo debió haberse planteado dentro del marco correspondiente de la seguridad social y el derecho laboral, tal como lo establece la normativa vigente.

**FRENTE AL HECHO “8.”:** No me consta lo afirmado en este hecho por la parte demandante, pues se trata de circunstancias totalmente ajenas y desconocidas por la COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A., Compañía Aseguradora sin relación alguna con los hechos expuestos. En todo caso y sin perjuicio de lo anterior, la parte actora deberá acreditar su dicho debida y suficientemente, conforme a los medios de pruebas útiles, conducentes y pertinentes para el efecto y en las oportunidades procesales previstas para ello.

No obstante, tenga en cuenta Señor Juez que, así como lo afirma el extremo actor, el señor William David Perea Montaño se movilizaba en el vehículo de placas SPY096, lo cual deberá tenerse por confesado bajo el marco de lo dispuesto en el artículo 193 del del Código General del Proceso. Lo anterior es de fundamental importancia debido a que dentro del Informe Policial de Accidente de Tránsito (IPAT) No. A001403214 se estableció la hipótesis No. 154 que corresponde a “*transitar con las puertas abiertas”* y la No. 157 *“no estar atentos a los demás actores viales”*; ambas hipótesis atribuibles al conductor de este vehículo.

Así las cosas, resulta incontrovertible que recae sobre el señor Juan Camilo Salinas Valencia la responsabilidad del accidente, en tanto fue quien desatendiendo las medidas mínimas necesarias de prevención y seguridad no estuvo atento a los demás actores viales, es decir que, de manera voluntaria, fue el conductor del vehículo SPY096, quien asumió un riesgo que a la postre se materializó en las lesiones sufridas por el señor William David Perea Montaño, pues decidió conducir vehículo de servicio público, violando las normas de tránsito existentes, con lo cual, sumado a que la conducción de vehículos está considerada como una actividad de alto riesgo, se tiene que aumentó de manera desproporcionada el riesgo permitido, siendo que el mismo fue el generador de la situación de peligro para el bien jurídico de la vida e integridad personal.

Aunado a lo anterior, con los fundamentos fácticos de la demanda y las pruebas documentales obrantes del proceso, resulta evidente que el señor William David Perea Montaño se movilizaba como tripulante del vehículo de placas SPY096, es decir, que éste agente transitaba en un vehículo con las puertas abiertas exponiéndose a su propio riesgo y actuando de forma negligente e imprudente, rompiendo el nexo de causalidad siendo la causa determinante de las lesiones que reprocha en su demanda, pues se verifica que los hechos se perfeccionaron por su propio actuar imprudente y negligente.

En este orden de cosas, teniendo en cuenta que mi representada es vinculada al proceso en virtud del contrato de seguro que ampara al vehículo de placas SKR 112, no existe prueba de la supuesta responsabilidad atribuida al conductor del vehículo asegurado, y por lo tanto, no es posible acreditar los elementos establecidos en el artículo 1077 del Código de Comercio para hacer exigible la obligación indemnizatoria en cabeza de la compañía de seguros que represento.

**FRENTE AL HECHO “10.”:** No me consta de manera directa lo afirmado en este hecho. Sin embargo, de acuerdo con el contenido del IPAT allegado al expediente se tiene que en efecto el señor Julián David Caicedo Encarnación se desplazaba como conductor del vehículo de placas SKR112. Sin perjuicio de lo anterior, no podrá perder de vista el Despacho que dentro del Informe Policial de Accidente de Tránsito (IPAT) No. A001403214 se estableció la hipótesis No. 154 que corresponde a “*transitar con las puertas abiertas”* y la No. 157 “no estar atentos a los demás actores viales”; ambas hipotesis atribuibles al conductor del vehículo de placas SPY 096.

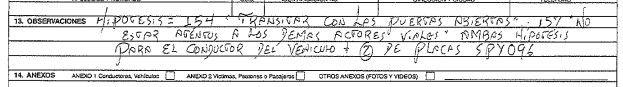
En este orden de cosas, teniendo en cuenta que mi representada es vinculada al proceso en virtud del contrato de seguro que ampara al vehículo de placas SKR112, no existe prueba de la supuesta responsabilidad atribuida al conductor del vehículo asegurado, y por lo tanto, no es posible acreditar los elementos establecidos en el artículo 1077 del Código de Comercio para hacer exigible la obligación indemnizatoria en cabeza de la compañía de seguros que represento.

**FRENTE AL HECHO “11.”:** No me consta de manera directa lo afirmado en este hecho. Sin embargo, de acuerdo con el contenido del IPAT allegado al expediente se tiene que en efecto el señor Juan Camilo Salinas Valencia se desplazaba como conductor del vehículo de placas SPY096 y fue su actuar la causa determinante en la producción del daño.

Para este punto, se reitera al Despacho que la responsabilidad por la ocurrencia del accidente recae exclusivamente en el señor Juan Camilo Salinas Valencia, conductor del vehículo de placas SPY096.

**FRENTE AL HECHO “12”:** No me consta que el pasado 16 de mayo 2022, en la dirección indicada en este hecho, los vehículos SPY096 y SKR112 hubiesen sido colisionado, y tampoco las circunstancias de tiempo, modo o lugar que enmarcaron el accidente de tránsito descrito. Lo anterior debido a que son premisas fácticas que exceden el conocimiento de mi representada como compañía de seguros, motivo por el cual la parte actora deberá probar su dicho de acuerdo a la carga dinámica de la prueba que le asiste.

No obstante no podrá perder de vista el Despacho que dentro del Informe Policial de Accidente de Tránsito (IPAT) No. A001403214 se estableció la hipótesis No. 154 que corresponde a “*transitar con las puertas abiertas”* y la No. 157 “no estar atentos a los demás actores viales”; ambas hipótesis atribuibles al conductor del vehículo de placas SPY 096. Como se observa en la siguiente imagen:



**Transcripción literal: *“****Hipótesis 154 “transitar con las puertas abiertas”. 157 “no estar atentos a los demás actores viales” ambas hipótesis para el conductor del vehículo #2 de placas SPY 096”*

Así mismo, notará su señoría que de acuerdo con los golpes descritos en el vehículo de placas SKR 112, los mismos se ocasionan en el bómper trasero lado izquierdo, paral trasero izquierdo y otros por determinar. Por lo que, por inferencia lógica y aplicación de las reglas de la experiencia, no hubo injerencia de este vehículo en el accidente de tránsito y quien tuvo el factor determinante en la colisión fue el vehículo de placas SPY 096 como acertadamente lo describió el agente Alonso Caicedo Albornoz.

Aunado a lo anterior, resulta incontrovertible que de acuerdo con los fundamentos fácticos de la demanda y las pruebas documentales obrantes del proceso, el señor William David Perea Montaño se movilizaba como pasajero del vehículo de placas SPY 096, es decir, que éste agente transitaba en un vehículo con las puertas abiertas exponiéndose a su propio riesgo y actuando de forma negligente e imprudente, rompiendo el nexo de causalidad siendo la causa determinante de las lesiones que reprocha en su demanda. No obstante, al margen de los argumentos expuestos, deberá tener en cuenta el Despacho que el nexo de causalidad respecto de la conducta del conductor del vehículo de placas SKR 112 se rompe, por la participación e incidencia que tuvo sobre la ocurrencia del accidente, el señor Juan Camilo Salinas Valencia, conductor del vehículo de placas SPY 096.

En este orden de cosas, teniendo en cuenta que mi representada es vinculada al proceso en virtud del contrato de seguro que ampara al vehículo de placas SKR 112, no existe prueba de la supuesta responsabilidad atribuida al conductor del vehículo asegurado, y por no tanto, no es posible acreditar los elementos establecidos en el artículo 1077 del Código de Comercio para hacer exigible la obligación indemnizatoria en cabeza de la compañía de seguros que represento.

**FRENTE AL HECHO “13”:** No me consta lo aducido por el extremo actor en el presente hecho en virtud de que es una afirmación sin soporte probatorio alguno pues no hay dentro del expediente probanza alguna que determine que las presuntas lesiones sufridas por el señor William David Perea hubiesen sido como consecuencia de una lámina de metal. Adicionalmente, es circunstancia totalmente ajena a la actividad que ejerce mi representada, motivo por el cual la parte actora deberá probar su dicho de acuerdo a la carga dinámica de la prueba que le asiste.

En todo caso, se reitera que, teniendo en cuenta que mi representada es vinculada al proceso en virtud del contrato de seguro que ampara al vehículo de placas SKR112, y que no existe prueba de la supuesta responsabilidad atribuida al conductor del vehículo asegurado. En ese orden de ideas, no existe motivo alguno por el cual se pueda imputar condena alguna al asegurado.

**FRENTE AL HECHO “14”:** No es cierto. Lo aquí expuesto atiende a afirmaciones temerarias que carecen abiertamente de sustento probatorio.Dentro del Informe Policial de Accidente de Tránsito (IPAT) No. A001403214 se estableció la hipótesis No. 154 que corresponde a “*transitar con las puertas abiertas”* y la No. 157 *“no estar atentos a los demás actores viales*”; ambas hipótesis atribuibles únicamente al conductor del vehículo de placas SPY096.

Además, es importante destacar que el extremo actor ha intentado sustentar su demanda, de manera arbitraria y sin ningún tipo de sustento, pues el extremo actor aduce la supuesta comisión de infracciones de tránsito tales como incorporarse de forma imprudente a la vía, exceso de velocidad, falta de precaución, entre otras, que no han sido contempladas por el agente de tránsito, quien es la autoridad competente para determinar las circunstancias del accidente. Así, Los demandantes no poseen la capacidad ni el conocimiento técnico-científico necesario para realizar una valoración precisa de las circunstancias bajo las cuales ocurrió el siniestro, y no allegan ninguna prueba técnica que acredite su decir. Por lo tanto, las imputaciones formuladas por los demandantes, son simplemente juicios de valor que no tienen una justificación sólida. Por tanto, estas imputaciones deben ser desestimadas, ya que carecen de las pruebas necesarias para ser consideradas en este proceso.

**FRENTE AL HECHO “15”:** No me consta lo afirmado en este hecho por la parte demandante, pues se trata de circunstancias totalmente ajenas y desconocidas por la COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A., Compañía Aseguradora sin relación alguna con los hechos expuestos. En todo caso y sin perjuicio de lo anterior, la parte actora deberá acreditar su dicho debida y suficientemente, conforme a los medios de pruebas útiles, conducentes y pertinentes para el efecto y en las oportunidades procesales previstas para ello.

**FRENTE AL HECHO “16”:** No me consta directamente lo afirmado en este hecho. Sin embargo, de acuerdo con el certificado vehicular del Certificado de Tradición emitido por la Secretaría de Movilidad, el señor José Alexander Torres Sánchez fue propietario del vehículo de placas SKR 112 desde el 01 de marzo del 2021 al 12 de octubre del 2022.

**FRENTE AL HECHO “17”:** No me consta lo afirmado en este hecho por la parte demandante, pues se trata de circunstancias totalmente ajenas y desconocidas por la COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A., Compañía Aseguradora sin relación alguna con los hechos expuestos. En todo caso y sin perjuicio de lo anterior, la parte actora deberá acreditar su dicho debida y suficientemente, conforme a los medios de pruebas útiles, conducentes y pertinentes para el efecto y en las oportunidades procesales previstas para ello.

**FRENTE AL HECHO “18”:** Es cierto únicamente lo relativo a la existencia de las pólizas que en este numeral se relacionan. No obstante, se aclara que el hecho de que la empresa transportadora haya tomado diversas pólizas con mi representada no implica *per se* que nazca a cargo de esta última obligación indemnizatoria alguna debido a que debe verificarse la ocurrencia del riesgo asegurado y la cuantía de la pérdida, deber que la parte demandante no ha cumplido, particularmente en relación con el evento asegurado en las pólizas de responsabilidad civil extracontractual, de cara a las cuales no se ha probado que el asegurado haya incurrido en un actuar negligente que derive la existencia de esa clase de responsabilidad.

De otro lado, las pólizas de responsabilidad civil contractual (RCC) básica y en exceso no son susceptibles de afectarse en forma alguna ya que lo que se discute en el proceso es la eventual existencia de responsabilidad civil extracontractual en cabeza de la asegurada, por lo que, frente a dichos aseguramientos, como se abordará en los respectivos medios exceptivos, no existe cobertura material respecto de los hechos que aquí se ventilan.

**FRENTE AL HECHO “19”:** No es un hecho sino la interpretación equívoca y errónea que hace el apoderado del extremo actor del artículo 1128 del Código de Comercio. Facultad, que en el marco de un proceso judicial, sólo le corresponde al operador jurisdiccional. Ahora bien, note su señoría como dentro del presente hecho el actor no es claro en referir a cuál Póliza hace referencia pues como lo manifiesta en hechos anteriores, existe otro contrato de seguro que ampara el vehículo de placas SPY096.

Ahora, aun cuando carece de claridad el presente fundamento fáctico, en caso de que el demandante haga referencia al contrato de seguro por el cual se vincula a mi representada a este caso, deberá tenerse en cuenta que en virtud del artículo 1056 del Código de Comercio no puede exigirse la afectación de este seguro para amparar los eventos que describe el demandante, luego que la Compañía Mundial de Seguros S.A.no asumió el riego de las costas del proceso a las que hace referencia el demandante y demás, por tanto, se reitera, no se puede exigir su cobertura en concordancia con lo dispuesto, de igual manera, en el artículo 1602 del Código Civil.

Pese a lo anterior, si lo que el demandante pretende es solventar los gastos procesales en lo que incurrió el demandante bajo el argumento de la existencia de un contrato de seguro, deberá tener en cuenta que las coberturas pactadas en el mismo sólo son exigibles acreditándose los supuestos establecidos en el artículo 1077 del Código de Comercio. En este sentido la parte actora no podrá reclamar la exigibilidad de la obligación indemnizatoria por cuanto dentro del presente asunto la responsabilidad del accidente de tránsito es atribuible a la conducta ejercida por el conductor del vehículo de placas SPY096.

**FRENTE AL HECHO “20”:** No me constan las presuntas lesiones que sufrió el señor William David Perea Montaño como consecuencia del accidente de tránsito referido en el escrito de demanda, debido a que la compañía de seguros que represento no funge como una institución prestadora del servicio de salud o tiene alguna relación con la institución médica donde fue atendido el demandante. Por lo cual, solicito al Despacho realizar un juicioso análisis sobre los medios probatorios allegados al expediente pues no es posible verificar de forma fehaciente lo aducido por el actor de conformidad con el artículo 167 del Código General del Proceso. En todo caso, se reitera que, teniendo en cuenta que mi representada es vinculada al proceso en virtud del contrato de seguro que ampara al vehículo de placas SKR112, y que no existe prueba de la supuesta responsabilidad atribuida al conductor del vehículo asegurado, no es posible imponer condena alguna en contra de mi procurada.

**FRENTE AL HECHO “21”:** No me constan las presuntas lesiones que sufrió el señor William David Perea Montaño como consecuencia del accidente de tránsito referido en el escrito de demanda, debido a que la compañía de seguros que represento no funge como una institución prestadora del servicio de salud o tiene alguna relación con la institución médica donde fue atendido el demandante. Por lo cual, solicito al Despacho realizar un juicioso análisis sobre los medios probatorios allegados al expediente pues no es posible verificar de forma fehaciente lo aducido por el actor de conformidad con el artículo 167 del Código General del Proceso. En todo caso, se reitera que, teniendo en cuenta que mi representada es vinculada al proceso en virtud del contrato de seguro que ampara al vehículo de placas SKR112, no es posible imponer condena alguna en contra de mi procurada.

**FRENTE AL HECHO “22”:** No me consta lo afirmado en este hecho por la parte demandante, pues se trata de circunstancias totalmente ajenas y desconocidas por la COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A., Compañía Aseguradora sin relación alguna con los hechos expuestos. En todo caso y sin perjuicio de lo anterior, la parte actora deberá acreditar su dicho debida y suficientemente, conforme a los medios de pruebas útiles, conducentes y pertinentes para el efecto y en las oportunidades procesales previstas para ello.

En virtud de lo anterior, es deber procesal del actor probar lo referido bajo fundamentos probatorios fehacientes y suficientes. Sin embargo, desde ya, en virtud de que se trata de un dictamen pericial ejerceremos dentro del acápite correspondiente la contradicción del mismo y la comparecencia de los galenos David Andrés Álvarez Rincón, Zoilo Rosendo Delvasto Ricaurte y José Luis Reyes Martínez, con el fin de que acrediten el contenido del mismo y expliquen al Despacho la metodología, análisis y conclusiones de la revisión efectuada al señor William David Perea Montaño, esto pues el propio establece “*Dictamen NO válido para reclamaciones ante SOAT u otras aseguradoras, válido ÚNICAMENTE en los términos previstos en el Código de Procedimiento Penal. Artículo 20 del Decreto 1352 de 2013”*.

**FRENTE AL HECHO “23.”:** De la redacción sintáctica de este numeral se desprenden varias apreciaciones, frente a las que me pronunciaré de la siguiente manera:

* Se aclara que por parte del conductor del vehículo de placa SKR112, no hubo ninguna imprudencia o impericia. Se reitera que, dentro del Informe Policial de Accidente de Tránsito (IPAT) No. A001403214 se estableció la hipótesis No. 154 que corresponde a “*transitar con las puertas abiertas”* y la No. 157 “no estar atentos a los demás actores viales”; ambas hipótesis atribuibles al conductor del vehículo de placas SPY096. Así mismo, notará su señoría que de acuerdo con los golpes descritos en el vehículo de placas SKR 112, los mismos se ocasionan en el bómper trasero lado izquierdo, paral trasero izquierdo y otros por determinar. Por lo que, por ilación lógica y aplicación de las reglas de la experiencia, no hubo injerencia de este vehículo en el accidente de tránsito y quien tuvo el factor determinante en la colisión fue el vehículo de placas SPY096 como acertadamente lo describió el agente de tránsito, Alonso Caicedo Albornoz. En este sentido teniendo en cuenta que mi representada es vinculada al proceso en virtud del contrato de seguro que ampara al vehículo de placas SKR112, no existe responsabilidad de conductor del vehículo asegurado, y por lo tanto, no es posible acreditar los elementos establecidos en el artículo 1077 del Código de Comercio para hacer exigible la obligación indemnizatoria en cabeza de la compañía de seguros que represento.
* Aunado a lo anterior, resulta incontrovertible que de acuerdo con los fundamentos fácticos de la demanda y las pruebas documentales obrantes del proceso, el señor William David Perea Montaño se movilizaba como trabajador del vehículo de placas SPY 096, es decir, que éste agente transitaba en un vehículo con las puertas abiertas, yendo colgado de la puerta del automotor, exponiéndose a su propio riesgo y actuando de forma negligente e imprudente, rompiendo el nexo de causalidad siendo la causa determinante de las lesiones que reprocha en su demanda, pues su actuar imprudente y negligente es la razón por la que se perfecciona el hecho demandado. No obstante, al margen de los argumentos expuestos, deberá tener en cuenta el Despacho que, en cualquier caso el nexo de causalidad respecto de la conducta del conductor del vehículo de placas SKR 112 se rompe, por la participación e incidencia que tuvo sobre la ocurrencia del accidente, el señor Juan Camilo Salinas Valencia, conductor del vehículo de placas SPY096.
* No me constan las circunstancias descritas en este hecho respecto de la presunta afectación causada a los demandantes como resultado del accidente del 16 de mayo del 2022. Las afirmaciones del actor carecen de pruebas y son desconocidas por mi representada. En virtud del artículo 167 del Código General del Proceso, el actor deberá probar sus dichos con las pruebas pertinentes y conducentes. En cualquier caso, es necesario resaltar que el daño a la vida de relación se reconoce únicamente a la víctima directa.

**FRENTE AL HECHO “24”:** de la redacción sintáctica de este numeral se desprenden varias apreciaciones, frente a las que me pronunciaré de la siguiente manera:

* Se aclara que por parte del conductor del vehículo de placa SKR112, no hubo ninguna imprudencia o impericia. Se reitera que, dentro del Informe Policial de Accidente de Tránsito (IPAT) No. A001403214 se estableció la hipótesis No. 154 que corresponde a “*transitar con las puertas abiertas”* y la No. 157 “no estar atentos a los demás actores viales”; ambas hipótesis atribuibles al conductor del vehículo de placas SPY096. Así mismo, notará su señoría que de acuerdo con los golpes descritos en el vehículo de placas SKR 112, los mismos se ocasionan en el bómper trasero lado izquierdo, paral trasero izquierdo y otros por determinar. Por lo que, por ilación lógica y aplicación de las reglas de la experiencia, no hubo injerencia de este vehículo en el accidente de tránsito y quien tuvo el factor determinante en la colisión fue el vehículo de placas SPY096 como acertadamente lo describió el agente de tránsito, Alonso Caicedo Albornoz. En este sentido teniendo en cuenta que mi representada es vinculada al proceso en virtud del contrato de seguro que ampara al vehículo de placas SKR112, no existe responsabilidad de conductor del vehículo asegurado, y por lo tanto, no es posible acreditar los elementos establecidos en el artículo 1077 del Código de Comercio para hacer exigible la obligación indemnizatoria en cabeza de la compañía de seguros que represento.
* Aunado a lo anterior, resulta incontrovertible que de acuerdo con los fundamentos fácticos de la demanda y las pruebas documentales obrantes del proceso, el señor William David Perea Montaño se movilizaba como trabajador del vehículo de placas SPY 096, colgando de las puertas del vehículo cuando estas se encontraban abiertas, exponiéndose a su propio riesgo y actuando de forma negligente e imprudente, rompiendo el nexo de causalidad siendo la causa determinante de las lesiones que reprocha en su demanda. No obstante, al margen de los argumentos expuestos, deberá tener en cuenta el Despacho que el nexo de causalidad respecto de la conducta del conductor del vehículo de placas SKR 112 se rompe, por la participación e incidencia que tuvo sobre la ocurrencia del accidente, el señor Juan Camilo Salinas Valencia, conductor del vehículo de placas SPY 096.
* No me constan las circunstancias descritas en este hecho respecto de la presunta afectación causada a los demandantes como resultado del accidente del 16 de mayo del 2022. Las afirmaciones del actor carecen de pruebas y son desconocidas por mi representada. En virtud del artículo 167 del Código General del Proceso, el actor deberá probar sus dichos con las pruebas pertinentes y conducentes.

**FRENTE AL HECHO “25”:** No me constan las circunstancias descritas en este hecho debido a que las afirmaciones del actor carecen de pruebas y son desconocidas por mi representada. En virtud del artículo 167 del Código General del Proceso, el actor deberá probar sus dichos con las pruebas pertinentes y conducentes. Así mismo se recalcan los argumentos mencionados frente a los hechos anteriores, pues el agente productor del daño fue la propia víctima, o en su defecto, el conductor del vehículo de placas SPY096.

**FRENTE AL HECHO “26”:** No me constan las circunstancias descritas en este hecho debido a que las afirmaciones del actor carecen de pruebas y son desconocidas por mi representada. En virtud del artículo 167 del Código General del Proceso, el actor deberá probar sus dichos con las pruebas pertinentes y conducentes. Así mismo se recalcan los argumentos mencionados frente a los hechos anteriores, pues el agente productor del daño fue la propia víctima, o en su defecto, el conductor del vehículo de placas SPY096.

**FRENTE AL HECHO “27.”:** No me constan las circunstancias descritas en este hecho debido a que las afirmaciones del actor carecen de pruebas y son desconocidas por mi representada. En virtud del artículo 167 del Código General del Proceso, el actor deberá probar sus dichos con las pruebas pertinentes y conducentes. Así mismo se recalcan los argumentos mencionados frente a los hechos anteriores, pues el agente productor del daño fue la propia víctima, o en su defecto, el conductor del vehículo de placas SPY096.

**FRENTE AL HECHO “28.”:** Es cierto, debido a que la responsabilidad del accidente de tránsito no corresponde en forma alguna al extremo pasivo dentro del presente proceso, en concreto no corresponde al conductor del vehículo de placa SKR112, a su propietario, ni a mi prohijada. Por el contrario no puede pasar inadvertido para el Despacho que dentro del asunto en referencia obran pruebas fehacientes y contundentes que corroboran de forma completa, lógica y certera la responsabilidad de la víctima como factor fundamental y exclusivo en la ocurrencia del accidente de tránsito, o en su defecto, la falta de cuidado, imprudencia y negligencia por parte del conductor del vehículo de placas SPY096.

# FRENTE A LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA

Me opongo a que prosperen las pretensiones declarativas y de condena, principales y subsidiarias, solicitadas por la parte actora en su escrito de demanda, puesto que, las mismas carecen de fundamentos fácticos y jurídicos que hagan viable su prosperidad, comoquiera que los demandantes pretenden el pago de una indemnización sin que una obligación de esa índole hubiere nacido en cabeza de los demandados, entre otras razones, porque en materia de indemnización de perjuicios además de que el daño y la cuantía del mismo deben estar plenamente comprobados y por ello no es posible que los presuntos daños que presenta la parte actora puedan atribuírsele a la pasiva de este proceso.

# PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LAS PRETENSIONES PRINCIPALES

**FRENTE A LA PRETENSIÓN “5.1.”:** ME OPONGOa la prosperidad de esta pretensión, toda vez que no es posible una declaratoria de responsabilidad en cabeza del conductor del vehículo de placas SKR112, de su propietario, ni de la Compañía Mundial de Seguros S.A., en la ocurrencia del accidente acaecido el 16 de mayo de 2022. Es importante indicar que dentro del Informe Policial de Accidente de Tránsito (IPAT) No. A001403214 se estableció la hipótesis No. 154 que corresponde a “*transitar con las puertas abiertas”* y la No. 157 *“no estar atentos a los demás actores viales”*; ambas hipótesis atribuibles al conductor del vehículo de placas SPY 096. Teniendo en cuenta esto, no se encuentra demostrada la responsabilidad civil del conductor del vehículo de placas SKR112, por cuanto no tuvo ninguna injerencia en la producción del accidente, siendo esta solo atribuible al al conductor del vehículo de placas SPY 096. De contera, tampoco resulta atribuible a mi mandante ninguna obligación indemnizatoria a cargo de la póliza, luego que no se probó la ocurrencia de un siniestro, en los términos de los artículos 1056 y 1077 del Código de Comercio.

Frente a este último aspecto es importante resaltarle al Despacho que no puede declararse a Compañía Mundial de Seguros como responsable solidariamente, pues es claro que la solidaridad solo tiene origen en una convención de las partes, en la ley y en el testamento, y los contratos de seguro involucrados en el litigio No. C2000156167, C2000156172, C2000156170, C2000156173, no indica en sus textos, ni en las condiciones particulares o generales que los rigen, que la obligación condicional asumida por Compañía Mundial de Seguros S.A., sea solidaria. En el caso que nos ocupa, Compañía Mundial de Seguros S.A. ostenta calidad de demandada directa, pero la misma no implica que a la aseguradora se le haga extensible la solidaridad en una remota condena en contra del propietario, el conductor del vehículo de placa SKR 112, o la transportadora o afiliadora, pues el contrato de seguro no es solidario, ya que la actividad aseguradora no es una de las actividades catalogadas como peligrosas y la solidaridad debe estar expresamente pactada en el contrato o definida en la ley, situaciones que no ocurren en el presente litigio.

**FRENTE A LA PRETENSIÓN 5.2:** ME OPONGOa la prosperidad de esta pretensión por carecer de fundamento fáctico y jurídico. Lo anterior, comoquiera que es una pretensión ligada a la primera y no reconociéndose, ésta tampoco tiene vocación de prosperidad. En atención a ello, reitero, no existen elementos fácticos ni jurídicos que permitan determinar que mi procurada sea civil y solidariamente responsable de los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales presuntamente sufridos por los demandantes.

**FRENTE A LA PRETENSIÓN 5.3:** ME OPONGOa la prosperidad de esta pretensión por carecer de fundamento fáctico y jurídico. Lo anterior, comoquiera que es una pretensión subsidiaria de las anteriores que, por las razones ya expuestas, no tienen vocación de prosperidad. Adicionalmente debe increparse que, en el remoto e irreal caso en que se considere la pretensión esbozada por el actor, de acuerdo con el artículo 1080 del Código de Comercio la aseguradora debe pagar la indemnización dentro del mes siguiente a la fecha que el asegurado o beneficiario acredite la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida. En consecuencia, dado que el extremo activo no puede demostrar la responsabilidad del vehículo asegurado en la ocurrencia del accidente de tránsito entonces no es posible acreditar el supuesto normativo de la norma previamente mencionada, y como consecuencia lógica, se da al traste la pretensión por concepto de intereses. Se recuerda que la Corte Suprema de Justicia, en sentencia SC1947-2021 dispuso que la eventual causación de los indicados réditos será a partir de la ejecutoria de la sentencia.

**FRENTE A LA PRETENSIÓN “5.4”:** ME OPONGOa la prosperidad de esta petición de condena en costas del proceso y agencias en derecho, reitero mi oposición, toda vez que, se repite, mi representada no tienen ninguna obligación indemnizatoria derivada de los hechos descritos en el escrito genitor. Por tal motivo solicito que, en vista de que no se identifica ninguna actuación que refleje la necesidad de un reproche jurídico por parte de la demandada, se condene en costas a los demandantes, pues sometió al extremo pasivo y a mi prohijada, sin justificación ni respaldo probatorio alguno, al agotamiento innecesario de estas instancias judiciales.

**FRENTE A LA PRETENSIÓN “5.5.”:** ME OPONGOa la prosperidad de esta pretensión por carecer de fundamento fáctico y jurídico. Lo anterior, comoquiera que es una pretensión ligada a la primera y no reconociéndose, ésta tampoco tiene vocación de prosperidad. En atención a ello, reitero, no existen elementos fácticos ni jurídicos que permitan determinar que mi procurada sea civil y solidariamente responsable de los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales presuntamente sufridos por los demandantes.

**FRENTE A LA PRETENSION “5.5.2. LUCRO CESANTE”:** ME OPONGOa que se declaren probados los perjuicios derivados del lucro cesante solicitados por la parte demandante, por cuanto resultaba necesario aportar medios probatorios tendientes a acreditar los ingresos percibidos por el señor William David Perea Montaño para la fecha del accidente, así como prueba que demuestre la actividad económica desarrollada por él. De modo que, siguiendo los derroteros jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia, ante la ausencia de certeza del lucro, es decir, la existencia real, tangible y no meramente hipotética o eventual, es improcedente el reconocimiento de indemnización por esta tipología de perjuicios. En este sentido, no se halla acreditado el lucro cesante que pretende endilgar el demandante al extremo pasivo, debido a que: (i) En el expediente no reposa ningún certificado laboral o de ingresos o documento similar tendiente a acreditar la actividad laboral o económica del demandante; y (ii) El señor William David Perea no trabaja (pues lo contrario no se encuentra demostrado), ni genera ingresos, por lo tanto, los hechos del 16 de mayo del 2022 no afectaron en nada las condiciones económicas que antes tenía el demandante.

**FRENTE A LA PRETENSION “5.6.1. PERJUICIOS MORALES”:** ME OPONGOa la prosperidad de esta pretensión porque no hay lugar a la declaratoria de responsabilidad. Adicionalmente, me opongo a la cuantificación debido a que las sumas pretendidas bajo el concepto de daño moral son exageradas y no se encuentran delimitadas y enmarcadas de acuerdo con los lineamientos jurisprudenciales en los que en múltiples ocasiones se ha pronunciado la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, pues se solicitan valores que superan el baremo jurisprudencial de antaño decantado por el Órgano de Cierre en la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Civil. En efecto, siguiendo dichos derroteros, para la tasación de los perjuicios morales en casos análogos de lesiones, la Corte ha fijado reconocido sumas muy inferiores a las aquí pretendidas, incluso en casos de mayor gravedad como invalidez y muerte, es decir, la tasación propuesta está sobrestimada.

**FRENTE A LA PRETENSION “5.6.2. PERJUICIO A LA VIDA DE RELACIÓN”:** ME OPONGOa la prosperidad de esta pretensión por carecer de fundamentos fácticos y jurídicos. Es preciso resaltar que este tipo de perjuicios se reconoce única y exclusivamente a la víctima directa, por lo que dicha tasación económica es carente de fundamento y no debe ser considerada. La parte demandante pretende el reconocimiento de una indemnización que en realidad no sería procedente, por cuanto el daño a la vida en relación se desprende de su acreditación, carga que no ha cumplido la parte demandante. En efecto, la parte actora no acredita, argumenta, explica ni justifica de manera alguna la valoración sobre la tasación de dichas sumas de dinero, pues únicamente se limita a solicitar un monto a favor de William David Perea Montaño y sus familiares, sin que se argumente y/o sustente lo allí pretendido. Por otro lado, dentro del plenario no existen pruebas que permitan demostrar el daño a la vida de relación del demandante y, de todas maneras,las sumas pretendidas bajo este concepto son exageradas y no se encuentran delimitadas y enmarcadas de acuerdo a los lineamientos jurisprudenciales en los que en múltiples ocasiones se ha pronunciado la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. En el caso particular se trata de lesiones de menor gravedad que invalidez o un fallecimiento.

**FRENTE A LA PRETENSIÓN “5.6.3. DAÑO A LOS BIENES JURÍDICOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL (EN EL PRESENTE CASO, DAÑO A LA SALUD), LA SIGUIENTE SUMA DE DINERO”:** ME OPONGOpor cuanto dentro de la jurisdicción civil el daño a la salud o daño a los bienes jurídicos de especial protección constitucional no son reconocidos de forma autónoma, por lo cual de acuerdo con la doctrina probable de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, los mismos son improcedentes tratándose de un caso de responsabilidad civil extracontractual.

**FRENTE A LA PRETENSIÓN “5.6.4. DAÑO A LA PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD”:** ME OPONGO

porque, en definitiva, olvidó la parte demandante que para que se considere que se consumó una pérdida de oportunidad, la existencia del chance debe estar acreditada de forma suficiente, siendo esta una legítima oportunidad seria, verídica, real y actual, circunstancia que no sucedió, pues la demanda se caracteriza por su orfandad probatoria. Efectivamente, se destaca que no es procedente indemnizar una mera expectativa que ni siquiera se define en el escrito de demanda, circunstancia que implica necesariamente el fracaso de esta pretensión.

**FRENTE A LA PRETENSIÓN “5.8. INTERESES DE MORA”:** ME OPONGOpor cuanto los intereses moratorios se causan a partir del reconocimiento favorable de las pretensiones de la demanda y como estas no tienen vocación de prosperidad entonces no hay causa jurídica para la causación de dichos intereses.

**FRENTE A LA PRETENSIÓN “5.9. COSTAS Y EN AGENCIAS EN DERECHO”:** ME OPONGOa

la prosperidad de esta petición de condena en costas del proceso y agencias en derecho, reitero mi oposición, toda vez que, se repite, mi representada no tienen ninguna obligación indemnizatoria derivada de los hechos descritos en el escrito genitor. Por tal motivo solicito que, en vista de que no se identifica ninguna actuación que refleje la necesidad de un reproche jurídico por parte de la demandada, se condene en costas a los demandantes, pues sometió al extremo pasivo y a mi prohijada, sin justificación ni respaldo probatorio alguno, al agotamiento innecesario de estas instancias judiciales.

**FRENTE A LA PRETENSIÓN “5.10. INDEXACIÓN”:** ME OPONGOa la prosperidad de esta pretensión por carecer de fundamento fáctico y jurídico. Lo anterior, comoquiera que es una pretensión ligada a la primera y no reconociéndose, ésta tampoco tiene vocación de prosperidad.

Adicionalmente, esta pretensión es a todas luces anti-técnica. Ello, porque no puede acumularse la indexación monetaria con el pago de los intereses puesto que ambos conceptos tienen la misma finalidad, la cual es paliar el poder adquisitivo del dinero. Sobre este punto, la Corte Suprema de Justicia, en un caso que se puede aplicar análogamente al presente, afirmó:

*“(…) Puestas de ese modo las cosas, puede concluirse que la compatibilidad originaria de la corrección monetaria y de los intereses, depende, fundamentalmente, de la naturaleza y tipología de éstos, puesto que, si ellos son los civiles, nada impide que, in casu, se ordene el reajuste monetario de la suma debida.* ***Pero si el interés ya comprende este concepto (indexación indirecta), se resalta de nuevo, imponer la corrección monetaria, per se, equivaldría a decretar una doble –e inconsulta- condena por un mismo ítem****, lo que implicaría un grave quebranto de la ley misma, (…)”.[[1]](#footnote-1)* – (Subrayado y negrilla por fuera de texto)

Así las cosas, además de lo que ya se ha establecido, esta pretensión no debe ser tenida en cuenta pues la indexación de la moneda no se puede acumular con los intereses moratorios.

# PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LAS PRETENSIONES SUBSIDIARIAS

**FRENTE A LA PRETENSIÓN “5.1. DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL”:** Si bien expresamente la pretensión no está encaminada en contra de mi representada dentro de la misma se afirma que se pretende la responsabilidad *“con ocasión del accidente de tránsito causado por la imprudencia e impericia de los conductores de los vehículos de servicio público de placas* ***SKR 112*** *y SPY 096 el 16 de mayo del 2022”* y en este sentido ME OPONGOa la prosperidad de esta pretensión, toda vez que no es posible una declaratoria de responsabilidad en cabeza del conductor del vehículo de placa SKR112, de su propietario, ni de la Compañía Mundial de Seguros S.A., en la ocurrencia del accidente del pasado 16 de mayo de 2022. Es importante indicar que dentro del Informe Policial de Accidente de Tránsito (IPAT) No. A001403214 se estableció la hipótesis No. 154 que corresponde a “*transitar con las puertas abiertas”* y la No. 157 *“no estar atentos a los demás actores viales”*; ambas hipótesis atribuibles al conductor del vehículo de placas SPY 096. Teniendo en cuenta esto, no se encuentra demostrada la responsabilidad civil del conductor del vehículo SKR112, por cuanto no tuvo ninguna injerencia en la producción del accidente, siendo esta solo atribuible al conductor del vehículo de placas SPY 096. Por contera, tampoco resulta atribuible a mi mandante ninguna obligación indemnizatoria a cargo de la póliza, luego que no se probó la ocurrencia de un siniestro, en los términos de los artículo 1056 y 1077 del Código de Comercio.

**FRENTE A LA PRETENSIÓN “5.2. CONDENA DIRECTA A LA ASEGURADORA”:** NI ME OPONGO NI ACEPTOla prosperidad de esta pretensión por no ser presentada en contra de la compañía de seguros que represento. Sin embargo, comoquiera que es una pretensión ligada a la primera subsidiaria y no reconociéndose, ésta tampoco tiene vocación de prosperidad. Pese a lo anterior, se reitera que no existen elementos fácticos ni jurídicos que permitan determinar que mi procurada sea civil y solidariamente responsable de los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales presuntamente sufridos por los demandantes.

**FRENTE A LA PRETENSIÓN “5.3. CONDENA DE INTERESES MORATORIOS A LA ASEGURADORA”:** Si bien expresamente la pretensión no está encaminada en contra de mi representada dentro de la misma se solicita *“se condene a y a SBS Seguros S.A. (aseguradoras)(…)”* y en este sentido ME OPONGOa la prosperidad de esta pretensión por carecer de fundamento fáctico y jurídico. Lo anterior, comoquiera que es una pretensión subsidiaria de las anteriores que, por las razones ya expuestas, no tienen vocación de prosperidad. Adicionalmente debe increparse que, en el remoto e irreal caso en que se considere la pretensión esbozada por el actor, de acuerdo con el artículo 1080 del Código de Comercio la aseguradora debe pagar la indemnización dentro del mes siguiente a la fecha que el asegurado o beneficiario acredite la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida. En consecuencia, dado que el extremo activo no puede demostrar la responsabilidad del vehículo asegurado en la ocurrencia del accidente de tránsito entonces no es posible acreditar el supuesto normativo de la norma previamente mencionada, y como consecuencia lógica, se da al traste la pretensión por concepto de intereses. Se recuerda que la Corte Suprema de Justicia, en sentencia SC1947-2021 dispuso que la eventual causación de los indicados réditos será a partir de la ejecutoria del presente fallo.

**FRENTE A LA PRETENSIÓN “5.4. CONDENA DE COSTOS DEL PROCEO”:** Si bien expresamente la pretensión no está encaminada en contra de mi representada dentro de la misma se solicita *“se condene a a SBS Seguros S.A. (aseguradoras)(…)”* y en este sentido ME OPONGOa la prosperidad de esta petición de condena en costas del proceso y agencias en derecho, reitero mi oposición, toda vez que, se repite, mi representada no tienen ninguna obligación indemnizatoria derivada de los hechos descritos en el escrito genitor. Por tal motivo solicito que, en vista de que no se identifica ninguna actuación que refleje la necesidad de un reproche jurídico por parte de la demandada, se condene en costas a los demandantes, pues sometió al extremo pasivo y a mi prohijada, sin justificación ni respaldo probatorio alguno, al agotamiento innecesario de estas instancias judiciales.

**FRENTE A LA PRETENSIÓN “5.5. CONDENAR A PAGAR A TODOS LOS DEMANDADOS LOS SIGUIENTES RUBROS”:** NI ME OPONGO NI ACEPTOla prosperidad de esta pretensión por no ser presentada en contra de la compañía de seguros que represento. Sin embargo, comoquiera que es una pretensión ligada a la primera subsidiaria y no reconociéndose, ésta tampoco tiene vocación de prosperidad. Pese a lo anterior, se reitera que no existen elementos fácticos ni jurídicos que permitan determinar que mi procurada sea civil y solidariamente responsable de los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales presuntamente sufridos por los demandantes.

**FRENTE A LA PRETENSION “5.5.2. LUCRO CESANTE”:** Si bien expresamente la pretensión no está encaminada en contra de mi representada porque está ligada a la pretensión esbozada en el numeral 5.5. donde no se menciona a la compañía de seguros que represento, ME OPONGOa que se declaren probados los perjuicios derivados del lucro cesante solicitados por la parte demandante, por cuanto resultaba necesario aportar medios probatorios tendientes a acreditar los ingresos percibidos por William David Perea para la fecha del accidente, así como prueba que demuestre la actividad económica desarrollada por él. De modo que, siguiendo los derroteros jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia, ante la ausencia de certeza del lucro, es decir, la existencia real, tangible y no meramente hipotética o eventual, es improcedente el reconocimiento de indemnización por esta tipología de perjuicios. En este sentido, no se halla acreditado el lucro cesante que pretende endilgar el demandante al extremo pasivo, debido a que: (i) En el expediente no reposa ningún certificado laboral o de ingresos o documento similar tendiente a acreditar la actividad laboral o económica del demandante; (ii) El señor William David Perea no trabaja (pues lo contrario no se encuentra demostrado), ni genera ingresos, por lo tanto, los hechos del 16 de mayo del 2022 no afectaron en nada las condiciones económicas que antes tenía la demandante; y (iii) No se allega un dictamen de pérdida de capacidad laboral que determine de forma cierta el origen de alguna pérdida.

**FRENTE A LA PRETENSION “5.6.1. PERJUICIOS MORALES”:** Si bien expresamente la pretensión no está encaminada en contra de mi representada porque está ligada a la pretensión esbozada en el numeral 5.5. donde no se menciona a la compañía de seguros que represento, ME OPONGOa la prosperidad de esta pretensión porque no hay lugar a la declaratoria de responsabilidad. Adicionalmente, me opongo a la cuantificación debido a que las sumas pretendidas bajo el concepto de daño moral son exageradas y no se encuentran delimitadas y enmarcadas de acuerdo con los lineamientos jurisprudenciales en los que en múltiples ocasiones se ha pronunciado la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, pues se solicitan valores que superan el baremo jurisprudencial de antaño decantado por el Órgano de Cierre en la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Civil. En efecto, siguiendo dichos derroteros, para la tasación de los perjuicios morales en casos análogos de lesiones, la Corte ha fijado reconocido sumas muy inferiores a las aquí pretendidas, incluso en casos de mayor gravedad como invalidez y muerte, es decir, la tasación propuesta está sobrestimada.

**FRENTE A LA PRETENSION “5.6.2. PERJUICIO A LA VIDA DE RELACIÓN”:** Si bien expresamente la pretensión no está encaminada en contra de mi representada porque está ligada a la pretensión esbozada en el numeral 5.5. donde no se menciona a la compañía de seguros que represento, ME OPONGOa la prosperidad de esta pretensión por carecer de fundamentos fácticos y jurídicos. Es preciso resaltar que este tipo de perjuicios se reconoce única y exclusivamente a la víctima directa, por lo que dicha tasación económica es carente de fundamento y no debe ser considerada. La parte demandante pretende el reconocimiento de una indemnización que en realidad no sería procedente, por cuanto el daño a la vida en relación se desprende de su acreditación, carga que no ha cumplido la parte demandante. En efecto, la parte actora no acredita, argumenta, explica ni justifica de manera alguna la valoración sobre la tasación de dichas sumas de dinero, pues únicamente se limita a solicitar un monto a favor de William David Perea Montaño y sus familiares, sin que se argumente y/o sustente lo allí pretendido. Por otro lado, dentro del plenario no existen pruebas que permitan demostrar el daño a la vida de relación del demandante y, de todas maneras, las sumas pretendidas bajo este concepto son exageradas y no se encuentran delimitadas y enmarcadas de acuerdo a los lineamientos jurisprudenciales en los que en múltiples ocasiones se ha pronunciado la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. En el caso particular se trata de lesiones de menor gravedad que invalidez o un fallecimiento.

**FRENTE A LA PRETENSIÓN “5.6.3. DAÑO A LOS BIENES JURÍDICOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL (EN EL PRESENTE CASO, DAÑO A LA SALUD), LA SIGUIENTE SUMA DE DINERO”:** Si bien expresamente la pretensión no está encaminada en contra de mi representada porque está ligada a la pretensión esbozada en el numeral 5.5. donde no se menciona a la compañía de seguros que represento, ME OPONGOpor cuanto dentro de la jurisdicción civil el daño a la salud o daño a los bienes jurídicos de especial protección constitucional no son reconocidos de forma autónoma, por lo cual, de acuerdo con la doctrina probable de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, los mismos son improcedentes tratándose de un caso de responsabilidad civil extracontractual.

**FRENTE A LA PRETENSIÓN “5.6.4. DAÑO A LA PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD”:** Si bien expresamente la pretensión no está encaminada en contra de mi representada porque está ligada a la pretensión esbozada en el numeral 5.5. donde no se menciona a la compañía de seguros que represento, ME OPONGOporque, en definitiva, olvidó la parte demandante que para que se considere que se consumó una pérdida de oportunidad, la existencia del chance debe estar acreditada de forma suficiente, siendo esta una legítima oportunidad seria, verídica, real y actual, circunstancia que no sucedió, pues la demanda se caracteriza por su orfandad probatoria. Efectivamente, se destaca que no es procedente indemnizar una mera expectativa que ni siquiera se define en el escrito de demanda, circunstancia que implica necesariamente el fracaso de esta pretensión.

**FRENTE A LA PRETENSIÓN “5.8. INTERESES DE MORA”:** Si bien expresamente la pretensión no está encaminada en contra de mi representada porque está ligada a la pretensión esbozada en el numeral 5.5. donde no se menciona a la compañía de seguros que represento, ME OPONGOpor cuanto los intereses moratorios se causan a partir del reconocimiento favorable de las pretensiones de la demanda y como estas no tienen vocación de prosperidad entonces no hay causa jurídica para la causación de dichos intereses.

**FRENTE A LA PRETENSIÓN “5.9. COSTAS Y EN AGENCIAS EN DERECHO”:** Si bien expresamente la pretensión no está encaminada en contra de mi representada porque está ligada a la pretensión esbozada en el numeral 5.5. donde no se menciona a la compañía de seguros que represento, ME OPONGOa la prosperidad de esta petición de condena en costas del proceso y agencias en derecho, reitero mi oposición, toda vez que, se repite, mi representada no tienen ninguna obligación indemnizatoria derivada de los hechos descritos en el escrito genitor. Por tal motivo solicito que, en vista de que no se identifica ninguna actuación que refleje la necesidad de un reproche jurídico por parte de la demandada, se condene en costas a los demandantes, pues sometió al extremo pasivo y a mi prohijada, sin justificación ni respaldo probatorio alguno, al agotamiento innecesario de estas instancias judiciales.

**FRENTE A LA PRETENSIÓN “5.10. INDEXACIÓN”:** Si bien expresamente la pretensión no está encaminada en contra de mi representada porque está ligada a la pretensión esbozada en el numeral 5.5. donde no se menciona a la compañía de seguros que represento, ME OPONGOa la prosperidad de esta pretensión por carecer de fundamento fáctico y jurídico. Lo anterior, comoquiera que es una pretensión ligada a la primera y no reconociéndose, ésta tampoco tiene vocación de prosperidad.

Adicionalmente, esta pretensión es a todas luces anti-técnica. Ello, porque no puede acumularse la indexación monetaria con el pago de los intereses puesto que ambos conceptos tienen la misma finalidad, la cual es paliar el poder adquisitivo del dinero. Sobre este punto, la Corte Suprema de Justicia, en un caso que se puede aplicar análogamente al presente, afirmó:

*“(…) Puestas de ese modo las cosas, puede concluirse que la compatibilidad originaria de la corrección monetaria y de los intereses, depende, fundamentalmente, de la naturaleza y tipología de éstos, puesto que, si ellos son los civiles, nada impide que, in casu, se ordene el reajuste monetario de la suma debida.* ***Pero si el interés ya comprende este concepto (indexación indirecta), se resalta de nuevo, imponer la corrección monetaria, per se, equivaldría a decretar una doble –e inconsulta- condena por un mismo ítem****, lo que implicaría un grave quebranto de la ley misma, (…)”.[[2]](#footnote-2)* – (Subrayado y negrilla por fuera de texto)

Así las cosas, además de lo que ya se ha establecido, esta pretensión no debe ser tenida en cuenta pues la indexación de la moneda no se puede acumular con los intereses moratorios.

# OBJECIÓN AL JURAMENTO ESTIMATORIO DE LA DEMANDA

De conformidad con lo establecido en el inciso primero del artículo 206 del Código General del Proceso y con el fin mantener un equilibrio procesal, garantizar pedimentos razonables y salvaguardar el derecho de defensa de mi procurada, procedo a **OBJETAR** el juramento estimatorio de la demanda en los siguientes términos:

Vale la pena solicitar al Despacho tomar en consideración lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 206 del Código General del Proceso, respecto a que, en caso de no ser demostrada la cifra pretendida por concepto de daños patrimoniales, especialmente lo concerniente al lucro cesante, se de aplicación a la sanción allí dispuesta.

No resulta entonces procedente lo solicitado respecto del reconocimiento y pago en favor de la parte demandante de sumas de dinero por concepto de daños patrimoniales. Lo anterior, en tanto que no existe en el plenario del proceso prueba o elemento de juicio suficiente que permita acreditar un daño emergente o un lucro cesante.

Como aspecto fundamental para objetar el juramento estimatorio **frente al lucro cesante**, debe advertirse que: (i) En el expediente no reposa ningún certificado laboral o de ingresos o documento similar tendiente a acreditar la actividad laboral o económica del demandante; y (ii) El señor William David Perea no trabaja (pues lo contrario no se encuentra demostrado), ni genera ingresos, por lo tanto, los hechos del 16 de mayo de 2022 no afectaron en nada las condiciones económicas que antes tenía el demandante; (iii) Se verifica que el cálculo efectuado por tal concepto, se hace de manera equivocada comoquiera que el apoderado de la activa tiene presente el porcentaje prestacional, cuando el demandante no cuenta con ningún registro ante el sistema de seguridad social; y (iv) Además, se constata que, en la calificación allegada, no se señala de manera precisa la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral, lo cual impide determinar con certeza que la disminución alegada por la demandante sea consecuencia directa del accidente de tránsito que dio origen a la presente demanda.

En este orden de ideas, es preciso reiterar que la parte demandante tenía entre sus mandatos toda la carga probatoria sobre los perjuicios deprecados en la demanda. Por lo tanto, cada uno de los daños por los cuales está exigiendo una indemnización deberán estar claramente probados a través de los medios idóneos que la ley consagra en estos casos. Esta teoría ha sido ampliamente desarrollada por la Corte Suprema de Justicia, debido a que sobre este particular ha establecido lo siguiente:

*“(…) aun cuando en la acción de incumplimiento contractual es dable reclamar el reconocimiento de los perjuicios, en su doble connotación de daño emergente y lucro cesante, no lo es menos que para ello resulta ineludible que el perjuicio reclamado tenga como causa eficiente aquel incumplimiento,* ***y que los mismos sean ciertos y concretos y no meramente hipotéticos o eventuales, teniendo el reclamante la carga de su demostración****, como ha tenido oportunidad de indicarlo, de manera*

*reiterada (…)[[3]](#footnote-3)”* - (Subrayado y negrilla por fuera de texto)

Bajo esta misma línea, en otro pronunciamiento también ha indicado que la existencia de los perjuicios en ningún escenario se puede presumir, tal y como se observa a continuación:

*“(…) Ya bien lo dijo esta Corte en los albores del siglo XX, al afirmar que “(…)* ***la existencia de perjuicios no se presume en ningún caso****; [pues] no hay disposición legal que establezca tal presunción (…)”[[4]](#footnote-4)*- (Subrayado y negrilla por fuera de texto)

De tal suerte, en el entendido de que las sumas consignadas en el acápite del juramento estimatorio no obedecen a la realidad probatoria allegada al proceso, es en todo caso excesivo y sin soporte probatorio, de manera amable solicito a usted señor Juez, no tener en cuenta la estimación que se realiza en el libelo genitor.

# EXCEPCIONES DE FONDO FRENTE A LA DEMANDA

En primer lugar, es preciso poner en conocimiento del Honorable Juez que la defensa se abordará con la formulación de medios exceptivos divididos en dos (2) grupos. En primer lugar, se abordarán las excepciones relacionadas con los medios de defensa propuestos con ocasión a los hechos del 16 de mayo del 2022 y con las pretensiones indemnizatorias invocadas en la demanda y, en segundo lugar, se formularán los medios exceptivos que guardan profunda relación con los contratos de seguro vinculados a este proceso.

Por lo anterior, se formularán las siguientes excepciones:

## EXCEPCIONES FRENTE A LA INEXISTENTE RESPONSABILIDAD DEPRECADA EN RELACIÓN CON EL VEHÍCULO DE PLACAS SKR112

1. **EXIMENTE DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS DEMANDADOS POR CONFIGURARSE LA CAUSAL “HECHO DE UN TERCERO”.**

En el presente caso no podrá imputarse responsabilidad alguna a los demandados, como quiera que operó la causal excluyente de la responsabilidad denominada “hecho de un tercero”, en tanto que fue el señor Juan Camilo Salinas quien actuó de manera imprudente y negligente, y expuso la vida del señor William David Perea al desatender las normas de tránsito existentes. Es decir, que en la ocurrencia del accidente se perfeccionó únicamente en razón del actuar del conductor del vehículo SPY096, en la que viajaba como acompañante el señor William David Pera. Por lo que no podría entonces intentar endilgarse responsabilidad a los demandados cuando en el presente caso se encuentra clara la configuración de una causal exonerativa de responsabilidad, consistente en el hecho de un tercero.

Dicho esto, es importante anotar que el hecho de un tercero hace parte de las causas extrañas mediante las cuales se rompe el vínculo de causalidad. De modo tal que la conducta del tercero ajeno a las partes, que sea imprevisible e irresistible y que desempeñe un papel exclusivo o esencial en el cumplimiento de los débitos del oferente, reviste la calidad de excusar la responsabilidad de a quien se le atribuye el daño. Frente a lo anterior y antes de entrar a estudiar la aplicación de la causal de exclusión de responsabilidad al caso concreto, es necesario hacer referencia a la señalada norma del artículo 64 del Código Civil y posteriormente, hacer un recorrido por los pronunciamientos jurisprudenciales más relevantes con los cuales se le ha dado desarrollo a la figura del hecho de tercero, como causal que enerva la responsabilidad.

*“****ARTÍCULO 64. <FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO>.*** *Se llama fuerza mayor o caso fortuito el* ***imprevisto o que no es posible resistir****,**como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.”* - (Subrayado y negrilla fuera de texto)

Sobre este tema, la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia del 21 de noviembre de 2008, fue enfática al señalar que:

*“(…) cuando un contratante pretende alegar el hecho de un tercero como factor exonerarte de responsabilidad deberá probar que tal hecho fue imprevisible e irresistible”[[5]](#footnote-5)*

Al respecto, es necesario complementar con lo señalado por la Jurisprudencia del Consejo de Estado[[6]](#footnote-6), quien se ha pronunciado sobre el hecho del tercero, así:

*“Por otra parte, en relación con la causal de exoneración consistente en el hecho de un tercero, la jurisprudencia de esta corporación ha señalado que la misma* ***se configura siempre y cuando se demuestre que la circunstancia extraña es completamente ajena al servicio y que este último no se encuentra vinculado de manera alguna con la actuación de aquel****”* - (Subrayado y negrilla fuera de texto)

Así también, en pronunciamiento más reciente, señaló el más alto Tribunal de lo Contencioso Administrativo[[7]](#footnote-7) que:

*“****Las tradicionalmente denominadas causales eximentes de responsabilidad (fuerza mayor, caso fortuito, hecho exclusivo y determinante de un tercero*** *o de la víctima)* ***constituyen diversos eventos que dan lugar a que devenga imposible imputar,*** *desde el punto de vista jurídico,* ***la responsabilidad por los daños*** *cuya causación da lugar a la iniciación del litigio, a la persona o entidad que obra como demandada dentro del mismo. En relación con todas ellas,* ***tres son los elementos cuya concurrencia tradicionalmente se ha señalado como necesaria para que sea procedente admitir su configuración: (i) su irresistibilidad; (ii) su imprevisibilidad y (iii) su exterioridad respecto del demandado.***

*(…)*

*Por otra parte,* ***a efectos de que operen las mencionadas eximentes de responsabilidad*** *(hecho de la víctima o de un tercero),* ***es necesario aclarar,*** *en cada caso concreto,* ***si el proceder activo u omisivo de aquellos tuvo, o no, injerencia y en qué medida, en la producción del daño. En ese orden de ideas, resulta dable concluir que para que dichas causales eximentes de responsabilidad puedan tener plenos efectos liberadores respecto de la responsabilidad estatal, resulta necesario que la conducta desplegada por la víctima o por un tercero sea tanto causa del daño, como la raíz determinante del mismo, es decir, que se trate de la causa adecuada o determinante, (…)****”* - (Subrayado y negrilla fuera de texto)

Por su parte, la doctrina al respecto de hecho del tercero señala que:

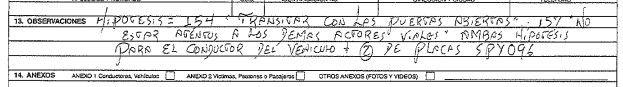
*“Esta causa de exoneración parte del supuesto inicial, según el cual, el causante directo del daño es un tercero ajeno a las partes intervinientes en el juicio de responsabilidad (…) jurídicamente solo es tercero alguien extraño, por quien no se debe responder, es decir, no vinculado con el sujeto contra el que se dirige la acción resarcitoria”[[8]](#footnote-8)*

En ese orden de ideas, es claro que el hecho de tercero es aquel elemento de ruptura del nexo causal entre el acto u omisión del agente y el daño que se le imputa. Por tanto, entremos a estudiar cada uno de sus requisitos a la luz del caso concreto:

* **Irresistibilidad.**

Resulta importante señalar que para el conductor del vehículo de placas SKR112 era imposible resistir a la acción desplegada por el señor Salinas, al ser un agente que como conductor del vehículo de placas SPY 096 colisionó el primero por no estar atento en la vía, chocando la parte *trasera* del vehículo conducido por el señor Julián David Caicedo Encarnación, estar movilizándose, además, con las puertas abiertas y ocasionando las lesiones del señor Perea.

Lo anterior se corrobora con el Informe Policial de Accidente de Tránsito No. A001403214, donde se estableció la hipótesis No. 154 que corresponde a “*transitar con las puertas abiertas”* y la No. 157 “no estar atentos a los demás actores viales”; ambas hipótesis atribuibles al conductor del vehículo de placas SPY 096. Como se observa en la siguiente imagen:



**Transcripción literal: *“****Hipótesis 154 “transitar con las puertas abiertas”. 157 “no estar atentos a los demás actores viales” ambas hipótesis para el conductor del vehículo #2 de placas SPY 096”*

Por lo tanto, al determinarse la responsabilidad que obra en cabeza del señor Juan Camilo Salinas operó la causal exonerativa de responsabilidad denominada “hecho de un tercero”, en tanto fue este quien expuso imprudentemente la vida del señor William David Perea, al transitar con las puertas abiertas y no tomar las medidas mínimas necesarias de prevención y seguridad, por cuanto no estuvo atento a los demás actores viales, es decir que, de manera voluntaria, asumió un riesgo que a la postre se materializó en las lesiones sufridas por el señor William David Perea, pues fue quien decidió conducir el vehículo de servicios público, violando las normas de tránsito existentes, con lo cual, sumado a que la conducción de vehículos está considerada como una actividad de alto riesgo, se tiene que aumentó de manera desproporcionada el riesgo permitido. Lo que desde ya debe indicarle al Despacho una falta total de prudencia del conductor del vehículo SPY096, dado que el accidente habría podido evitarse si el señor Juan Camilo Salinas, hubiese atendido a las normas de tránsito que regulan el comportamiento de los conductores en la vía.

Se pone de presente al Despacho una falta total de prudencia de la víctima, dado que el accidente habría podido evitarse si el señor William Perea se hubiese autocuidado y hubiera descendido o decidido no abordar el vehículo que no estaba atendiendo las normas de tránsito. Recordará el Despacho que el Código Nacional de Tránsito en su artículo 81 y 82 dispone las normas generales y prohibición para la circulación de vehículos incluyendo el comportamiento de los pasajeros, donde determina que:

*“(…)* ***Artículo 81.*** *Puertas cerradas.* ***Los vehículos deberán transitar siempre con todas sus puertas debidamente cerradas.***

***Artículo 82.*** *(…) Es obligatorio el uso del cinturón de seguridad por parte del conductor y de los pasajeros ubicados en los asientos delanteros del vehículo en todas las vías del territorio nacional, incluyendo las urbanas.*

***Artículo 131.*** *Los infractores de las normas de tránsito serán sancionados con la imposición de multas, de acuerdo con el tipo de infracción así:*

*(…) B.18. Conducir un vehículo de transporte público individual de pasajeros sin cumplir con lo estipulado en el presente código. (…)*

*C.6. No utilizar el cinturón de seguridad por parte de los ocupantes del vehículo. (…)*

*C.10. Conducir un vehículo con una o varias puertas abiertas. (…)“*

Bajo dicho derrotero, es evidente que el señor Juan Camilo Salinas quien actuó de manera imprudente y negligente, y expuso la vida del señor William David Perea, desatendiendo las leyes que regulan el tránsito en Colombia. Lo que no puede ser desconocido por el Despacho, puesto que desde la prueba base de este proceso (Informe Policial de Accidente de Tránsito) queda totalmente claro que la causa que ocasionó el accidente en el resulto lesionado el señor William David Perea fue de exclusiva responsabilidad del conductor de la motocicleta y no del conductor del vehículo de placas SKR112. Por cuanto es evidente que las circunstancias que rodearon el hecho se encontraban en la esfera de dominio del conductor de la motocicleta y no de los demandados.

* **Imprevisibilidad**

En segundo lugar, es necesario señalar que para el conductor del automóvil de placas SKR112 era totalmente imposible prever que en el lugar donde ocurrió el accidente se presentaría la conducta ejercida por el señor Juan Camilo Salinas. Dicho de otra forma, el conductor del vehículo asegurado de placas SKR112, basado en las reglas de la experiencia y la buena fe, confió en que en la vía todos los conductores estarían atentos de los demás actores viales y respetarían las normas de tránsito.

* **Emana de un agente externo**

Como es evidente, el actuar negligente e imprudente, al conducir con las puertas abiertas y sin estar atento a los demás actores viales correspondió a un tercero que nada tiene que ver con el conductor, ni con el propietario del vehículo de placas SKR 112. Por tanto, el tránsito del vehículo de placas SPY 096 con las puertas abiertas exponiéndose a su propio riesgo y actuando de forma negligente e imprudente es atribuible al señor Juan Camilo Salinas. En tal virtud, tal omisión es totalmente ajena a la esfera de manejo y control del conductor del automóvil de placas SKR 112.

En conclusión, de todo lo anteriormente explicado, es perfectamente lógico concluir que para el conductor del vehículo de placas SKR112, fue totalmente irresistible e imprevisible sortear la falta de prudencia y diligencia del señor Juan Camilo Salinas como conductor de la motocicleta de placas SPY960, quien en ejercicio de una actividad peligrosa atendió a su imprudencia y negligencia al maniobrar ocasionando el accidente objeto de litis. Por tanto, dado que operó la causal excluyente de la responsabilidad denominada “hecho de un tercero” en cabeza del señor Juan Camilo Salinas, se enervó la responsabilidad de los demandados y no podrán ser condenados a indemnizar a los demandantes.

Por las razones expuestas, solicito respetuosamente declarar probada esta excepción.

1. **EXIMENTE DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS DEMANDADOS POR CONFIGURARSE LA CAUSAL “HECHO EXCLUSIVO DE LA VICTIMA”.**

En primera medida, es necesario indicar que no podrá imputarse responsabilidad alguna a los demandados por concepto del accidente de tránsito acaecido el 16 de mayo de 2022, comoquiera que operó la causal excluyente de la responsabilidad denominada “hecho exclusivo de la víctima”. Lo anterior, puesto que de acuerdo con la Historia Clínica allegada, el señor William David Perea se encontraba colgando de la puerta del vehículo SPY096. Lo anterior indica con claridad que la hoy demandante actuó de manera imprudente y negligente que puso en peligro su propia vida y por ende su impericia fue la única causa determinante de la colisión, situación que enerva la responsabilidad que pretende atribuirse a los demandados.

En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia ha indicado con claridad que cuando la conducta imprudente de la víctima fue suficiente para causar el daño, debe liberarse de toda responsabilidad a los demandados, así:

*“La culpa exclusiva de la víctima, como factor eximente de responsabilidad civil, ha sido entendida como la conducta imprudente o negligente del sujeto damnificado, que por sí sola resultó suficiente para causar el daño. Tal proceder u omisión exime de responsabilidad si se constituye en la única causa generadora del perjuicio sufrido, pues de lo contrario solo autoriza una reducción de la indemnización, en la forma y términos previstos en el artículo 2357 del Código Civil.*[[9]](#footnote-9)

*(…)*

*Precisado lo anterior, se debe mencionar que la doctrina es pacífica en señalar que para el comportamiento del perjudicado tenga influencia en la determinación de la obligación reparatoria, es indispensable que tal conducta incida causalmente en la producción del daño y que dicho comportamiento no sea imputable al propio demandado en cuanto que él ya haya provocado esa reacción en la víctima. Sobre lo que existe un mayor debate doctrinal es si se requiere que la conducta del perjudicado sea constitutiva de culpa, en sentido estricto, o si lo que se exige es el simple aporte causal de su actuación independientemente de que se pueda realizar un juicio de reproche sobre ella.*

*(…) En todo caso, así se utilice la expresión “culpa de la víctima” para designar el fenómeno en cuestión, en el análisis que al respecto se realice no se deben utilizar, de manera absoluta o indiscriminada, los criterios correspondientes al concepto técnico de culpa, entendida como presupuesto de la responsabilidad civil en la que el factor de imputación es de carácter subjetivo, en la medida en que dicho elemento implica la infracción de deberes de prudencia y diligencia asumidos en una relación de alteridad, esto es, para con otra u otras personas, lo que no se presenta cuando lo que ocurre es que el sujeto damnificado ha obrado en contra de su propio interés. Esta reflexión ha conducido a considerar, en acercamiento de las dos posturas, que* ***la “culpa de la víctima” corresponda – más precisamente – a un conjunto heterogéneo de supuestos de hecho, en los que se incluyen no solo comportamientos culposos en sentido estricto, sino también actuaciones anómalas o irregulares del perjudicado que interfieren causalmente en la producción del daño****, con lo que se logra explicar, de manera general, que la norma consagrada en el artículo 2357 del código Civil, aún cuando allí se aluda a “imprudencia” de la víctima, pueda ser aplicable a la conducta de aquellos llamados inimputables porque no son “capaces de cometer delito o culpa” o a comportamientos de los que la propia víctima no es consciente o en los que no hay posibilidad de hacer reproche alguno a su actuación (v.gr. aquel que sufre un desmayo, un desvanecimiento o un tropiezo y como consecuencia sufre un daño)*

*Así lo consideró está Corporación hace varios lustros cuando precisó que “en la estimación que el juez ha de hacer del alcance y forma en que el hecho de la parte lesionada puede afectar el ejercicio de la acción civil de reparación, no hay para que tener en cuenta, a juicio de la Corte, el fenómeno de la imputabilidad moral para calificar como culpa la imprudencia de la víctima,* ***porque no se trata entonces del hecho- fuente de la responsabilidad extracontractual que exigiría la aplicación de un criterio subjetivo, sino del hecho de la imprudencia simplemente, objetivamente considerado como un elemento extraño a la actividad del autor pero concurrente en el hecho y destinado solamente a producir una consecuencia jurídica patrimonial en relación con otra persona****.”*[[10]](#footnote-10)- (Subrayado y negrilla por fuera de texto)

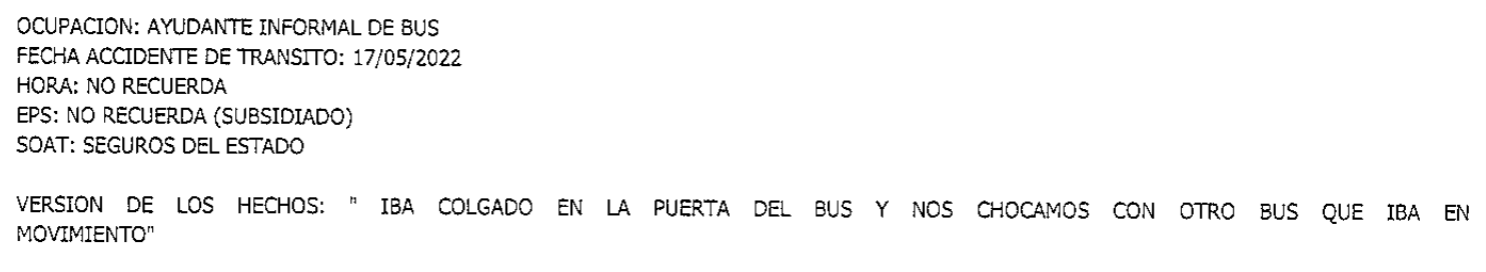
Por todo lo anterior, la doctrina y jurisprudencia contemporánea[[11]](#footnote-11) prefieren denominar el fenómeno en cuestión como el “hecho” de la víctima, como causa única en la producción del daño cuya reparación se demanda. Continuando con el estudio jurisprudencial del hecho de la víctima como causal eximente de la responsabilidad, debemos hacer referencia a los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia, que en fallo del 17 de noviembre de 2020 se refirió a los elementos que estructuran la responsabilidad así:

*“El régimen de responsabilidad por las actividades peligrosas es singular y está sujeto a directrices específicas en su etiología, ratio y fundamento. Por su virtud, el fundamento y criterio de imputación de la responsabilidad es el riesgo que el ejercicio de una actividad peligrosa comporta por el peligro potencial e inminente de causar un daño a los bienes e intereses tutelados por el ordenamiento. La culpa no es elemento necesario para estructurar la responsabilidad por actividades peligrosas ni para su exoneración; no es menester su demostración, ni tampoco se presume; el damnificado tiene la carga probatoria exclusivamente de la actividad peligrosa, el daño y la relación de causalidad; y, el autor de la lesión, la del elemento extraño, o sea, la fuerza mayor o caso fortuito,* ***la participación de un tercero o de la víctima que al actuar como causa única o exclusiva del quebranto, desde luego, rompe el nexo causal y determina que no le es causalmente atribuible, esto es, que no es autor****.”*[[12]](#footnote-12)- (Subrayado y negrilla por fuera de texto)

En el mismo pronunciamiento del 17 de noviembre de 2020, la corte indicó:

*“La visión del asunto contenida en dicha providencia se traduce en una verdad inobjetable: si no existe nexo causal entre el daño y el actuar del demandado, resulta indudable que en ese evento no pudo mediar culpa o dolo de su parte, dado que, finalmente,* ***a nadie puede atribuirse falta alguna por un hecho que no tiene ninguna relación con su conducta****”*[[13]](#footnote-13) - (Subrayado y negrilla por fuera de texto)

Teniendo en cuenta los pronunciamientos jurisprudenciales expuestos, es dable concluir que, de mediar un “hecho exclusivo de la víctima”, el presunto responsable y generador del daño será exonerado de cualquier tipo de responsabilidad. En ese orden de ideas, se debe resaltar que en el presente caso no podrá imputarse responsabilidad alguna a los demandados, puesto que operó la causal excluyente de la responsabilidad denominada “hecho exclusivo de la víctima”. Lo anterior, dado que el Historia Clínica allegada por la parte actora el señor iba colgando de la puerta del bus, como se observa:





**Transcripción literal: *“*** *Versión de los hechos: Iba Colgado en la puerta del bus”*

Por lo tanto, lo cierto es que las pruebas existentes como la historia clínica, permiten afirmar que la responsabilidad obra en cabeza del señor William David Perea y por lo tanto operó la causal exonerativa de responsabilidad denominada “hecho de exclusivo de la víctima”, en tanto fue esta quien expuso imprudentemente su vida e integridad personal al asumir un riesgo exacerbado al transportarse colgando de la puerta del bus, riesgo que a la postre se materializó en las lesiones por él sufridas, Lo que desde ya debe indicarle al Despacho una falta total de prudencia de la víctima, dado que el accidente habría podido evitarse si la actora, hubiese atendido a las normas de tránsito, pues el objetivo de estas es garantizar el derecho a la vida, a la integridad personal y a la salud de los individuos en el sistema de tránsito y transporte terrestre, regulando los principales factores de riesgo que atentan contra la seguridad de los actores viales como lo es la impericia para la conducción.

Bajo dicho derrotero, es evidente que el señor William David Perea realizó una conducta prohibida, exponiendo su vida imprudentemente y desatendiendo las leyes que regulan el tránsito en Colombia. Lo que no puede ser desconocido por el Despacho, puesto que desde la prueba base de este proceso (Informe Policial de Accidente de Tránsito) y la historia clínica queda totalmente claro que la causa que ocasionó el accidente en el que se produjeron sus lesiones fue de su exclusiva responsabilidad y no del conductor del vehículo de placas SKR112. Pues es tan clara la ausencia de responsabilidad del conductor del vehículo asegurado que en el precitado informe no le fue atribuida causal alguna.

En conclusión, es totalmente claro que la conducta del señor William David Perea fue el factor relevante y adecuado que incidió en la ocurrencia del accidente, en tanto de manera voluntaria, asumió un riesgo que a la postre se materializó en las lesiones por ella padecidas, pues irresponsablemente aumentó de manera desproporcionada el riesgo permitido, siendo que la misma fue el generadora de la situación de peligro para el bien jurídico de la vida e integridad personal. Por lo que resulta jurídicamente inviable imputarle responsabilidad a los demandados por estos hechos.

Por tanto, deberá el Honorable Juez proceder a negar las pretensiones de la demanda.

1. **INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD A CARGO DE LOS DEMANDADOS POR LA FALTA DE ACREDITACIÓN DEL NEXO CAUSAL.**

Los demandantes formulan la presente demanda con fundamento en que la causa adecuada del daño fue la conducta imprudente ejercida por parte del señor Juan Camilo Salinas Valencia como conductor del vehículo de placa SPY096 y Julián David Caicedo Encarnación como conductor del vehículo de placa SKR112. No obstante, no existe ningún tipo de responsabilidad por parte del señor Julián David Caicedo Encarnación frente a la ocurrencia del accidente del 16 de mayo del 2022, puesto que de acuerdo con el Informe Policial de Accidente de Tránsito se estableció la hipótesis No. 154 como causa del accidente, que corresponde a “*transitar con las puertas abiertas”* y la No. 157 “no estar atentos a los demás actores viales”; ambas hipótesis atribuibles al conductor del vehículo de placas SPY 096. Por tanto, es claro que la causa adecuada del accidente no fue la conducta ejercida por el conductor del vehículo de placas SKR 112, como lo intenta hacer ver la parte demandante, sino que la causa del daño es atribuible al conductor del vehículo de placas SPY096, quien omitió dar cumplimiento a las normas de tránsito e incumplió sus deberes de cuidado y sin ninguna previsión se movilizaba con las puertas abiertas y sin estar atento de los demás agentes en la vía.

En este punto, vale la pena recordar que la teoría de la causalidad aplicada en Colombia es la causalidad adecuada. A diferencia de la teoría de la equivalencia de condiciones en la que simplemente basta aplicar el método de la supresión mental hipotética y determinar si el hecho final se hubiere o no presentado o no con determinada actuación. La teoría de la causa adecuada exige un filtro adicional, en el que de esa multiplicidad de causas que se pueden presentar en el mundo fenomenológico que pueden ser condiciones *sine qua non*, serán relevantes solo aquellas de las que fuera previsible el resultado. Doctrina autorizada y reciente confluye en aseverar que para declarar la responsabilidad es necesaria la concurrencia de tres elementos indispensables, a saber:

*“(…) Es sabido que para que exista la responsabilidad se requieren tres elementos absolutamente indispensables y necesarios: el daño, el hecho generador del mismo y un nexo de causalidad que permita imputar el daño a la conducta (acción u omisión) del agente generador. El nexo causal se entiende como la relación necesaria y eficiente entre el hecho generador del daño y el daño probado. La jurisprudencia y la doctrina indican que para poder atribuir un resultado a una persona y declararla responsable como consecuencia de su acción u omisión, es indispensable definir si aquel aparece ligado a esta por una relación de causa-efecto. Si no es posible encontrar esa relación mencionada, no tendrá sentido alguno continuar el juicio de responsabilidad (…)”[[14]](#footnote-14)* (Subrayado y negrilla fuera del texto original).

En ese sentido, debe precisarse que una actividad peligrosa es la que puede producir daños incontrolables e imprevisibles, tal como lo advierte la sociología en las situaciones impredecibles, incalculables y catastróficas de la sociedad del riesgo contemporánea. De ahí, que la obligación de indemnizar en este tipo de responsabilidad no puede depender del control o la previsión de las consecuencias, pues ello supondría imponer un criterio de imputación basado en la previsión de lo imprevisible. Ahora bien, la labor persuasiva debe orientarse a establecer cuál de todos los comportamientos antijurídicos ocasionó el daño. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia ha manifestado lo siguiente:

*“(…) aquél que de acuerdo con la experiencia (las reglas de la vida, el sentido común, la lógica de lo razonable) sea el más ‘adecuado’, el más idóneo para producir el resultado, atendidas por lo demás, las específicas circunstancias que rodearon la producción del daño y sin que se puedan menospreciar de un tajo aquellas circunstancias azarosas que pudieron decidir la producción del resultado, a pesar de que normalmente no hubieran sido adecuadas para generarlo (…)”[[15]](#footnote-15)*

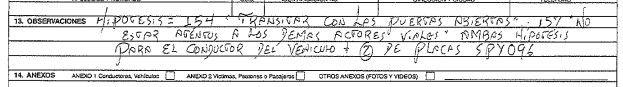
En efecto, el concepto de peligrosidad de la actividad, empero, no ha sido definido bajo un criterio jurídico general, sino que suele explicarse mediante ejemplos tales como la velocidad alcanzada, la naturaleza explosiva o inflamable de la cosa utilizada, la energía desplegada o conducida, entre otras situaciones cuya caracterización ha sido delimitada por la jurisprudencia. Del mismo modo, en este punto es menester aclarar que la responsabilidad civil supone resarcir un daño generado con ocasión de un hecho que no tiene origen en un incumplimiento obligacional, sino que opera entre quienes ha vinculado únicamente el azar.

En particular, la responsabilidad civil extracontractual en actividades peligrosas, como sucede con la conducción de vehículos automotores, supone (i) que la víctima demuestre el ejercicio de la actividad peligrosa, el daño y la relación de causalidad entre ambos; (ii) que el presunto responsable solo podrá exonerarse, salvo norma en contrario, demostrando la existencia de alguna causal eximente de responsabilidad que rompa el nexo causal; y (iii) que en los casos de actividades peligrosas concurrentes el juez deba examinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se produce el daño para establecer el grado de responsabilidad que corresponde a cada actor.

De manera que en la investigación dirigida a establecer si fue destruido el nexo causal o a ponderar el grado de incidencia de la conducta de la víctima, entre los varios antecedentes que en forma hipotética ocasionaron el daño. Únicamente deben dejarse los que, atendiendo los criterios dichos en la jurisprudencia, tuvieron la aptitud para producirlo, mas no los que simplemente emergieron como factores meramente circunstanciales. En el caso concreto, es menester señalar que la parte Demandante en el presente asunto no acreditó los elementos para la configuración de la responsabilidad civil. En tal sentido, de conformidad con el artículo 2341 del Código Civil que dispone que quién ha inferido daño a otros está obligado a la indemnización. En relación con tal precepto, cuando un sujeto de derecho, a través de sus acciones u omisiones causa injustamente un daño a otro y existe además un factor o criterio de atribución subjetivo por regla general y excepcionalmente objetivo, que permita traslada dicho resultado dañoso a quien lo ha generado. Surge a su cargo un deber de prestación y un derecho de crédito en favor de la persona que ha sufrido el detrimento y que en todo caso tiene como fin la reparación del daño inferido.

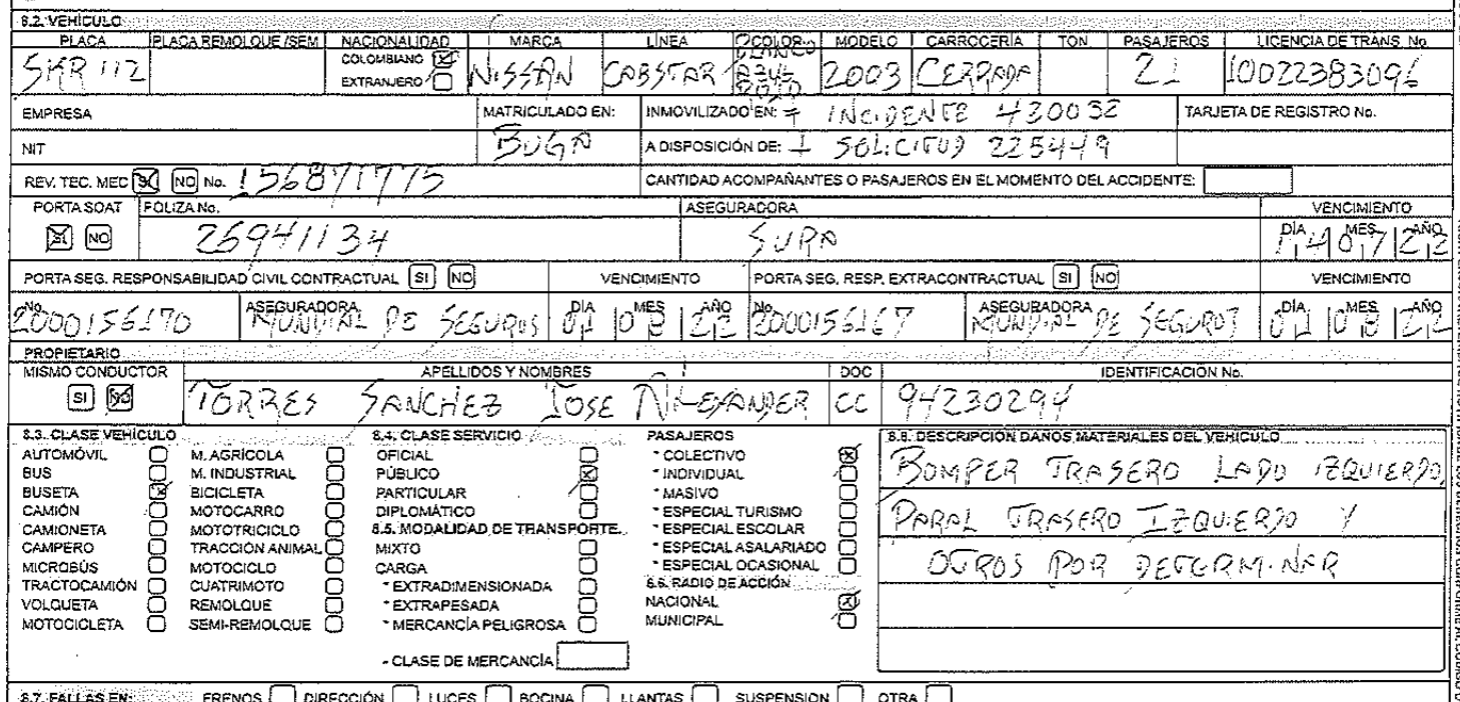
Dicho lo anterior, resulta evidente que en el presente caso no se encuentra acreditado un nexo causal entre la conducta del señor Julián David Caicedo Encarnación como conductor del vehículo de placas SKR112 y la consecuencia final, toda vez que como se explicó, de acuerdo con el Informe Policial de Accidente de Tránsito la causo del accidente obedeció a la conducta ejercida por el señor Juan Camilo Salinas Valencia, conductor del vehículo de placas SPY096. En cualquier caso, dicho nexo causal que pretende hacer valer la parte demandante en este proceso no se encuentra acreditado mediante ninguna prueba documental y/o elemento de juicio que permita demostrar un verdadero nexo. Por el contrario, lo que se reflejó del análisis de las pruebas documentales, fue justamente que la conducta ejercida por el conductor del vehículo de placas SPY096 fue la causa eficiente del daño al movilizarse con las puertas abiertas y exponiendo a un riesgo a los pasajeros que se encontraban dentro del vehículo. Razón por la cual, al no encontrarse acreditado un nexo causal, no podría endilgársele al señor Julián David Caicedo Encarnación como conductor del vehículo de placa SKR112, y por contera tampoco a su propietario ni a mi mandante, ningún tipo de responsabilidad por no encontrarse uno de los elementos estructurales de la responsabilidad en su contra.

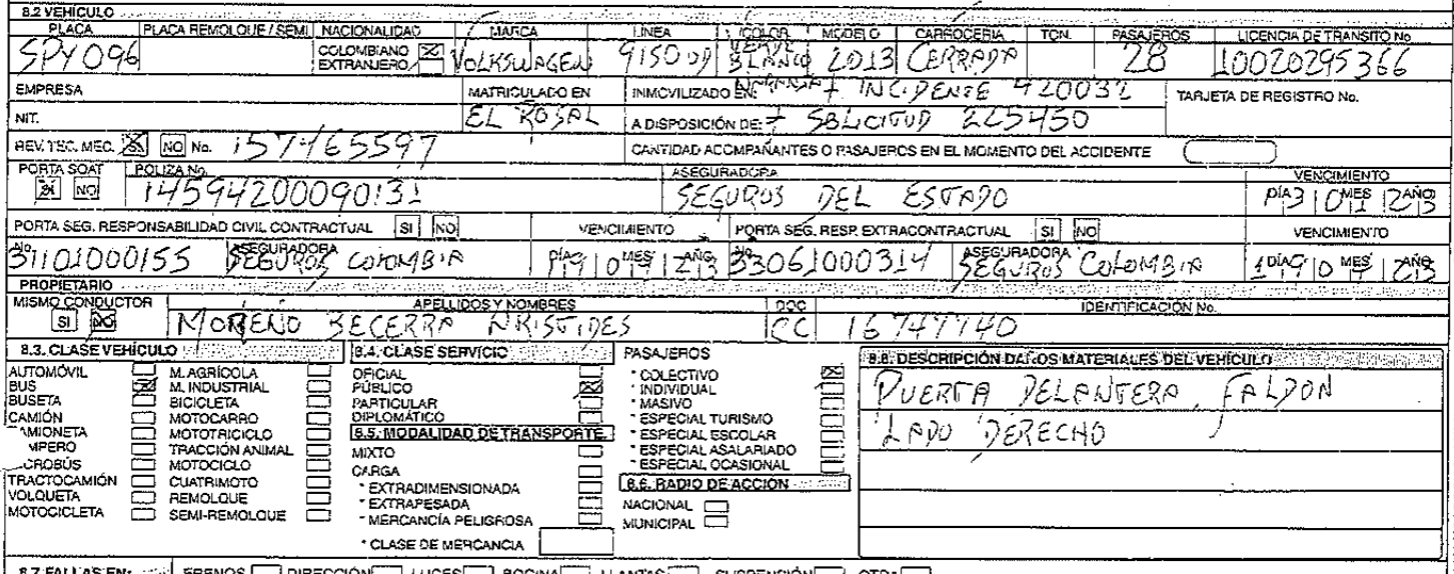
Para efectos de demostrar que no existe nexo de causalidad en este caso, por cuanto la causa adecuada del daño NO es la conducta ejercida por el conductor del vehículo de placas SKR112, el señor Julián David Caicedo Encarnación, en el que la parte actora fundamenta su demanda, deberá necesariamente realizarse un análisis del IPAT por cuanto la hipótesis que se estableció como causa del accidente de tránsito fue No. 154 que corresponde a “*transitar con las puertas abiertas”* y la No. 157 *“no estar atentos a los demás actores viales”*; ambas hipótesis atribuibles al conductor del vehículo de placas SPY096, como acertadamente lo describió el agente Alonso Caicedo Albornoz. Véase.



**Transcripción literal: *“****Hipótesis 154 “transitar con las puertas abiertas”. 157 “no estar atentos a los demás actores viales” ambas hipótesis para el conductor del vehículo #2 de placas SPY 096”*

Así mismo, notará su señoría que de acuerdo con los golpes descritos en el vehículo de placas SKR112, los mismos se ocasionan en el bómper trasero lado izquierdo, paral trasero izquierdo y otros por determinar. Por lo que, por inferencia lógica y aplicación de las reglas de la experiencia, no hubo injerencia de este vehículo en el accidente de tránsito y quien tuvo el factor determinante en la colisión fue el vehículo de placas SPY096.





En conclusión, para configurarse los elementos de la responsabilidad civil es necesario que concurran los siguientes elementos: i) hecho generador, ii) daño y iii) nexo de causalidad entre el daño sufrido por la víctima y la conducta de aquel a quien se imputa su producción o generación. Sin embargo, verificados los elementos probatorios que obran dentro del expediente, no se logra establecer que se reúnan los elementos de la responsabilidad civil dentro del presente asunto, por cuanto no existe nexo de causalidad entre la conducta realizada por el señor Julián David Caicedo Encarnación como conductor del vehículo de placa SKR112, y por contera tampoco por su propietario ni mi mandante, y el daño generado. Máxime, cuando SE DESVIRTUÓ la causa probable que pretendía hacer valer la parte demandante, respecto de que el accidente acaeció como consecuencia de la conducta ejercida por el conductor del vehículo de placas SKR112, cuando lo que quedó plenamente demostrado es que el vehículo asegurado transitaba con observancia de las normas de tránsito y recibe la colisión en la parte trasera del vehículo, por lo que el choque intempestivo del vehículo donde se movilizaba el demandante refleja con toda certeza el incumplimiento de sus deberes de cuidado como se ha explicado. Razón por la cual, deberán negarse las pretensiones de la demanda.

Por tanto, deberá el Honorable Juez proceder a negar las pretensiones de la demanda.

1. **FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA DE YURI VANESSA TENORIO VALENCIA.**

Se fórmula la presente excepción, atendiendo a que en el presente caso no existe prueba idónea que acredite la relación afectiva filial de la demandante Yuri Vanessa Tenorio Valencia con el señor William David Perea. Lo anterior, toda vez que la accionante solicita el reconocimiento de perjuicios a título de compañera permanente del occiso, sin acreditar de manera idónea tal situación.

En este punto es importante recordar que obligación de acreditar la calidad en que se actúa en determinada actuación judicial, está relacionada con la legitimación en la causa, concepto que ha sido definido ampliamente por la jurisprudencia, como aquella titularidad de los derechos de acción y contradicción. La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, ha señalado sobre esta categoría jurídica lo siguiente:

*“La prosperidad de la pretensión depende, entre otros requisitos según la jurisprudencia de esta Sala, de que «se haga valer por la persona en cuyo favor establece la ley sustancial el derecho que se reclama en la demanda, y frente a la persona respecto de la cual ese derecho puede ser reclamado (...). Si* ***el demandante no es titular del derecho que reclama*** *o el demandado no es persona obligada,* ***el fallo ha de ser adverso a la pretensión de aquél****, como acontece cuando reivindica quien no es el dueño o cuando éste demanda a quien no es poseedora*[[16]](#footnote-16)*”.* – (Subrayado y negrilla por fuera de texto)

En mérito de lo expuesto, se advierte que la legitimación en la causa es un presupuesto sustancial de la sentencia de fondo en tanto permite establecer si al sujeto reclamante le asiste titularidad con el derecho pretendido. De manera que para que se predique su existencia, el sujeto que comparece al proceso debe comprobar la titularidad para reclamar el interés jurídico que se debate en el proceso, de lo contrario sus pretensiones están llamadas al fracaso.

Del anterior análisis jurisprudencial y del estudio realizado al acervo probatorio del proceso, se advierte la ausencia de legitimación en la causa por activa de la señora Yuri Vanessa Tenorio Valencia, puesto que al interior del plenario no obra prueba idónea que acredite la relación afectiva de la demandante con el señor William David Perea. En este orden de ideas, al no existir prueba idónea de tal calidad no resulta procedente el reconocimiento de ningún emolumento pretendido por la demandante. Al respecto, se resalta que la Ley 979 de 2005 estableció los medios de prueba pertinentes para acreditar la existencia de la unión marital de hecho y en este sentido, la condición de compañero/a permanente, los cuales se restringen a los establecidos en el artículo en mención:

*“ARTÍCULO 2. El artículo 4 de la Ley 54 de 1990, quedará así:́*

*Artículo 4. La existencia de la unión marital de hecho entre compañeros permanentes, se declarará por cualquiera de los siguientes mecanismos:*

*1. Por escritura pública ante Notario por mutuo consentimiento de los compañeros permanentes.*

*2. Por Acta de Conciliación suscrita por los compañeros permanentes, en centro legalmente constituido.*

*3. Por sentencia judicial, mediante los medios ordinarios de prueba consagrados en el Código de Procedimiento Civil, con conocimiento de los Jueces de Familia de Primera Instancia.”*

Sin embargo, en este caso no existe prueba idónea de la cual se puede derivar la existencia de la unión marital de hecho entre la señora Yuri Vanessa Tenorio Valencia y el señor William David Perea. Por lo tanto, la demandante no está legitimada en la causa para ejercer la acción que nos ocupa, por no demostrar la relación afectiva que pretende hacer valer en este proceso. Razón por la cual, no es jurídicamente procedente declarar indemnización alguna a su cargo, por los hechos de este litigio.

En conclusión, al interior de este proceso no resulta jurídicamente procedente condenar a la parte demandada al reconocimiento de suma alguna a título de indemnización a favor de la señora Yuri Vanessa Tenorio Valencia, puesto que es claro que la demandante no está legitimada en la causa por activa para ejercer la presente acción. En tanto, en el expediente no obra prueba idónea de su calidad de compañera permanente ni de la relación que asegura haber tenido con el señor William David Perea para la fecha de los hechos. En tal virtud, al no encontrarse prueba que acredite la relación afectivo filial de la demandante con el fallecido, las pretensiones necesariamente deberán ser denegadas.

Por lo anteriormente expuesto, solicito al despacho declarar probada esta excepción.

### REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN COMO CONSECUENCIA DE LA INCIDENCIA DE LA CONDUCTA DE LA VÍCTIMA EN LA PRODUCCIÓN DEL DAÑO.

En gracia de discusión y de manera subsidiaria, debe tenerse en cuenta que en el improbable y remoto evento en que se reconocieran una o algunas de las pretensiones esgrimidas por los Demandantes, de todas maneras, debe aplicarse la respectiva reducción de la indemnización. Lo anterior, en proporción a la contribución que tuvo en el accidente el señor William David Perea Montaño, toda vez que, de acuerdo con el IPAT, se atribuyó al vehículo placas SPY 096 la codificación No. 154 que corresponde a “transitar con las puertas abiertas”. Esto implicaría que, a pesar de que el demandante no venía conduciendo el automotor referido, sí decidió bajo su mismo riesgo y responsabilidad transportarse en un vehículo que se desplazaba en estas condiciones, es decir, con las puertas abiertas, mientras iba colgado de la puerta; las reglas de la experiencia dictarían que las personas deben salvaguardar su integridad personal mientras se movilizan en un vehículo automotor. Es decir, si bien el demandante no estaba ejerciendo una actividad peligrosa, lo que si deberá tener en cuenta el Despacho, es que de cualquier modo como agente que actuaba como pasajero debió prever las consecuencias de exponerse ante un riesgo como el de movilizarse en un vehículo con las puertas abiertas, sin cinturón de seguridad, probablemente de pie y todo esto repercutió de forma directa en la gravedad de las lesiones que son presentadas en el escrito de demanda.

Conforme a lo dicho, el Despacho debe establecer un análisis causal de las conductas implicadas en el evento dañoso, a fin de determinar la incidencia del señor William David Perea en la ocurrencia del accidente. Lo anterior, a efectos de disminuir la indemnización si es que a ella hubiere lugar, en proporción a su contribución en la ocurrencia del suceso que derivó en sus lesiones, que ocurrió como consecuencia de su conducta imprudente. Así es como lo ha indicado la Corte Suprema de Justicia en pronunciamiento del 19 de noviembre de 1993:

*“(…) Para aquellos eventos en los que tanto el autor de la conducta dañosa como el damnificado concurran en la generación del perjuicio, el artículo 2357 del Código Civil consagra una regla precisa, según el cual* ***“‘[l]a apreciación del daño está sujeta a reducción, si el que lo ha sufrido se expuso a él imprudentemente’****. Tradicionalmente, en nuestro medio se le ha dado al mencionado efecto la denominación “compensación de culpas (…)”[[17]](#footnote-17)* (Subrayado y negrilla fuera del texto original)

En distinto pronunciamiento, la misma Corporación manifestó que en el caso en que la negligencia de la víctima incida para que se exponga imprudentemente al daño, deberá necesariamente realizarse una reducción de la indemnización. Lo anterior fue manifestado en un caso en el que se evidenció la culpa de la víctima en la ocurrencia del daño, estimada en una proporción del 40% de los perjuicios:

*“(…) En cuanto a la conducta de la víctima, analizada desde lo culpabilístico, es concurrente del hecho dañoso, por infringir los artículos 77 y 79 de la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito Terrestre), al aparcar en lugar prohibido y sin encender las luces de parqueo. Empero, la violación de tales normas viales no resultan incidentes en un 50% de la causa del accidente, pues amén de su transgresión, el otro maquinista lo vio a cierta distancia estacionado, sólo que éste fue negligente, pues al no disminuir la velocidad ni cambiar de calzada, chocó con él.*

*Sin embargo,* ***aunque el obrar de Carlos Alirio Méndez Lache no fue determinante en una mitad en la producción del resultado dañoso, su actuar, aunque pasivo por no desarrollar al conducción, fue causante como mínimo del mismo, porque al detenerse sobre la carretera, asumió́ un riesgo razonablemente previsible, propio de las incidencias de la circulación, como lo es el de resultar impactado, ya sea por la actividad de otro conductor.***

*Debió́ entonces tomar “precauciones” a fin de evitar el siniestro, como haber parqueado en una berma, o en un lugar permitido para ello, evitando, en todo caso, convertirse en un obstáculo directo para vehículos en marcha en un segmento de la vía que les permite alcanzar altas velocidades.*

*Así las cosas, la mencionada negligencia y situación de riesgo provocada por el demandante, conducen a esta Corte, en atención a los elementos concausales y culpabilísticos, a modificar su porcentaje de concurrencia en un 40% (…).”[[18]](#footnote-18)* (Subrayado y negrilla fuera del texto original)

Como se lee, el fallador encontró probada la incidencia de la víctima en la causa generadora del daño, en proporción a un 40% y en ese sentido redujo los perjuicios que se probaron en el proceso en el mismo porcentaje. Comoquiera que la responsabilidad del demandado resultó menguada por la participación determinante de la víctima en la ocurrencia del suceso. De tal suerte que queda completamente claro que el fallador debe considerar el marco de circunstancia en que se produce el daño, así como sus condiciones de modo, tiempo y lugar, a fin de determinar la incidencia causal de la conducta de la víctima en la ocurrencia del daño por el cual solicita indemnización.

Descendiendo al caso en concreto se comprueba la injerencia de la conducta ejercida en cabeza del señor William Perea en tanto fue este quien expuso imprudentemente su vida, por cuanto incumplió sus deberes de cuidado, pues iba colgado de la puerta del vehículo, situación por lo demás extremadamente imprudente, comoquiera que el vehículo automotor se desplazaba con las puertas abiertas. Es decir que, de manera voluntaria, asumió un riesgo que a la postre se materializó en sus lesiones.

Se pone de presente al Despacho una falta total de prudencia de la víctima, dado que el accidente habría podido evitarse si el señor William Perea se hubiese autocuidado y hubiera descendido o decidido no abordar el vehículo que no estaba atendiendo las normas de tránsito. Recordará el Despacho que el Código Nacional de Tránsito en su artículo 81 y 82 dispone las normas generales y prohibición para la circulación de vehículos incluyendo el comportamiento de los pasajeros, donde determina que:

*“(…)* ***Artículo 81.*** *Puertas cerradas.* ***Los vehículos deberán transitar siempre con todas sus puertas debidamente cerradas.***

***Artículo 82.*** *(…) Es obligatorio el uso del cinturón de seguridad por parte del conductor y de los pasajeros ubicados en los asientos delanteros del vehículo en todas las vías del territorio nacional, incluyendo las urbanas.*

***Artículo 131.*** *Los infractores de las normas de tránsito serán sancionados con la imposición de multas, de acuerdo con el tipo de infracción así:*

*(…) B.18. Conducir un vehículo de transporte público individual de pasajeros sin cumplir con lo estipulado en el presente código. (…)*

*C.6. No utilizar el cinturón de seguridad por parte de los ocupantes del vehículo. (…)*

*C.10. Conducir un vehículo con una o varias puertas abiertas. (…)“*

Bajo dicho derrotero, es evidente que el señor William David Perea Montaño realizó una conducta negligente, exponiendo su vida imprudentemente al desplazarse colgando de las puertas de un vehículo, de esta manera desatendiendo las leyes que regulan el tránsito en Colombia.

Aunado a lo anterior, de acuerdo con lo descrito en el IPAT las lesiones se producen porque el señor se movilizaba con las puertas abiertas, mientras colgaba de las mismas, lo que por inferencia lógica permite concluirse que se movilizaba sin la debida utilización del cinturón de seguridad. Esto quiere decir que, de acuerdo con lo mencionado por el extremo actor, además de movilizarse en un vehículo automotor con las puertas abiertas exponiéndose a su propio riesgo, no guardaba las medidas de seguridad adecuadas para cuidar de su integridad personal, contraviniendo igualmente lo dispuesto en norma previamente mencionada. Entonces no puede ser desconocido por el Despacho, y queda claro que la causa que ocasionó el accidente en el que resultó presuntamente lesionado el señor William David Perea Montaño tuvo su injerencia en una proporción que debe ser analizada por el juzgador.

En ese orden de ideas, tal como lo ha determinado la jurisprudencia, al encontrarse acreditado por medio de las pruebas que obran en el expediente que el comportamiento del señor William David Perea Montaño tuvo incidencia en la ocurrencia del accidente de tránsito acaecido 16 de mayo del 2022, deberá declararse o tasarse su porcentaje de participación en la causación del daño. En virtud de lo anterior, es importante recordar que el actuar de la víctima fue imprudente, toda vez que, de acuerdo con el la historia clínica, el señor William David Perea iba colgando de la puerta del vehículo SPY096*.* Esto implicaría que, a pesar de que el demandante no venía conduciendo el automotor referido, sí decidió bajo su mismo riesgo y responsabilidad transportarse en un vehículo que se desplazaba en estas condiciones, es decir, con las puertas abiertas; además, sin cinturón de seguridad, mientras colgaba de la puerta del automotor.

Por las razones expuestas, solicito respetuosamente declarar probada esta excepción.

### IMPROCEDENCIA, FALTA DE MEDIO DE PRUEBA E INDEBIDA CUANTIFICACIÓN DE LOS PERJUICIOS MATERIALES EN LA MODALIDAD DE LUCRO CESANTE.

Mediante la presente excepción se demostrará al Despacho que al demandante no se le puede reconocer ninguno de los conceptos indemnizatorios materiales que solicita en la demanda. Lo anterior, pues frente al lucro cesante debe advertirse que: (i) En el expediente no reposa ningún certificado laboral o de ingresos o documento similar tendiente a acreditar la actividad laboral o económica del demandante; (ii) El señor William David Perea no trabaja (pues no se encuentra demostrado lo contrario), ni genera ingresos, por lo tanto, los hechos del 16 de mayo del 2022 no afectaron en nada las condiciones económicas que antes tenía la demandante; (iii) Se verifica que el cálculo efectuado por tal concepto, se hace de manera equivocada comoquiera que el apoderado de la activa tiene presente el porcentaje prestacional, cuando el demandante no cuenta con ningún registro ante el sistema de seguridad social; y (iv) Además, se constata que, en la calificación allegada, no se señala de manera precisa la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral, lo cual impide determinar con certeza que la disminución alegada por la demandante sea consecuencia directa del accidente de tránsito que dio origen a la presente demanda.

El lucro cesante ha sido entendido como una categoría de los perjuicios materiales de naturaleza económica y de contenido pecuniario. Es decir, que puede cuantificarse en una suma de dinero y que consiste en la afectación o menoscabo de un derecho material o patrimonial, reflejado en la ganancia o ingreso que se ha dejado de percibir y que no ingresará al patrimonio de la persona. En otras palabras, se deja de recibir cuando se sufre un daño y puede ser percibido a título de indemnización por las víctimas directas o indirectas cuando se imputa al causante del perjuicio la obligación de reparar.

No obstante, para indemnizar un daño, además de su existencia cierta, actual o futura, es necesaria su plena demostración en el proceso con elementos probatorios fidedignos e idóneos, como lo son aquellos medios permitidos en el ordenamiento jurídico. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia ha sostenido lo siguiente:

*“(…) en cuanto perjuicio,* ***el lucro cesante debe ser cierto, es decir, que supone una existencia real, tangible, no meramente hipotética o eventual****. (…) Vale decir que el* ***lucro cesante ha de ser indemnizado cuando se afinca en una situación real, existente al momento del evento dañoso, condiciones estas que, justamente, permiten inferir, razonablemente, que las ganancias o ventajas que se percibían o se aspiraba razonablemente a captar dejarán de ingresar al patrimonio fatal o muy probablemente*** *(…) Por último están todos aquellos “sueños de ganancia”, como suele calificarlos la doctrina especializada, que no son más que* ***conjeturas o eventuales perjuicios que tienen como apoyatura meras hipótesis, sin anclaje en la realidad que rodea, la causación del daño, los cuales, por obvias razones, no son indemnizables*** *(…)”[[19]](#footnote-19).* (Subrayado y negrilla fuera del texto original).

Ahora bien, se debe mencionar que todas las posibles discusiones que pueden emerger frente al particular fueron zanjadas mediante el más reciente pronunciamiento de unificación del Consejo de Estado en la Sentencia No. 44572 del 18 de julio de 2019 proferida por la Sección Tercera, M.P. Carlos Alberto Zambrano. Providencia en la que se elimina la presunción según la cual toda persona en edad productiva percibe al menos un salario mínimo, en tanto contraría uno de los elementos del daño, esto es la certeza. De manera que el lucro cesante solo reconocerá cuando obren pruebas suficientes que acrediten que efectivamente la víctima dejó de percibir los ingresos o perdió una posibilidad cierta de percibirlos. En dicho pronunciamiento se manifestó literalmente lo siguiente:

*“(…) La ausencia de petición, en los términos anteriores, así como el incumplimiento de la carga probatoria dirigida a demostrar la existencia y cuantía de los perjuicios debe conducir, necesariamente, a denegar su decreto. (…)*

*En los casos en los que se pruebe que la detención produjo la pérdida del derecho cierto a obtener un beneficio económico, lo cual se presenta cuando la detención ha afectado el derecho a percibir un ingreso que se tenía o que con certeza se iba a empezar a percibir, el juzgador solo podrá disponer una condena si, a partir de las pruebas obrantes en el expediente, se cumplen los presupuestos para ello, frente a lo cual se requiere que se demuestre que la posibilidad de tener un ingreso era cierta, es decir, que correspondía a la continuación de una situación precedente o que iba a darse efectivamente por existir previamente una actividad productiva lícita ya consolidada que le permitiría a la víctima directa de la privación de la libertad obtener un determinado ingreso y que dejó de percibirlo como consecuencia de la detención.*

***Entonces, resulta oportuno recoger la jurisprudencia en torno a los parámetros empleados para la indemnización del lucro cesante y, en su lugar, unificarla en orden a establecer los criterios necesarios para: i) acceder al reconocimiento de este tipo de perjuicio y ii) proceder a su liquidación****.*

*La precisión jurisprudencial tiene por objeto eliminar las presunciones que han llevado a considerar que la indemnización del perjuicio es un derecho que se tiene per se y establecer que su existencia y cuantía deben reconocerse solo: i)a partir de la ruptura de una relación laboral anterior o de una que, aun cuando futura, era cierta en tanto que ya estaba perfeccionada al producirse la privación de la libertad o ii) a partir de la existencia de una actividad productiva lícita previa no derivada de una relación laboral, pero de la cual emane la existencia del lucro cesante (…)”.15* (Subrayado y negrilla fuera del texto original).

Este pronunciamiento entonces excluye posibilidad alguna de que se reconozca lucro cesante a una persona que, aunque esté en edad productiva, no acredite los ingresos percibidos por el efectivo desarrollo de una actividad económica. Lo anterior, por contrariar el carácter cierto del perjuicio, siendo entonces una utilidad meramente hipotética o eventual. En este orden de ideas, es claro que en ningún caso procede el reconocimiento solicitado por la parte demandante, toda vez que los supuestos perjuicios en los que se fundamentan las pretensiones de la demanda, fueron calculados sin que exista prueba en el plenario que acredite que William David Perea Montaño devengaba algún tipo de ingreso para la fecha del accidente. De tal suerte, que en el caso sub judice no puede presumirse el lucro cesante a favor del demandante como consecuencia del suceso que tuvo lugar el 16 de mayo de 2022, por cuanto no hay prueba fehaciente de ingresos percibidos por el señor William David Perea Montaño, así como tampoco existe prueba de la actividad económica desempeñada el demandante para la fecha referida.

Así, resulta evidente que para reconocer la indemnización del lucro cesante es necesario, de un lado, estar en presencia de una alta probabilidad de que la ganancia esperada iba a obtenerse y de otro, que sea susceptible de evaluarse concretamente. Sin que ninguna de esas deducciones pueda estar soportada en simples suposiciones o conjeturas, porque de ser así, se estaría en frente de una utilidad meramente hipotética o eventual. De manera que el lucro cesante solo reconocerá cuando obren pruebas suficientes que acrediten que efectivamente la víctima dejó de percibir los ingresos o perdió una posibilidad cierta de percibirlos. En reciente pronunciamiento la Corte Suprema de Justicia manifestó literalmente lo siguiente

*“(…) Esta tipología de daño patrimonial corresponde a la ganancia esperada, de la que se ve privada la víctima como consecuencia del hecho dañoso padecido; desde luego,* ***a condición de que no sea sólo hipotética, sino cierta y determinada o determinable****, y se integra por «todas las ganancias ciertas que han dejado de percibirse o que se recibirían luego, con el mismo fundamento de hecho», según lo explicó esta Corporación en CSJ SC, 28 jun. 2000, rad. 5348, reiterada en CSJ SC16690-2016, 17 nov (…)”*

Por el mismo sendero, en sentencia CSJ SC11575-2015, 31 ago., la Sala enfatizó que la reparación del lucro cesante lo siguiente:

*“(...)* ***resulta viable en cuanto el expediente registre prueba concluyente y demostrativa de la verdadera entidad y extensión cuantitativa del mismo. En caso contrario, se impone rechazar por principio conclusiones dudosas*** *o contingentes acerca de las ganancias que se dejaron de obtener apoyadas tales conclusiones en simples esperanzas, expresadas estas en ilusorios cálculos que no pasan de ser especulación teórica, y no en probabilidades objetivas demostradas con el rigor debido (…)”[[20]](#footnote-20)* (Subrayado y negrilla fuera del texto original)

Así las cosas, es claro que para que sea reconocido el lucro cesante futuro deberá demostrarse con un mínimo razonable la certeza el daño y el ingreso a obtener. Por tanto, comoquiera que en el caso en concreto, se verifica que el demandante no cuenta con ningún registro ante el sistema de seguridad social.

En conclusión, es improcedente el reconocimiento del lucro cesante al no encontrarse acreditado el valor cierto de los ingresos percibidos por el señor William David Perea Montaño para el momento del accidente de tránsito ni tampoco prueba de su actividad económica. Es decir, ante la evidente ausencia de un medio probatorio que acredite el valor de los ingresos en el momento el accidente de tránsito y la actividad económica del señor Perea Montaño es claro que la pretensión encaminada a obtener un reconocimiento por este concepto no está llamada a prosperar. Así mismo, como no se aportó un dictamen pericial que acredite la pérdida de capacidad laboral es totalmente improcedente.

Por todo lo expuesto, solicito declarar debidamente probada esta excepción.

### TASACIÓN EXORBITANTE DE LOS PERJUICIOS MORALES.

Por medio de la presente excepción se pretende demostrar al Honorable Despacho que el extremo procesal activo no acredita, argumenta, explica ni justifica de manera alguna la valoración sobre la tasación de las sumas de dinero pretendidas bajo el concepto de daño moral. Lo anterior, pues únicamente se limita a solicitar un monto a favor de los demandantes, sin que se argumente y/o sustente lo allí pretendido. Por otro lado, las sumas pretendidas bajo este concepto son exageradas y no se encuentran delimitadas ni enmarcadas de acuerdo a los lineamientos jurisprudenciales de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, pues se solicitan valores que han sido reconocidos en casos excepcionales a víctimas cuyas lesiones han sido más graves o incluso en eventos de invalidez y muerte.

Resulta pertinente recordar que, con relación a la ponderación de los daños morales que pretende la parte actora, si bien la misma se encuentra deferida al recto criterio del fallador, estas deben ser debidamente acreditadas, demostradas y tasadas por quien las pretende, teniendo en cuenta además que, este tipo de perjuicios “*(…) se trata de agravios que recaen sobre intereses, bienes o derechos que por su naturaleza extrapatrimonial o inmaterial resultan inasibles e inconmensurables(…)*”[[21]](#footnote-21). Sobre este tipo de perjuicio, la Corte ha reseñado que el mismo no “*constituye un «regalo u obsequio*»” por el contrario, se encuentra encaminado a “*(…) reparar la congoja, impacto directo en el estado anímico espiritual y en la estabilidad emocional de la persona que sufrió la lesión y de sus familiares (…)*”[[22]](#footnote-22), con sujeción a los elementos de convicción y las particularidades de la situación litigiosa. Sin perjuicio de los criterios orientadores de la jurisprudencia, en procura de una verdadera, justa, recta y eficiente impartición de justicia[[23]](#footnote-23).

La Corte ha fijado como baremo indemnizatorio el tope de $60.000.000 para los familiares en primer grado de consanguinidad y afinidad, tal y como se muestra a continuación:

*“(…) Atendiendo las pautas jurisprudenciales establecidas por esta Corporación de cara a las trágicas e inesperadas circunstancias en que aconteció la muerte del señor Ramírez Zuluaga, se fija en la suma de* ***sesenta millones de pesos ($60.000.000)*** *el monto de los perjuicios morales que deberán ser resarcidos a la demandante en su calidad de cónyuge de la víctima (…)*”[[24]](#footnote-24) (Subrayado y negrilla fuera del texto original).

Por tanto, corresponderá al arbitrio del juez determinar el valor del daño moral, teniendo en cuenta los elementos probatorios que reposan en el expediente. Además, teniendo como parámetro y límite que en los más graves casos como lo son del fallecimiento de la víctima, la jurisprudencia ha reconocido una indemnización hasta el $60.000.000 a sus familiares de primer grado de consanguinidad y primero de afinidad. Es por ello, que la suma solicitada de $78.000.000 por cada uno de los demandantes, resulta claramente exorbitante, pues la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil no reconoce tan alta cifra como indemnización por daños morales.

Según la jurisprudencia citada, es menester advertir que (i) es excesivo el valor pretendido por la parte demandante (ii) no hay prueba en el expediente que acredite una lesión tan grave que se supere el 50% de la PCL, así entonces no hay lugar a reconocer el máximo de la indemnización contemplada por los criterios Jurisprudenciales, y (iii) no hay prueba en el proceso que acredite la gravedad de las secuelas, por ende, comoquiera que no hay prueba de la gravedad de las lesiones la tasación deberá desestimarse, pues las pretensiones invocadas por la parte Demandante evocan un evidente ánimo especulativo.

En atención a los argumentos expuestos, la pretensión de reconocimiento de perjuicios morales en cabeza de la demandante se encuentra totalmente alejada de los criterios normativos y jurisprudenciales que se han sostenido durante años. Lo anterior, al no encontrarse acreditado, en primer lugar, la responsabilidad en cabeza de los demandados y, en segundo lugar, de forma clara y fehaciente los valores pretendidos, ya que sólo se estipulan unos rubros sin indicación de su procedencia. La doctrina ha establecido, en relación a la naturaleza demostrable de los perjuicios morales, lo siguiente:

“*(…) Los perjuicios morales subjetivados, igual que los materiales, deben aparecer demostrados procesalmente. Si bien su cuantificación económica es imposible, dada la naturaleza misma del daño,* ***lo cierto es que su intensidad es perfectamente demostrable****. La medicina y la psiquiatría contemporáneas pueden dictaminar casi con exactitud el grado y duración del dolor físico y psíquico (…)*”[[25]](#footnote-25). (Negrillas fuera del texto original).

En conclusión, es claro que la parte demandante, con la solicitud de reconocimiento de este perjuicio, no acredita con ningún medio de prueba los requisitos mínimos necesarios para que sea reconocido este concepto indemnizatorio, toda vez que no hay congruencia entre lo pretendido, los supuestos fácticos del caso y los lineamientos que al respecto ha emitido la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. Además, la parte demandante solicita valores superiores incluso a los reconocidos en eventos de invalidez y muerte de la víctima y, en el presente caso, se trata de un lesionado. Por otro lado, sus peticiones son abiertamente exageradas, inconducentes e injustificadas por cuanto solicita el reconocimiento de sumas de dinero que han sido concedidas excepcionalmente en casos de mayor gravedad.

Por todo lo anterior solicito respetuosamente declarar probada esta excepción.

### IMPROCEDENCIA DEL RECONOCIMIENTO POR DAÑO A LA VIDA DE RELACIÓN.

Sea lo primero indicar que el daño a la vida de relación se presenta cuando la víctima sufre una alteración psicofísica que le impide o dificulta gozar de actividades rutinarias o bienes de la vida que disfrutaba antes del hecho lesivo. Así, este perjuicio se ve reflejado en el deterioro de la calidad de vida de la víctima y la pérdida de la posibilidad de tener contacto con las demás personas o relacionarse con ellas. En otras palabras, es improcedente el reconocimiento del daño a la vida de relación, teniendo en cuenta que en este caso no se encuentran acreditados los requisitos para su solicitud. En efecto, en el asunto que nos asiste, la parte demandante está solicitando esta indemnización como consecuencia de la causación de unas lesiones, sin que se haya incorporado prueba suficiente frente a la gravedad de la lesión, ni que efectivamente la misma le genera actualmente una afectación en la forma en la que desarrolla sus actividades normalmente.

Adicionalmente, se advierte que el reconocimiento del daño a la vida en relación, se reconoce única y exclusivamente a la víctima directa del daño, por lo cual, resulta totalmente improcedente el reconocimiento a cualquier otro reclamante y que no tenga su génesis en la producción de lesiones. De todas maneras, la cuantificación que por este concepto solicita la parte demandante es exorbitante pues, como veremos más adelante, desatiende los baremos jurisprudenciales que, sobre el daño a la vida de relación, se ha referido la Corte Suprema de Justicia.

En la actualidad, como es bien sabido, el daño a la vida de relación pretende reparar el mismo perjuicio sufrido en la órbita física y psicológica de la víctima que le impide realizar aquellas actividades agradables a la existencia, sin que este tipo de perjuicio tenga por vocación reconocerse en todos los casos. En efecto, pues hoy el mismo se ha admitido excepcionalmente cuando se trata de lesiones graves, que afecten la órbita de desenvolvimiento del lesionado y sólo para ser indemnizado a la víctima directa, por estar asociado estrictamente con lesiones físicas o anatómicas. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, ha delimitado el concepto de daño a la vida de relación y lo diferencia del daño moral, así:

*“(…) Como se observa, a diferencia del daño moral, que corresponde a la órbita subjetiva, íntima o interna del individuo, el daño a la vida de relación constituye una afectación a la esfera exterior de la persona, que puede verse alterada en mayor o menor grado a causa de una lesión inflingida (sic) a los bienes de la personalidad o a otro tipo de intereses jurídicos, en desmedro de lo que la Corte en su momento denominó “actividad social no patrimonial”.*

*Dicho con otras palabras, esta especie de perjuicio puede evidenciarse en la disminución o deterioro de la calidad de vida de la víctima, en la pérdida o dificultad de establecer contacto o relacionarse con las personas y cosas, en orden a disfrutar de una existencia corriente, como también en la privación que padece el afectado para desplegar las más elementales conductas que en forma cotidiana o habitual marcan su realidad. Podría decirse que quien sufre un daño a la vida de relación se ve forzado a llevar una existencia en condiciones más complicadas o exigentes que los demás, comoquiera que debe enfrentar circunstancias y barreras anormales, a causa de las cuales hasta lo más simple se puede tornar difícil. Por lo mismo, recalca*

*la Corte, la calidad de vida se ve reducida, a paso que las posibilidades, opciones, proyectos y aspiraciones desaparecen definitivamente o su nivel de dificultad aumenta considerablemente. Es así como de un momento a otro la víctima encontrará injustificadamente en su camino obstáculos, preocupaciones y vicisitudes que antes no tenía, lo que cierra o entorpece su acceso a la cultura, al placer, a la comunicación, al entretenimiento, a la ciencia, al desarrollo y, en fin, a todo lo que supone una existencia normal, con las correlativas insatisfacciones, frustraciones y profundo* malestar (…)”[[26]](#footnote-26).

Para conocer a mayor profundidad lo que ha establecido la Corte Suprema de Justicia en algunos casos en los que excepcionalmente se reconoció este concepto indemnizatorio, es preciso señalar el siguiente caso: la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia ordenó el pago de 50 SMLMV para la víctima directa por los perjuicios causados con la pérdida de la capacidad de locomoción permanente, como consecuencia de accidente de tránsito por exceso de velocidad del vehículo en el que iba de pasajera[[27]](#footnote-27). Nótese que en dicho caso la victima perdió su movilidad de forma definitiva, en cambio en el presente caso no. En otro penoso caso, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia ordenó el pago de $ 30.000.000 a la víctima directa **por los perjuicios ocasionados por la extracción de su ojo izquierdo**.

Obsérvese que, en los casos antes referidos, la víctima quedó con secuelas para toda la vida y que afectaron directamente su interacción con el mundo exterior. Las secuelas fueron de tal magnitud, que era de esperarse que su actitud y su forma de ser cambiara abruptamente tras los hechos que motivaron cada una de las anteriores demandas. En el caso particular que nos cita al presente proceso, no se vislumbra un medio de prueba que permita acreditar que el señor Perea Montaño tuvo consecuencias permanentes en su corporeidad que afectaron su estilo de vida, su relación con los demás o consigo mismo, ni mucho menos el de sus familiares.

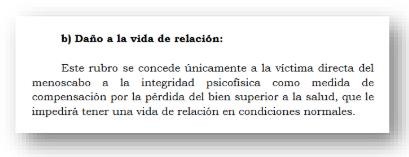
Es indispensable reiterar que el caso particular se trata de lesiones de menor gravedad. Se está solicitando una suma de dinero abiertamente improcedente por cuanto no se observa ningún detrimento de tipo personal que se avizore en el demandante, tampoco una secuela que haya impedido continuar con su vida de forma normal o con regularidad a la que llevaban antes de los hechos que nos citan al proceso. Por lo tanto, la pretensión por este concepto no se encuentra probada, es desbordada y no se ajusta a los criterios que sobre este tipo de perjuicio ha establecido la jurisprudencia, no siendo procedente su reconocimiento, para lo cual nos remitimos a la argumentación expuesta en el literal anterior.

En línea con lo anterior, debe resaltarse aquello se ha reafirmado por la Corte Suprema de Justicia al indicar que el daño a la vida de relación se presenta cuando la víctima sufre una alteración psíquica o física que el impide o dificulta gozar de actividades rutinarias que disfrutaba antes del hecho lesivo. No obstante, **el daño a la vida en relación sólo se le debe reconocer a la víctima directa.** En otras palabras, el daño a la vida en relación sólo se debe reconocer a quien sufrió una alteración física o psíquica por el accidente, esto es, a la víctima directa. En tal sentido, la Corte Suprema de Justicia precisó:

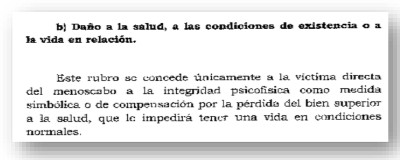
*“(…) b) Daño a la vida de relación: Este rubro se concede únicamente a la víctima directa del menoscabo a la integridad psicofísica como medida de compensación por la pérdida del bien superior a la salud, que le impedirá tener una vida de relación en condiciones normales (…)”. 21 (Subrayado y negrilla fuera del texto original)[[28]](#footnote-28)*.

Además, también es menester señalar otros pronunciamientos de donde se extrae la inviabilidad de condenar al pago de esta tipología de perjuicio a favor de las victimas indirectas, veamos:

**Sentencia SC9193-2017[[29]](#footnote-29)**

****

**Sentencia 562-2020[[30]](#footnote-30)**



De las anteriores sentencias de la Corte Suprema emerge con claridad como el daño a la vida de relación no puede ser reconocido a personas distintas a la víctima directa del daño, esto es al señor Perea Montaño, por lo cual la situación que en el caso de marras se torna imposible dado que, dentro del escrito de la demanda, se solicita el reconocimiento del daño a la vida en relación, para todos los demandantes. Además, al margen de la improcedencia de reconocer esta tipología de perjuicios a las víctimas indirectas, lo cierto es que las sentencias antes aludidas incluso fijan parámetros a tener en cuenta para la procedencia el daño a la vida de relación, a fin de no confundirse con el daño moral, pues de lo contrario se indemnizaría dos veces un mismo perjuicio.

Ahora, respecto del daño a la salud, cabe destacar que de acuerdo con los postulados jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia[[31]](#footnote-31), el mismo se encuentra incluido en el daño a la vida en relación, comoquiera que el mismo se deriva internamente del desarrollo de la víctima, *donde se tienen presentes las alteración de carácter emocional como consecuencia del “daño” sufrido en el cuerpo o la salud generando la pérdida o mengua de la posibilidad de ejecución de actos y actividades que hacían más agradable la vida[[32]](#footnote-32)*. En ese orden de ideas, es claro como reconocer el concepto de daño a la salud, en primera medida vulnera los pronunciamientos jurisprudenciales, y, por otro lado, se estría generado una doble indemnización por conceptos que claramente esta unidos y han sido tasados y reconocidos únicamente bajo el concepto de daño a la vida en relación, dando lugar a un enriquecimiento sin causa en cabeza de los demandantes.

En conclusión, el reconocimiento de este perjuicio es improcedente, pues no se encuentra plenamente acreditado dentro del presente proceso. Lo anterior, por cuanto el mismo sólo se concede en casos especialísimos a víctimas cuyas lesiones sean de tal gravedad que impacten directamente el estilo de vida de la persona y no de los familiares como también se pretende en la demanda. Sin embargo, el caso particular se trata de lesiones de menor gravedad. Además, como se expuso, es exagerado el monto pretendido con relación al presunto daño sufrido, lo debidamente demostrado en el proceso y el baremo jurisprudencial que al respecto ha emitido reiteradamente el órgano de cierre en la jurisdicción ordinaria especialidad civil.

Por todo lo anterior, solicito declarar probada esta excepción.

### INEXISTENCIA DE LA PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD, CONSECUENTEMENTE NO SE PUEDE ORDENAR SU INDEMNIZACIÓN

En cuanto a la supuesta pérdida de oportunidad, debo indicar como primera medida que los ánimos de ganancia eventuales o hipotéticos no son susceptibles de sufrir menoscabo, pues la certeza es una característica del daño indemnizable. En el caso que nos ocupa, se tiene que el apoderado de la parte actora en el escrito de demanda no explica cuál es la supuesta oportunidad que ha perdido el señor William Perea y su grupo familiar aquí demandante y mucho menos se aporta alguna prueba tendiente a demostrar la configuración de este daño, toda vez que ni siquiera se ha determinado, la existencia de la oportunidad perdida. Luego, ni si quiera la parte ha podido precisar en qué se circunscribe el daño supuestamente sufrido y por el cual debe ser indemnizado, de tal manera que solo hay evidentes intenciones de ganancia que no corresponden a un daño tangible, cierto y preciso.

Es menester, traer a consideración el postulado de la H. Corte Suprema frente al tema en particular, para ello resulta de utilidad lo dispuesto en la sentencia SC5885-2016, en donde se explica de manera detallada los presupuestos que componen esta tipología de daño y los supuestos para que pueda ser indemnizado, veamos:

*“(…) Sus presupuestos axiológicos, para que pueda considerarse como daño indemnizable según la elaboración jurisprudencial de esta Corporación refieren a: (i)* ***Certeza respecto de la existencia de una legítima oportunidad****, y aunque la misma envuelva un componente aleatorio, la “chance” diluida debe ser seria, verídica, real y actual; (ii)* ***Imposibilidad concluyente de obtener el provecho o de evitar el detrimento por razón de la supresión definitiva de la oportunidad*** *para conseguir el beneficio, pues si la consolidación del daño dependiera aún del futuro, se trataría de un perjuicio eventual e hipotético, no susceptible del reconocimiento de una indemnización […]; y (iii)* ***La víctima debe encontrarse en una situación potencialmente apta para pretender la consecución del resultado esperado; no es cualquier expectativa o posibilidad la que configura el daño, porque si se trata de oportunidades débiles, lejanas o frágiles****, no puede aceptarse que […] su frustración inevitablemente conllevaría en la afectación negativa del patrimonio u otros intereses lícitos (…)”*

De lo anterior, es pertinente resaltar que ninguno de los presupuestos que ha definido la jurisprudencia se encuentran satisfechos porque: (i) ni siquiera en el escrito de demanda se ha expresado puntualmente cuál es la oportunidad perdida, es decir no hay certeza; (ii) no se expresa en que consiste el detrimento como consecuencia de la oportunidad presuntamente frustrada por el evento dañoso y; (iii) de los sustentos fácticos y material probatorio no se vislumbra si quiera un resultado que esperaban las víctimas, es decir no existe la oportunidad y el daño es netamente fantasioso.

Consecuentemente, se tiene que, en definitiva, olvidó la parte demandante que para que se considere que se consumó una pérdida de oportunidad, la existencia del chance debe estar acreditada de forma suficiente, siendo esta una legítima oportunidad seria, verídica, real y actual, circunstancia que no sucedió, pues se reitera que la demanda se caracteriza por su orfandad probatoria. Efectivamente, se destaca que no es procedente indemnizar una mera expectativa que ni siquiera se define en el escrito de demanda, circunstancia que implica necesariamente el fracaso de esta pretensión.

Por todo lo expuesto, solicito declarar debidamente probada esta excepción.

## EXCEPCIONES DE FONDO FRENTE A LOS CONTRATOS DE SEGURO

### AUSENCIA DE COBERTURA MATERIAL DE LAS PÓLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL BÁSICA No. C2000156170 Y RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL EN EXCESO NO. C2000156173.

Teniendo en cuenta que la parte actora pretende obtener la indemnización por unos supuesto perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales, proveniente del accidente de tránsito presuntamente acaecido el día 16 de mayo de 2022, entre el vehículo asegurado por mi mandante de placas SKR112 y vehículo de servicio público identificado con placas SPY096, es claro que el debate gira en torno a verificar la configuración de los presupuestos de la responsabilidad civil extracontractual prescritos en el artículo 2341 y siguientes del Código Civil, es decir, no se contempla la responsabilidad civil desde la perspectiva del incumplimiento de contrato alguno, imposibilitando de esta forma la afectación de la póliza de RCC básica y en exceso contratadas por la asegurada, pues aquella solo cubre la responsabilidad civil de carácter contractual. De tal suerte, dichos contratos no prestan cobertura material para los hechos que aquí se ventilan.

Nuestra legislación civil contempla la posibilidad de exigir el resarcimiento por los perjuicios que determinada persona cause a otra debido a una conducta u omisión que no tiene origen, o no se desarrolla en el marco de una relación contractual, para tal efecto, esta posibilidad de resarcimiento de perjuicios se encuentra regulada en el artículo 2341 del Código Civil:

*“(…) ARTICULO 2341. <RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL>. El que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por la culpa o el delito cometido (…)”*

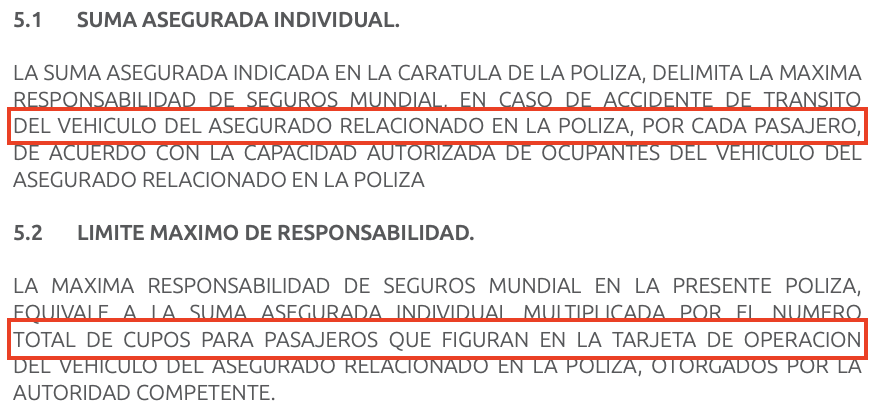
A su vez, el artículo 1056 del Código de Comercio permite establecer de forma libre a la compañía aseguradora los riesgos que desea asumir:

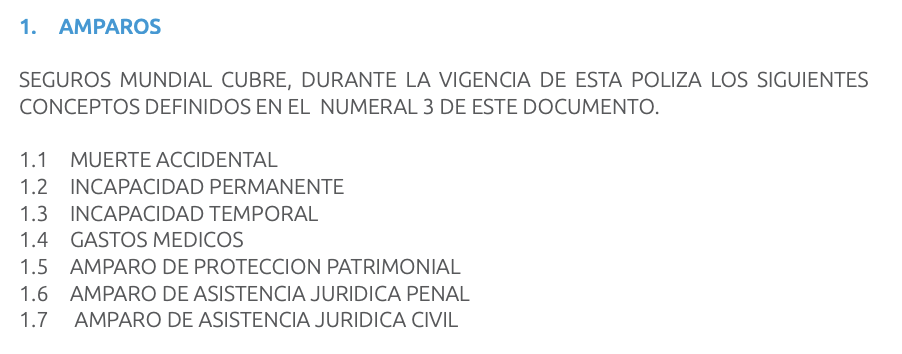
*“(…) ARTÍCULO 1056. <ASUNCIÓN DE RIESGOS>. Con las restricciones legales, el asegurador pondrá, a su arbitrio, asumir todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos el interés o la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del asegurado (…)”*

Es decir, la compañía aseguradora tiene libertad contractual para determinar si desea amparar la responsabilidad civil contractual o extracontractual, asunción de riesgo que servirá como guía al momento de verificar el surgimiento de la obligación a cargo de mi representada.

Ahora bien, en el caso concreto, la parte demandante manifiesta que la pasiva de la litis le causó perjuicios con ocasión del accidente de tránsito presuntamente ocurrido el día 16 de mayo de 2022, es decir, pretende el resarcimiento por perjuicios de índole patrimonial bajo un supuesto que escapa a las relaciones contractuales, por lo tanto, sustenta su pretensión en el artículo previamente citado que regula la responsabilidad civil extracontractual.

En contraposición a las circunstancias antes señaladas, la póliza de RCC No. C2000156170 prevé exclusivamente los perjuicios derivados de la responsabilidad civil contractual, es decir, surgidos por el incumplimiento de un contrato celebrado entre las partes del respectivo proceso, situación que no se acopla a la discusión que ocupa nuestra atención, en igual sentido, los amparos contemplados por la póliza no guardan relación alguna con lo pedido en la demanda, lo cual se observa a continuación:





Es claro como aún en un caso remoto, si se llegare a estudiar la afectación de la póliza en comento, dicho estudio no saldría avante toda vez que los amparos estipulados en las condiciones generales no contemplan los perjuicios patrimoniales causados a bienes de terceros. Más aún, pues el señor William David Perea no era pasajero del vehículo asegurado.

En este sentido, es preciso señalar que la misma suerte corre la póliza de RCC en exceso No. C C2000156173, pues la misma no fue expedida con la intención de amparar la responsabilidad civil extracontractual del asegurado, sino la responsabilidad contractual, la cual está fuera de discusión en el presente caso.

Por lo anterior es claro que en el remoto caso de que el Despacho tuviera acreditada la responsabilidad civil extracontractual de la parte pasiva, el estudio consecuente de la obligación que surgiere para la aseguradora con motivo en el contrato de seguro no podrá ampliarse a la póliza de responsabilidad civil contractual básica y a la póliza de responsabilidad civil contractual en exceso.

Solicito al Despacho tener por probada esta excepción.

### INEXISTENCIA DE OBLIGACIÓN DE INDEMNIZAR CON CARGO A LA PÓLIZA DE RCE BASICA No. C2000156167, POR INCUMPLIMIENTO DE LAS CARGAS DEL ARTÍCULO 1077 DEL C.CO.

Es necesario aclarar que, para que nazca a la vida jurídica la obligación condicional del asegurador, es requisito que el solicitante del amparo demuestre tanto la realización del riesgo asegurado, como también la cuantía de la pérdida. En tal virtud, si no se prueban estos dos elementos (la realización del riesgo asegurado y la cuantía de la pérdida) la prestación condicional de la aseguradora no nace a la vida jurídica y no podrá hacerse efectiva la póliza. Dado que en el presente caso no se demostró la realización del riesgo asegurado, es decir, la responsabilidad civil extracontractual del asegurado, La afectación de la póliza de seguro vinculada es inviable. En este punto es necesario advertir que las Pólizas No. C2000156167 y C2000156172, no podrán afectarse, toda vez que, en el Informe Policial de Accidente de Tránsito se determinó como causa del accidente de tránsito la No. 154 que corresponde a “*transitar con las puertas abiertas”* y la No. *157 “no estar atentos a los demás actores viales”*; ambas hipótesis atribuibles al conductor del vehículo de placas SPY 096. Por contera, es claro que no nació obligación de indemnizar por parte de la compañía de seguros.

Así entonces, para efectos de solicitudes de indemnización por los riesgos amparados, la carga probatoria gravita sobre la parte demandante. En ese sentido, el artículo 1077 del Código de Comercio, estableció: “*(…) ARTÍCULO 1077. <CARGA DE LA PRUEBA>. Corresponderá al asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida, si fuere el caso (…)”.*

El cumplimiento de tal carga probatoria respecto de la ocurrencia del siniestro, es fundamental para que se haga exigible la obligación condicional derivada del contrato de seguro, tal como lo ha indicado doctrina respetada sobre el tema, en el siguiente extracto:

“*(…) Es asunto averiguado que en virtud del negocio aseguraticio, el asegurador contrae una obligación condicional que el artículo 1045 del código de comercio califica como elemento esencial del contrato, cuyo objeto se concreta a pagar la indemnización cuando se realice el riesgo asegurado. Consecuente con esta concepción, el artículo 1054 de dicho estatuto puntualiza que la verificación del riesgo -como suceso incierto que no depende exclusivamente de la voluntad del tomador- “da origen a la obligación del asegurado” (se resalta), lo que significa que es en ese momento en el que nace la deuda y, al mismo tiempo, se torna exigible (…)”*

*“(…) Luego la obligación del asegurador nace cuando el riesgo asegurado se materializa, y cual si fuera poco, emerge pura y simple.*

*Pero hay más. Aunque dicha obligación es exigible desde el momento en que ocurrió el siniestro,* ***el asegurador, ello es medular, no está obligado a efectuar el pago hasta tanto el asegurado o beneficiario le demuestre que el riesgo se realizó y cuál fue la cuantía de su perdida.*** *(…) Por eso el artículo 1080 del Código de Comercio establece que “el asegurador estará obligado a efectuar el pago…[cuando] el asegurado o beneficiario acredite, aun extrajudicialmente, su derecho ante el asegurador de acuerdo con el artículo 1077”. Dicho en breve, el asegurador sabe que tiene un deber de prestación, pero también sabe que mientras el acreedor no cumpla con una carga, no tendrá que pagar (…)”*

*“(…) Se dirá que el asegurado puede acudir al proceso declarativo, y es cierto; pero aunque la obligación haya nacido y sea exigible, la pretensión fracasará si no se atiende la carga prevista en el artículo 1077 del Código de Comercio, porque sin el cumplimiento de ella el asegurador no debe “efectuar el pago” (C. de CO., art. 1080) (…)”[[33]](#footnote-33)* (Subrayado y negrilla fuera del texto original)

La importancia de la acreditación probatoria de la ocurrencia del siniestro, de la existencia del daño y su cuantía, se circunscribe a la propia filosofía resarcitoria del seguro. Consistente en reparar el daño acreditado y nada más que este. Puesto que, de lo contrario, el asegurado o beneficiario podría enriquecerse sin justa causa, al indemnizarle un daño inexistente. En esta línea ha indicado la Corte Suprema de Justicia lo siguiente:

*“(…) 2.1. La efectiva configuración del riesgo amparado, según las previsiones del artículo 1054 del Código de Comercio, “da origen a la obligación del asegurador”.*

*2.2. En consonancia con ello, “[e]l asegurado o el beneficiario [están] obligados a dar noticia al asegurador de la ocurrencia del siniestro” (art. 1075, ib.), información que en el caso de la póliza de que se trata, debía verificarse “dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que tenga conocimiento de la ocurrencia de un tratamiento de las enfermedades de Alto Costo relacionada en la Cláusula Primera, así no afecte la Cobertura provista mediante la presente póliza” (cláusula décima, condiciones generales, contrato de seguro).*

*2.3. Pero como es obvio entenderlo, no bastaba con reportar el siniestro, sino que era necesario además “demostrar [su] ocurrencia (…), así como la cuantía de la pérdida, si fuere el caso” (art. 1077, ib.).*

*2.4 Esos deberes acentúan su importancia en los seguros de daños, como el que es base de la acción, toda vez que ellos, “[r]especto del asegurado”, son “contratos de mera indemnización y jamás podrán constituir para él fuente de enriquecimiento” (art. 1088, ib.), de modo que “la indemnización no excederá, en ningún caso, el valor real del interés asegurado en el momento de siniestro, ni del monto efectivo del perjuicio patrimonial sufrido por el asegurado o el beneficiario” (art. 1089, ib.) (…)”[[34]](#footnote-34)*.

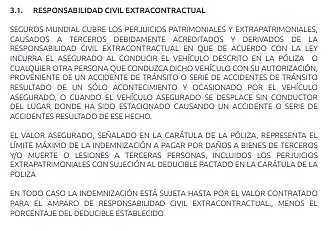
La Corte Suprema de Justicia, ha establecido lo siguiente frente a la obligación del asegurado en demostrar la cuantía de la pérdida:

*“(…)* ***Se lee en las peticiones de la demanda que la parte actora impetra el que se determine en el proceso el monto del siniestro. Así mismo, no cuantifica una pérdida. De ello se colige con claridad meridiana que la demandante no ha cumplido con la carga de demostrar la ocurrencia del siniestro y su cuantía que le imponen los artículos 1053 y 1077 del C. de Comercio.*** *En consecuencia y en el hipotético evento en que el siniestro encontrare cobertura bajo los términos del contrato de seguros, la demandante carece de derecho a demandar el pago de los intereses moratorios (…)”[[35]](#footnote-35)* (Negrilla y subrayado fuera del texto original)

De lo anterior, se infiere que, en todo tipo de seguros, cuando el asegurado o beneficiario quiera hacer efectivo el amparo, deberá demostrar la ocurrencia del siniestro y de ser necesario, también deberá demostrar la cuantía de la pérdida. Para el caso en estudio, debe señalarse como primera medida que la parte demandante no cumplió con la carga de la prueba consistente en demostrar la realización del riesgo asegurado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1072 del Código de Comercio. Según las pruebas documentales obrantes en el plenario, no se han probado estos factores, por lo que, en ese sentido, no ha nacido a la vida jurídica la obligación condicional del asegurador. A efectos de aclararle al Despacho las razones por las que no se encuentran cumplidas las cargas del artículo 1077, divido la excepción en dos subcapítulos, que permitirán un mejor entendimiento del argumento.

* 1. **La no realización del Riesgo Asegurado**

De conformidad con lo estipulado en las condiciones específicas la Póliza de Responsabilidad Civil Básica para Vehículos de Servicio Público No. C2000156167 y la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual Exceso No. C2000156172, podemos concluir que el riesgo asegurado no se realizó. El amparo de responsabilidad civil extracontractual que se pretende afectar se concertó en los siguientes términos:



En este orden de cosas, mediante el referido contrato de seguro, en virtud de la cual se vinculó a mi procurada al presente litigio, la aseguradora “*(…) cubre los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales, causados a terceros debidamente acreditados y derivados de la responsabilidad civil extracontractual en que de acuerdo con la ley incurra el asegurado al conducir el vehículo descrito en la póliza o cualquier otra persona que conduzca dicho vehículo con su autorización, proveniente de un accidente de tránsito o serie de accidentes de tránsito resultado de un sólo acontecimiento y ocasionado por el vehículo asegurado, o cuando el vehículo asegurado se desplace sin conductor del lugar donde ha sido estacionado causando un accidente o serie de accidentes resultado de ese hecho (…)*”. Sin embargo, en este caso encontramos que tal riesgo no se estructuró, pues conforme se explicó en el pronunciamiento frente a los hechos y pretensiones de la demanda, en el proceso no se puede determinar de forma alguna la responsabilidad por parte del señor del conductor del vehículo de placas SKR 112, pues es importante poner en conocimiento desde ya el Despacho, que NO HAY siquiera un medio de prueba a través del cual el apoderado de los demandantes acredite la ocurrencia del accidente de tránsito como responsabilidad del vehículo asegurado.

Se reitera de forma asidua que dentro del Informe Policial de Accidente de Tránsito (IPAT) No. A001403214 se estableció la hipótesis No. 154 que corresponde a “*transitar con las puertas abiertas”* y la No. 157 *“no estar atentos a los demás actores viales”;* ambas hipótesis atribuibles al conductor del vehículo de placas SPY 096.

En virtud de la clara inexistencia de responsabilidad del asegurado, la aseguradora deberá ser absuelta de cualquier responsabilidad indemnizatoria, pues al tenor del amparo contratado, se estipuló que mi representada cubre la responsabilidad en que incurra el asegurado. Sin embargo, el demandante no logró estructurar los elementos constitutivos para que se predique la responsabilidad a cargo del asegurado y con la configuración del hecho exclusivo de la víctima como eximente de responsabilidad y con eso se torna imposible acceder a reconocimientos económicos que deba asumir la aseguradora, pues el riesgo amparado no se configuró.

* 1. **Acreditación de la cuantía de la pérdida.**

Ahora bien, en relación con la demostración de la cuantía, debe resaltarse Señor Juez que, en línea a lo que se ha mencionado, los perjuicios que están siendo pretendidos en el escrito de demanda no se han demostrado dentro del presente litigio. En primer lugar, ante la ausencia de certeza del lucro, es decir, la existencia real, tangible y no meramente hipotética o eventual, es improcedente el reconocimiento de indemnización por esta tipología de perjuicios. Así mismo, en lo que respecta al daño moral y daño en la vida en relación no puede el demandante probar tampoco dicha afectación por cuanto, no se ha demostrado un nexo de causalidad entre las lesiones y la ocurrencia del accidente de tránsito conforme se desprende dentro del dictamen médico legal aportado. Finalmente, de acuerdo con lo establecido jurisprudencialmente no se cumplen con los parámetros exigidos para reclamar una indemnización por pérdida de oportunidad y los intereses moratorios sólo resultan a partir de la demostración del siniestro y la cuantía (artículo 1077 y 1080 del Código de Comercio) situación que no se ha demostrado en la presente Litis. De esa forma, es claro que no ha nacido la obligación condicional del Asegurador.

En conclusión, para el caso en estudio debe señalarse que la Póliza de Responsabilidad Civil Básica para Vehículos de Servicio Público No. C2000156167 no podrá ser afectada por cuanto la parte actora no demostró la realización del riesgo asegurado, pues no se ha presentado un evento en el cual haya sido declarada la responsabilidad civil del asegurado. Por el contrario, se observa de manera evidente, la completa ausencia de elementos materiales probatorios dentro del expediente que permitan endilgar responsabilidad al conductor del vehículo de placa SKR112, a su propietario y a mi mandante, de acuerdo a lo reiteradamente manifestado. Por otro lado, respecto de la acreditación de la cuantía de las sumas perdidas no se encontraron probadas, comoquiera el lucro cesante, y los perjuicios extrapatrimoniales solicitados son improcedentes e injustificados, teniendo en cuenta que no existen pruebas ciertas que acrediten plenamente dichas tipologías de perjuicios deprecados en la demanda con ocasión al accidente de tránsito, pues basta con remitirnos al expediente, a fin de establecer dicha orfandad de pruebas. De esa forma, como se incumplieron las cargas de que trata el artículo 1077 del Código de Comercio, es claro que no ha nacido la obligación condicional del asegurador.

Por las razones expuestas, solicito respetuosamente declarar probada esta excepción.

### RIESGOS EXPRESAMENTE EXCLUIDOS EN LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL BÁSICA PARA VEHÍCULOS DE SERVICIO PÚBLICO NO. C2000156167.

Por medio de la presente, se solicita al despacho que, en caso de que en el curso del proceso se configure alguna exclusión contemplada en las condiciones particulares o generales del contrato de seguro Póliza de Responsabilidad Civil Básica para Vehículos de Servicio Público No. C2000156167, la declare probada, por cuanto hizo parte del negocio contractual que celebraron las partes.

En materia de seguros, el asegurador según el artículo 1056 del Código de Comercio podrá a su arbitrio, asumir todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos el interés asegurado. Por lo tanto, es en el conjunto de las condiciones que contiene el respectivo contrato donde se determinan o delimitan contractualmente los riesgos, su alcance o extensión, el ámbito temporal y geográfico en el que el amparo opera, las causales de exclusión, o en general, las de exoneración. Por tanto, son esos los parámetros a los que se tiene que sujetarse el sentenciador al resolver cualquier pretensión que se base en la correspondiente póliza. Luego, obviamente el asegurador tiene la facultad de delimitar contractualmente los riesgos que asume, conforme a lo normado en el artículo 1056 Código de Comercio.

En tal sentido, la Corte Suprema de Justicia, se refirió a las exclusiones de la siguiente manera:

“*En efecto, no en vano los artículos 1056[[36]](#footnote-36) y 1120 del Código de Comercio, permiten al asegurador, con las restricciones legales, escoger los riesgos que a su arbitrio tenga a bien en amparar y estipular las exclusiones expresas de riesgos inherentes a dicha actividad.*

*Por lo demás, debe la empresa de seguros tener presentes que, en la delimitación del riesgo, no debe vaciar de contenido ese que asume pues tal postura conllevaría a un remedo de amparo sin traslación efectiva de riesgos, sucesos que originan pérdidas y, en suma, desembolsos económicos”.[[37]](#footnote-37)*

En tal sentido, la Corte Suprema de Justicia definió la inexistencia de responsabilidad del asegurador cuando el riesgo se encuentra expresamente excluido, así:

*“Este principio de la universalidad que informa al seguro de transporte, entre otros más, justifica las precisas diferencias que, en lo pertinente, existen con las demás clases de seguros.* ***Así, por vía de ejemplo, en lo tocante con la delimitación del riesgo****, mientras el artículo 1056 del Código de Comercio permite que el asegurador, a su arbitrio, asuma “todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos el interés o la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del asegurado”, el art. 1120 ib. preceptúa que el seguro de transporte “comprende todos los riesgos inherentes al transporte, salvo el deterioro por el simple transcurso del tiempo y los riesgos expresamente excluidos” (Se subraya), luego,* ***en este último negocio aseguraticio, el asegurador es responsable cuando la pérdida sea ocasionada por uno de los “riesgos inherentes al transporte”, salvo que el riesgo se encuentre expresa e inequívocamente excluido por las partes****”[[38]](#footnote-38)* – (Subrayado y negrilla por fuera de texto.

Bajo esa misma interpretativa, la Corte Suprema de Justicia mediante Sentencia del 13 de diciembre de 2018, indicó que las exclusiones de tipo convencional estipuladas en los contratos de seguro no comprometen la responsabilidad del asegurador, en virtud de la facultad prevista en el artículo 1056 del Código de Comercio:

*“Las exclusiones de tipo convencional deben entenderse, como es apenas obvio, como aquellas pactadas por las partes o, cuando menos,* ***en las que existe consentimiento respecto de las indicadas en el clausulado prestablecido, en los denominados acuerdos de adhesión y que, siendo origen del siniestro o consecuencia del mismo, no comprometen la responsabilidad del asegurador****.*

*Esas cláusulas son válidas, inicialmente, en tanto se sustentan en el principio de la libre autonomía de las partes, cuyos límites son el orden público y las buenas costumbres; de ahí que el artículo 1056 consagre la posibilidad del asegurador de, «a su arbitrio, asumir todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos el interés o la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del asegurado”[[39]](#footnote-39)* - (Subrayado y negrilla por fuera de texto).

En virtud de lo anterior, es menester señalar que la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual Básica para Vehículos de Servicio Público No. C2000156167 en sus condiciones generales señala una serie de exclusiones, y de configurarse alguna de ellas, no podrá condenarse a mi prohijada.

En conclusión, de configurarse alguna de las exclusiones previamente mencionadas o las que constan en el clausulado general de la póliza, no podrá existir responsabilidad en cabeza del asegurador, por cuanto el juez no podrá ordenar la afectación de la Póliza de Responsabilidad Civil Básica para Vehículos de Servicio Público No. C2000156167 pues las partes acordaron expresamente pactar tales exclusiones. En consecuencia, si se evidencia dentro del proceso alguna de ellas, la póliza no cubriría ninguna solicitud de indemnización por lo que deberán denegarse las pretensiones de la demanda.

Por las razones expuestas, solicito respetuosamente declarar probada esta excepción.

### CARÁCTER MERAMENTE INDEMNIZATORIO DE LOS CONTRATOS DE SEGURO.

Es un principio que rige el contrato de seguro de daños, el carácter indemnizatorio del mismo, esto es, que el contrato de seguro tiene como interés asegurable la protección de los bienes o el patrimonio de una persona que pueda afectarse directa o indirectamente por la realización del riesgo. De modo que la indemnización que por la ocurrencia de dicho siniestro corresponda, nunca podrá ser superior al riesgo asumido ni a los perjuicios plenamente acreditados.

Así las cosas, el carácter de los seguros de daños y en general de cualquier seguro, es meramente indemnizatorio, esto es, que no puede obtener ganancia alguna el asegurado/beneficiario con el pago de la indemnización, es decir no puede nunca pensarse el contrato de seguro como fuente de enriquecimiento. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, respecto al carácter indemnizatorio del Contrato de Seguro, en sentencia del 22 de julio de 1999, expediente 5065, dispuso:

*“Este contrato no puede ser fuente de ganancias y menos de riqueza, sino que se caracteriza por ser indemnizatorio. La obligación que es de la esencia del contrato de seguro y que surge para el asegurador cumplida la condición, corresponde a una prestación que generalmente tiene un alcance variable, pues depende de la clase de seguro de la medida del daño efectivamente sufrido y del monto pactado como limitante para la operancia de la garantía contratada, y que el asegurador debe efectuar una vez colocada aquella obligación en situación de solución o pago inmediato.”*

En tal sentido, el artículo 1088 del Código de Comercio estableció lo siguiente:

*“****Respecto del asegurado, los seguros de daños serán contratos de mera indemnización y jamás podrán constituir para él fuente de enriquecimiento****. La indemnización podrá comprender a la vez el daño emergente y el lucro cesante, pero éste deberá ser objeto de un acuerdo expreso”* - (Subrayado y negrilla por fuera de texto).

A su vez, el artículo 1127 ibidem, dispone lo siguiente:

*“El seguro de responsabilidad impone a cargo del asegurador* ***la obligación de indemnizar los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado con motivo de determinada responsabilidad en que incurra de acuerdo con la ley*** *y tiene como propósito el resarcimiento de la víctima, la cual, en tal virtud, se constituye en el beneficiario de la indemnización, sin perjuicio de las prestaciones que se le reconozcan al asegurado.*

*Son asegurables la responsabilidad contractual y la extracontractual, al igual que la culpa grave, con la restricción indicada en el artículo 1055.”* - (Subrayado y negrilla por fuera de texto).

En vista de lo anterior, para el caso concreto, como se expuso en las excepciones de fondo planteadas frente a la demanda, las pretensiones que pretende sean reconocidas por el actor del presente pleito están indebidamente cuantificadas, no sólo por la orfandad probatoria con la que se pretenden demostrar, sino porque supera totalmente los baremos jurisprudenciales reiterados en muchas oportunidades por la Corte Suprema de Justicia, Sala de casación Civil. Esto supone a todas luces un enriquecimiento injustificado de los demandantes. En consecuencia, al encontrarse una indebida pretensión de enriquecimiento con base en un contrato de seguro, se vulnera la disposición que establece el carácter meramente indemnizatorio del mismo.

En concreto se advierte que los rubros indemnizatorios solicitados por la parte demandante carecen de fundamento fáctico y jurídico y no pueden acogerse por parte del despacho, puntualmente por las siguientes razones:

1. Respecto del lucro cesante consolidado y futuro, la parte demandante solicita el reconocimiento del mismo por una suma equivalente a $ 111’506.037 pesos sin haber acreditado de manera cierta la actividad laboral del señor Perea Montaño, ni los ingresos económicos para la fecha de los hechos demandados; adicionalmente el cálculo efectuado por tal concepto, se hace de manera equivocada comoquiera que el apoderado de la activa tiene presente el porcentaje prestacional, cuando la demandante no cuenta con ningún registro ante el sistema de seguridad social; y finalmente, se constata que, en la calificación allegada, no se señala de manera precisa la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral, lo cual impide determinar con certeza que la disminución alegada por la demandante sea consecuencia directa del accidente de tránsito que dio origen a la presente demanda.
2. Frente a los perjuicios extrapatrimoniales, cabe destacar que los mismo fueron solicitados sin el respaldo probatorio que acredite que los demandantes han incurrido en dichos perjuicios, resaltando que el cálculo es exagerado y desconoce claramente las directrices jurisprudenciales.

En consecuencia, al encontrarse una indebida pretensión sin sustento alguno, es evidente que aquellas están llamadas al fracaso puesto que no podría avalarse un enriquecimiento que contraríe el principio meramente indemnizatorio que reviste al contrato de seguro, pues se vulnera la disposición que establece su carácter meramente indemnizatorio del mismo.

En conclusión, de acuerdo a las voces de los artículos 1088 y 1127 del Código de Comercio sobre el carácter indemnizatorio del seguro y la responsabilidad del asegurador frente a la obligación indemnizatoria, en el caso particular se observa que, de acuerdo a los pedimentos injustificados, equivocadamente tasados y exorbitantes que hace la parte demandante sobre el concepto de daño moral es evidente la pretensión indebida de enriquecimiento con base en el contrato de seguro, vulnerando el carácter indemnizatorio que reviste al contrato de seguros.

En tal medida, solicito respetuosamente que se declare probada la presente excepción.

### EN CUALQUIER CASO, DE NINGUNA FORMA SE PODRÁ EXCEDER EL LÍMITE DEL VALOR ASEGURADO EN LAS PÓLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL BÁSICA PARA VEHÍCULOS DE SERVICIO PÚBLICO No. C2000156167 Y RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN EXCESO No. C2000156172.

En el remoto e improbable evento en que el Despacho considere que las Pólizas que hoy nos ocupan sí prestan cobertura para los hechos objeto de este litigio, que sí se realizó el riesgo asegurado y que en este sentido sí ha nacido a la vida jurídica la obligación condicional de la COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. Exclusivamente bajo esta hipótesis, el Juzgado deberá tener en cuenta entonces que no se podrá condenar a mi poderdante al pago de una suma mayor a la asegurada, incluso si se lograra demostrar que los presuntos daños reclamados son superiores. Por supuesto, sin que esta consideración constituya aceptación de responsabilidad alguna a cargo de mi representada.

En este orden de ideas, mi procurada no estará llamada a pagar cifra que exceda el valor asegurado previamente pactado por las partes, en tanto que la responsabilidad de mi mandante va hasta la concurrencia de la suma asegurada. De esta forma y de conformidad con el artículo 1079 del Código de Comercio, debe tenerse en cuenta la limitación de responsabilidad hasta la concurrencia de la suma asegurada:

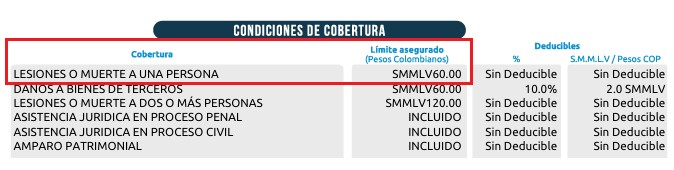
“*(…)* ***ARTÍCULO 1079. RESPONSABILIDAD HASTA LA CONCURRENCIA DE LA SUMA ASEGURADA.*** *El asegurador no estará obligado a responder si no hasta concurrencia de la suma asegurada, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 1074 (…)*”.

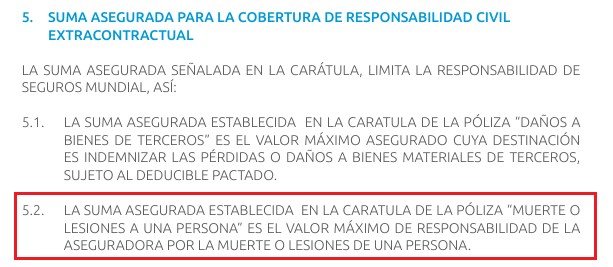
La norma antes expuesta, es completamente clara al explicar que la responsabilidad del asegurador va hasta la concurrencia de la suma asegurada. De este modo, la Corte Suprema de Justicia ha interpretado el precitado artículo en los mismos términos al explicar lo siguiente:

“*(…) Al respecto es necesario destacar que, como lo ha puntualizado esta Corporación, el valor de la prestación a cargo de la aseguradora, en lo que tiene que ver con los seguros contra daños, se encuentra delimitado, tanto por el valor asegurado, como por las previsiones contenidas en el artículo 1089 del Código de Comercio, conforme al cual, dentro de los límites indicados en el artículo 1079 la indemnización no excederá, en ningún caso, del valor real del interés asegurado en el momento del siniestro, ni del monto efectivo del perjuicio patrimonial sufrido por el asegurado o el beneficiario, regla que, además de sus significativas consecuencias jurídicas, envuelve un notable principio moral: evitar que el asegurado tenga interés en la realización del siniestro, derivado del afán de enriquecerse indebidamente, a costa de la aseguradora, por causa de su realización (…)*”[[40]](#footnote-40).

Téngase en cuenta que expresamente en el certificado de la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual Básica para Vehículos de Servicio Público No. C2000156167 y la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual Exceso No. C2000156172 se estipuló el límite de la cobertura para los eventos asegurables y amparados por el contrato, y en este punto impera el precepto del artículo 1079 del Código de Comercio, conforme al cual el asegurador estará obligado a responder únicamente hasta la concurrencia de la suma asegurada, sin excepción y sin perjuicio del carácter meramente indemnizatorio de esta clase de pólizas, consagrado en el artículo 1088 ibídem, que establece que los seguros de daños serán contratos de mera indemnización y jamás podrán constituirse en fuente de enriquecimiento.

Ahora bien, exclusivamente en gracia de discusión, sin ánimo de que implique el reconocimiento de responsabilidad en contra de mi representada, se debe manifestar que, en la **Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual Básica para Vehículos de Servicio Público No. C2000156167**, se indicaron los límites para los diversos amparos pactados, de la siguiente manera:





Así las cosas, y colindado con lo antes expuesto, en la causa que nos asiste, de acuerdo con los límites máximos establecidos en el contrato aseguraticio, el monto máximo que hipotéticamente correspondería a mi procurada indemnizar, por los reprochados en el libelo genitor, es de ***60 SMLMV***para el amparo de Responsabilidad Civil Extracontractual por lesiones a una persona, los cuales ascienden a $60’000.000 de pesos para la fecha de ocurrencia del accidente.

De forma complementaria a lo mencionado, se puede evidenciar que la asegurada contrató la póliza de **RCE en exceso No. C2000156172**, la cual contempla el siguiente límite asegurado:



El límite asegurado de 100 SMLMV a la fecha del accidente de tránsito representa el máximo valor que mi representada deberá pagar en caso de una eventual condena. Ahora bien, cabe precisar que, al ser una póliza contratada en exceso, ***la misma solo es susceptible de afectarse una vez se haya agotado la suma asegurada en la póliza de RCE básica y el valor cancelado sea insuficiente para resarcir los perjuicios reconocidos.***

Así mismo, resulta importante exponer que, de cara a lo previsto en el Art. 1078 y 1089 del C.Co., la suma pactada en el contrato de seguro, corresponde a los salarios mínimos del año 2022, fecha en la cual ocurrió el accidente de tránsito objeto del litigio.

De conformidad con estos argumentos, respetuosamente solicito declarar probada la excepción planteada en favor de los derechos e intereses de mi procurada.

### LÍMITE ASEGURADO DE LA PÓLIZA No. C2000156172, LA CUAL OPERA EN EXCESO DE LOS LÍMITES PRIMARIOS CONTRATADOS BAJO LA SECCIÓN DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL DE LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL BÁSICA PARA VEHÍCULOS DE SERVICIO PÚBLICO No. C2000156167.

Se plantea esta excepción con el fin de demostrar en el presente proceso que, dentro de las condiciones generales del contrato de seguro  No. C2000156172, por medio del cual se vincula a mi representada al presente proceso, se estableció textualmente que la póliza y las coberturas operan como exceso de las coberturas de responsabilidad civil extracontractual, es decir, una vez agotado el valor y concepto indemnizatorio del referido seguro, podrá eventualmente afectarse el amparo de responsabilidad civil extracontractual pactado dentro de la póliza No. C2000156172. De manera que, cualquier obligación indemnizatoria que pretenda imponerse hipotéticamente en contra de mi prohijada en virtud de este aseguramiento, deberá tener en cuenta que este opera únicamente de manera complementaria de las coberturas primarias del respectivo vehículo.

Como ya se ha señalado y demostrado en los anteriores acápites, estas pólizas no podrán ser afectadas en tanto no se ha perfeccionado el riesgo asegurado y no se ha demostrado siquiera la cuantía de la perdida.  Esto resulta en una imposibilidad de obligar a mi prohijada a pagar los perjuicios que reclama la parte activa a los demandando en este proceso, puesto que no se puede afectar la póliza que otorga una capa complementaria a las pólizas primarias, cuando estas pólizas básicas no pueden afectarse.

La legislación colombiana define el contrato accesorio en el artículo 1499 del C.C como:

*“(…) y accesorio, cuando tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal, de manera que no pueda subsistir sin ella (…)”.*

Sobre este punto, la Corte Suprema de Justicia ha dejado en claro que el parámetro de lo accesorio es un principio constitucional, de esta manera:

*“(…) El postulado expresado bajo el brocardo* ***accesorium sequitur principale*** *parte de la existencia de una relación de principalidad y accesoriedad entre dos cosas, ocupando una de ellas una posición preeminente, y, la otra, una subordinada.*

***La regla en comento significa que, en un supuesto de inseparable unión de cosas, aquellas accesorias deben sacrificarse y seguir el régimen jurídico, la suerte y el destino de las principales*** *(…)”[[41]](#footnote-41) (Subrayado y negrilla propios)*

De lo anterior se deduce que las pólizas que operan de manera complementaria no pueden subsistir independientemente de los contratos de seguro básicos. Dado que se trata de un contrato accesorio, este debe seguir la suerte de las pólizas principales. En consecuencia, las causas que extinguen la obligación principal también extinguen de manera correspondiente las obligaciones derivadas del contrato accesorio.

Aterrizando al caso en cuestión, de acuerdo con lo que fue pactado dentro del contrato de seguro contenido en la póliza No. C2000156172 las coberturas operan en exceso de los límites primarios contratados bajo la sección de responsabilidad civil extracontractual de la Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual Básica para Vehículos de Servicio Público No. C2000156167 es decir, una vez agotado el valor y concepto indemnizatorio del referido seguro, podrá eventualmente afectarse el amparo de responsabilidad civil extracontractual amparado por esta póliza. Lo anterior, conforme se observa en el siguiente extracto de la póliza:



Lo anterior permite concluir que, la cobertura en exceso de la Póliza No. C2000156167 está diseñada para entrar en vigencia en primera medida, una vez se haya excedido los límites primarios contratados bajo la sección de responsabilidad civil extracontractual de la póliza No. C2000156167. Esto implica que, en el eventual, hipotético y remoto caso en que se determine la existencia de obligación indemnizatoria en cabeza de mi procurada, el valor a partir del cual podría afectarse la cobertura de esta capa se determinará después de agotar las mencionadas coberturas básicas.

De esta manera, dado que no se puede afectar ninguna póliza básica, resulta evidente que no es factible exigir a mi representada el pago de los perjuicios reclamados por la parte demandante en este proceso. Esto se debe a que no es posible afectar la póliza que proporciona cobertura de manera complementaria a las pólizas primarias, especialmente cuando estas pólizas básicas no pueden ser afectadas.

Lo anterior permite concluir que, una vez agotados los límites primarios contratados bajo la sección de responsabilidad civil extracontractual de la Póliza No. C2000156167, causados a las personas en accidente de tránsito, podrá operar y afectarse en exceso la póliza No. C2000156172 y sólo en lo ateniente a la responsabilidad civil extracontractual en la que incurra el asegurado.

Así las cosas, solicito amablemente al despacho se declare probada la presente excepción.

### INEXISTENCIA DE SOLIDARIDAD ENTRE A COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS Y LOS DEMÁS DEMANDADOS.

Se formula esta excepción en razón a que Compañía Mundial de Seguros S.A. no puede ser considerada como responsable en la comisión de un accidente de tránsito respecto al cual no tuvo participación o injerencia alguna. Máxime, en atención a que su relación con el vehículo de placas SKR112 para el momento de presunta ocurrencia de los hechos que sirven de base para la acción se circunscribe a las condiciones del contrato de seguro, en el cual no se pactó la solidaridad. En el caso que nos ocupa, la fuente de las obligaciones de mi procurada está contenida en el contrato de seguro y en él no se convino la solidaridad entre las partes del contrato. La H. Corte Suprema de Justicia ha señalado que la solidaridad es una imposición para los agentes a quienes se les atribuye la autoría de un daño. Sin embargo, mi representada no era la propietaria del automotor ni sus dependientes lo manejaban. Recuérdese que la fuente de la solidaridad es la Ley, el testamento o el contrato y, en el caso que nos ocupa, no existe norma o pacto que establezca que mi representada deba ser condenada de forma solidaria.

La responsabilidad civil implica la existencia de un hecho, un daño y un nexo de causalidad en entre ambos. Sin embargo, mi representada no se encuentra abocada a esta relación toda vez que no generó de manera directa o indirecta daño alguno a la parte demandante. Razón por la cual, la misma no puede ser condenada en forma alguna como responsable de un accidente en el cual no tuvo participación De igual forma, mi representada no puede ser asemejada al asegurado en términos de que entre los mismos exista solidaridad, puesto que ésta sólo tiene su fuente en la ley o en los contratos. Sin que en la ley ni en el contrato de seguro suscrito entre mi representada y el tomador se haya establecido la misma.

Resulta pertinente recordar que, de conformidad con el Art. 2344 del C.C. si un delito o culpa ha sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del mismo delito o culpa. Sin embargo, tal como ha señalado la H. Corte Suprema de Justicia[[42]](#footnote-42), la solidaridad es una imposición para los agentes a quienes se les atribuye la autoría de un daño. No obstante, mi representada no era la propietaria del automotor ni sus dependientes lo manejaban. Recuérdese que la fuente de la solidaridad es la Ley, el testamento o el contrato y en el caso que nos ocupa, no existe norma o pacto que establezca que mí representada deba ser condenada de forma solidaria.

Ahora bien, en lo concerniente a la solidaridad convenida entre las partes, la H. Corte[[43]](#footnote-43) igualmente se ha ocupado de ella al señalar lo siguiente:

*“(…)* ***La solidaridad contractual civil debe ser declarada expresamente cuando la ley no la establece, por ello jamás se presume.*** *De ahí que es un mandato de carácter sustancial, ya que impone una obligación material al responsable solidario frente a los sujetos activos de la relación jurídica.*

*Ni la prescripción ni la solidaridad son, por lo tanto, elementos “accesorios” de la relación jurídico-sustancial o derecho material. Si la acción sustancial está prescrita el demandante no tiene ningún derecho y el demandado no es civilmente responsable; y* ***si el deudor contractual no es responsable in solidum, entonces no está obligado a pagar el total de la indemnización****. Desde luego que se trata de una cuestión fundamental y no de un tema secundario (…)”* (Negrilla y Sublínea por fuera del texto original).

Como se colige del contrato de seguro materializado a partir de la póliza de seguro aquí vinculada, entre mi procurada y el tomador y/o asegurado no se pactó la solidaridad, así como tampoco se señaló que la misma tuviese una relación adicional y/o distinta a la función aseguraticia por la misma desarrollada. Lo cual claramente deviene en que no es posible predicar la solidaridad pretendida por la parte demandante. Consecuentemente, mi procurada no puede ser tenida como responsable del accidente de tránsito presuntamente acaecido el 16 de mayo del 2022, pues su relación se limita y circunscribe al contrato de seguro que la misma otorgó en el cual no se pactó la solidaridad.

En conclusión, mi procurada no puede ser tenida como responsable en la comisión del accidente de tránsito respecto al cual se erige el presente trámite comoquiera que su relación con el vehículo de placa SKR112 para el momento de ocurrencia de los hechos se delimitó de conformidad con las condiciones del contrato de seguro sin que en el mismo se haya pactado la solidaridad.

Por lo anterior, señor juez, solicito se abstenga de declarar responsable por el accidente a mi representada en un eventual fallo y declare probada esta excepción.

### IMPOSIBILIDAD DE CONDENAR AL PAGO DE INTERESES MORATORIOS TODA VEZ QUE LA OBLIGACIÓN INDEMNIZATORIA NO HA NACIDO.

Es claro que para que nazca a la vida la obligación indemnizatoria y sobre todo condicional de mi representada, se requería que el asegurado cumpliera con la carga establece en el artículo 1077 del C.Co., ante la ausencia de acreditación de la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida no puede predicarse la existencia de obligación alguna y por ende tampoco puede considerarse que mi representada se encuentre en mora, dado que, no es posible predicarse la mora de una obligación inexistente, por lo dicho es claro que ningún respaldo encuentra la solicitud de pago de intereses de mora cuando por la parte demandante, no ha demostrado la responsabilidad civil extracontractual en cabeza del vehículo asegurado y tampoco la cuantía de la perdida. Por lo anterior mientras se encuentren insatisfechos los dos presupuestos anteriores no es posible afirmar que haya nacido obligación alguna y mucho menos que se encuentre insatisfecha.

Debe decirse que en este caso se encuentra insatisfecho el cumplimiento de la acreditación del siniestro y la cuantía de la perdida y que siendo estos dos elementos esenciales en los términos del artículo 1077 del C.Co., para acreditar el derecho a recibir una indemnización por parte del asegurador debe afirmarse enfáticamente que mientras no se pruebe tales presupuestos no es posible considerar que ha nacido a la vida jurídica la obligación indemnizatoria y sobre todo condicional de la Compañía Mundial de Seguros S.A. Por lo dicho, salta a la vista en esta instancia no se ha acreditado la ocurrencia del siniestro ni la cuantía de la pérdida, y por ende no podría tampoco predicarse la mora de una obligación que no ha surgido como consecuencia de la misma omisión en la acreditación.

Ahora bien, debe dejarse claro que en el hipotético y remoto evento en que el Honorable Despacho considere que la indemnización es procedente y que existe obligación por parte de Compañía Mundial de Seguros, se deberá tener en consideración que la certeza sobre dicho derecho sólo quedará probado al momento de proferirse sentencia, porque en ninguna medida la parte Demandante demostró la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida, por lo que si el Despacho encontrara sustento de tal pretensión es claro que ello implicaría que los presupuestos del artículo 1077 del C.Co., se demostraron en el curso del proceso, después de surtirse el debate probatorio y por ende no podría condenarse al pago de intereses moratorios desde el momento en que se efectuó una solicitud de indemnización (que no es en ninguna medida una reclamación) sino únicamente a partir de la decisión judicial.

Como sustento de lo anterior, se encuentra que la Corte Suprema de Justicia en cuanto al momento en el que se empiezan a causar los intereses moratorios, ha establecido en distintas oportunidades que éstos empiezan a causarse a partir de la ejecutoria del fallo judicial que da certeza a la obligación. Específicamente, en la reciente sentencia del 26 de mayo de 2021, en la que se indicó textualmente lo siguiente:

*“(…)* ***Respecto del momento a partir del cual procedía disponer el pago de intereses moratorios****, conforme al análisis que se dejó consignado al estudiarse el cargo segundo del recurso extraordinario de casación, al que se hace remisión expresa, se colige el desacierto de la fecha fijada por el a quo con tal fin -6 de septiembre de 2010-, misma señalada por el Tribunal, la cual, por ende, deberá modificarse, para* ***disponer que la eventual causación de los indicados réditos, será a partir de la ejecutoria del presente fallo*** *(…)”[[44]](#footnote-44)*

Aunado al anterior pronunciamiento, es relevante resaltar cómo la Corte Suprema ha dicho que la sanción a la que corresponde los intereses de mora no puede ser aplicada de manera objetiva, sino que debe atenderse al caso concreto a fin de evaluar el motivo de retardo en el pago, lo anterior en palabras de la Corte al indicar que:

*“(...) De igual modo, en providencia del 29 de abril de 2005, reiteró: “ a la luz de los principios generales relativos al retardo en el cumplimiento de las obligaciones, principios en los que claramente se sustenta el precepto contenido en el artículo 1080 del C. de Co., desde el momento en que de acuerdo con este precepto ha de entenderse que comienza la mora del asegurador, es decir desde el día en que la deuda a su cargo es líquida y exigible, o mejor, lo habría sido racionalmente si no hubiere diferido sin motivo legítimo la liquidación de la indemnización y el consiguiente pago, dicho asegurador, además de realizar la prestación asegurada, está obligado al resarcimiento de los daños”*

*Los fragmentos jurisprudenciales que acaban de citarse explican que la aseguradora sólo incurre en mora cuando no paga la indemnización dentro del mes siguiente a la fecha de la reclamación, si ésta se ha hecho debidamente por el asegurado y con el cumplimiento de las carga probatorios sobre la existencia del siniestro y el valor del daño.*

*Pero esta sanción-ha afirmado esta Corte-no se impone de manera objetiva, pues para que haya lugar a ella es necesario que la falta de pago de la indemnización carezca de causa justificada o le sea imputable al asegurador, por lo que el juez deberá entrar a valorar en todos los casos el motivo de retraso en la liquidación.*

*En ese orden- prosiguió esta corporación- si la excusa de la aseguradora consiste en que no fue posible determinar el monto del daño, y logra probar ese hecho en el proceso, entonces no habrá lugar a imponerle sanción alguna, porque es claro que la falta de satisfacción oportuna de la obligación no se debió a su culpa, tal como ha* *sido explicado por esta sala: “En consecuencia, el monto líquido de la prestación es presupuesto estructural de la obligación de pagar el capital asegurado y de la mora (in illiquidis mora non fit), razón por la cual, en ausencia de comprobación, no es exigible ni la indemnización ni la sanción moratoria (…)”[[45]](#footnote-45) (Sentencia de 27 de agosto de 2008.Exp- 1997-14171-01”*

Lo anterior, deja claro que como a la fecha no se ha demostrado que ocurriera el siniestro es decir la responsabilidad extracontractual a cargo del asegurado. De este modo, es claro que únicamente con la decisión final que adopte el juzgador se podrá establecer si efectivamente se cumplen las cargas del artículo 1077 del C.Co., y en efecto se otorgará certeza al derecho pretendido, por lo que de ninguna manera se podría condenar al pago de intereses moratorios desde que el demandante efectuó la solicitud de indemnización comoquiera que tal pedimento nunca se constituyó en una verdadera reclamación que acreditara los dos presupuestos antes enunciados. Luego, antes de proferirse el fallo no existe certeza sobre la obligación presuntamente pendiente de indemnizar.

Por lo anteriormente expuesto, solicito al Despacho declarar probada esta excepción.

### DISPONIBILIDAD DEL VALOR ASEGURADO

Conforme a lo dispuesto en el artículo 1111 del Código de Comercio, el valor asegurado se reducirá conforme a los siniestros presentados y a los pagos realizados por la aseguradora, por tanto, a medida que se presenten más reclamaciones por personas con igual o mayor derecho y respecto a los mismos hechos dicho valor se disminuirá en esos importes, siendo que en el evento que para la fecha de la sentencia se ha agotado totalmente el valor asegurado no habrá lugar a cobertura alguna.

1. **GENÉRICA O INNOMINADA Y OTRAS.**

En atención a lo reglado por el artículo 282 del Código General del Proceso, solicito al señor Juez decretar cualquier otra excepción de fondo que resulte probada en el curso del proceso y que pueda corroborar que no existe obligación alguna a cargo de mi representada y que pueda configurar otra causal que la exima de toda obligación indemnizatoria.

# OPOSICIÓN MEDIOS DE PRUEBA PRESENTADOS POR EL DEMANDANTE

### Contradicción al dictamen pericial

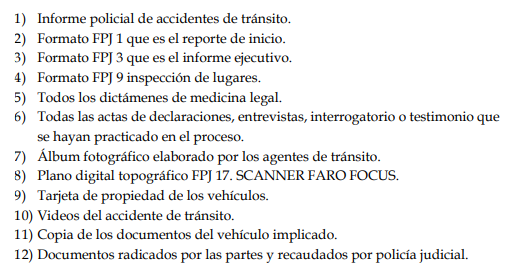
Solicito se decrete la contradicción de los dictámenes periciales, en el eventual caso que se decrete por parte de este despacho judicial a favor de la parte actora, con fundamento en los términos del artículo 228 del Código General del Proceso:

*“(...) La parte contra la cual se aduzca un dictamen pericial podrá solicitar la comparecencia del perito a la audiencia, aportar otro o realizar ambas actuaciones. Estas deberán realizarse dentro del término de traslado del escrito con el cual haya sido aportado o, en su defecto, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de la providencia que lo ponga en conocimiento. En virtud de la anterior solicitud, o si el juez lo considera necesario, citará al perito a la respectiva audiencia, en la cual el juez y las partes podrán interrogarlo bajo juramento acerca de su idoneidad e imparcialidad y sobre el contenido del dictamen. La contraparte de quien haya aportado el dictamen podrá formular preguntas asertivas e insinuantes. Las partes tendrán derecho, si lo consideran necesario, a interrogar nuevamente al perito, en el orden establecido para el testimonio. Si el perito citado no asiste a la audiencia, el dictamen no tendrá valor (…)*”

En conclusión, bajo el anterior precepto normativo, y encontrándome en oportunidad para hacerlo solicito que, en caso de ser decretado algún dictamen pericial en favor de la parte actora, sea contradicho en la respectiva audiencia de pruebas.

### Oposición a oficios

La parte actora dentro de su escrito de demanda solicita que se sirva oficiar a la Fiscalía 54 Local de Cali para que allegue al presente proceso lo siguiente:



Sin embargo, de acuerdo con el artículo 173 del Código General del Proceso *“(…) El juez se abstendrá de ordenar la práctica de las pruebas que, directamente o por medio de derecho de petición, hubiera podido conseguir la parte que las solicite, salvo cuando la petición no hubiese sido atendida, lo que deberá acreditarse sumariamente”.* Por lo tanto, de acuerdo con los documentos obrantes dentro del plenario no existe ninguno que acredite que la parte haya intentado conseguir, mediante petición, la prueba solicitada. Por lo cual, el Despacho debe abstenerse de ordenar su práctica.

### Oposición a inspección judicial

De acuerdo con el artículo 236 del Código General del Proceso, “*(…) Salvo disposición en contrario, solo se ordenará la inspección cuando sea imposible verificar los hechos por medio de videograbación, fotografías u otros documentos, o mediante dictamen pericial, o por cualquier otro medio de prueba. (…)”.* No obstante de acuerdo con la solicitud probatoria del demandante, este medio tiene como objeto probar las características de la vía, señales de tránsito, demarcación de carriles y sentidos viales, además probar donde fue el punto de impacto y donde quedaron ubicados los cuerpos. En primer lugar, el objeto de la prueba puede ser evacuado con el IPAT que obra dentro del expediente y con la declaración del agente de tránsito por lo que se hace inane su práctica. De contera, las condiciones del lugar después de 3 años no lo logran acreditar de forma fehaciente lo que pretende demostrar el demandante y tampoco la ubicación de los vehículos por no ser posible su razonabilidad.

# MEDIOS DE PRUEBA

Solicito a este honorable despacho se sirva decretar y tener como pruebas las siguientes:

1. **DOCUMENTAL**
   1. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual Básica para Vehículos de Servicio Público No. C2000156167 emitida por Compañía Mundial de Seguros S.A., la cual ya reposa en el expediente por haber sido allegada con la contestación a la demanda inicial.
   2. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual Exceso Plan A para Vehículos de Servicio Público No. C2000156172 emitida por Compañía Mundial de Seguros S.A.
   3. Póliza de Responsabilidad Civil Contractual Básica para Vehículos de Servicio Público No. C2000156170 emitida por Compañía Mundial de Seguros S.A.
   4. Póliza de Responsabilidad Civil Contractual Exceso para Vehículos de Servicio Público No. C2000156173 emitida por Compañía Mundial de Seguros S.A.
   5. Condicionado general aplicable a la póliza de responsabilidad civil extracontractual, la cual ya reposa en el expediente por haber sido allegada con la contestación a la demanda inicial.
   6. Condicionado general aplicable a la póliza de responsabilidad civil contractual.
2. **INTERROGATORIO DE PARTE.**
   1. Comedidamente solicito se cite para que absuelva interrogatorio de parte de William David Perea Montaño, Yuri Vanessa Tenorio Valencia, Oscar Marino Perea Alegría, María Elena Perea Montaño, Orlando Perea Montaño, y Victor Manuel Perea Montaño, en su calidad de demandantes, a fin de que contesten el cuestionario que se les formulará frente a los hechos de la demanda, de la contestación y, en general, de todos los argumentos de hecho y de derecho expuestos en este litigio. Los demandantes podrán ser citados en la dirección de notificación relacionada en la demanda.
   2. Comedidamente solicito se cite para que absuelva interrogatorio de parte a los demandados, el señor Julián David Caicedo Encarnación, José Alexander Torres Sanchez y Juan Camilo Salinas Valencia, Aristides Moreno Becerra en su calidad de demandados, a fin de que contesten el cuestionario que se les formulará frente a los hechos de la demanda, de la contestación y, en general, de todos los argumentos de hecho y de derecho expuestos en este litigio. Los demandados podrán ser citados en la dirección de notificación relacionada en cada una de sus contestaciones.
3. **DECLARACIÓN DE PARTE**

Al tenor de lo preceptuado en el artículo 198 del Código General del Proceso, respetuosamente solicito ordenar la citación del Representante Legal de **COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.** para que sea interrogado por el suscrito, sobre los hechos referidos en la contestación de la demanda y, especialmente, para exponer y aclarar los amparos, ausencias de cobertura, exclusiones, términos y condiciones de los contratos de seguro de responsabilidad civil extracontractual y contractual instrumentalizados mediante las pólizas por las cuales fue vinculada mi mandante al proceso.

1. **TESTIMONIALES**

Siguiendo lo preceptuado por los artículos 208 y siguientes del Código General del Proceso, solicito al señor Juez se sirva decretar la práctica del testimonio de la Dra. **DARLYN MARCELA MUÑOZ NIEVES**, identificada con C.C. No. 1.061.751.492 de Popayán, con dirección de notificaciones [darlingmarcela1@gmail.com](mailto:darlingmarcela1@gmail.com) para que declare sobre las condiciones generales y particulares de la Póliza de Responsabilidad Civil Básica para Vehículos de Servicio Público No. C2000156167, C2000156172, C2000156170 y C2000156173, los límites pactados, los deducibles concertados, las exclusiones, los amparos concertados, la disponibilidad de las sumas aseguradas, las solicitudes presentadas ante la compañía, sus respuestas y sobre los demás aspectos que resulten relevantes al presente proceso judicial, y en general sobre lo referido en las excepciones propuestas en este escrito.

1. **DICTAMEN PERICIAL**

Comedidamente anuncio que me valdré de un informe de reconstrucción de accidente de tránsito a fin de ofrecer al despacho una ampliación frente a las circunstancias en las cuales se presentó el accidente, realizando un análisis exhaustivo y detallado de las pruebas que obran en el expediente, para finalmente realizar un estudio de los factores que, según su experticia, determinen la causa eficiente del mismo.

El medio de prueba anunciado es conducente, pertinente y útil, por cuanto pretende ilustrar al despacho, de forma técnica y científica, sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos demandados.

Dicha prueba pericial se solicita y se anuncia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 227 del Código General del Proceso, pues a la fecha no me es posible aportarla dada la complejidad técnica del mismo, además, el término de traslado no fue suficiente para elaborar y aportar el dictamen pericial.

En virtud de lo anterior, respetuosamente solicito al despacho que se le conceda a mi representada un término no inferior a dos (2) meses con el fin de aportar dictamen pericial realizado por un perito experto en el tema, el anterior término se justifica teniendo en cuenta la complejidad de dicho dictamen, pues se hace necesario realizar un estudio minucioso a fin de lograr la reconstrucción requerida.

# ANEXOS

* Documentos relacionados en el acápite de pruebas.
* Poder general otorgado al suscrito por COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. mediante escritura Publica No. 13771 de la Notaría 29 de Bogotá para representar a la compañía aseguradora en el presente trámite.
* Certificado de existencia y representación legal de Compañía Mundial de Seguros expedido por la Cámara de Comercio de Cali y por la Superintendencia Financiera de Colombia.

# NOTIFICACIONES

* Por la parte actora serán recibidas en el lugar indicado en su escrito de demanda.
* Por los demás demandados, donde indiquen en sus respectivas contestaciones.
* Mi representada, COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. en la Calle 33 # 6b - 24, en la ciudad de Bogotá. Dirección de correo electrónico [mundial@segurosmundial.com.co](mailto:mundial@segurosmundial.com.co)
* Por parte del suscrito se recibirán notificaciones en la Secretaría de su Despacho o en la Avenida 6 A Bis No. 35N-100, Centro Empresarial Chipichape, Oficina 212 de la ciudad de Cali. Dirección electrónica: [notificaciones@gha.com.co](mailto:notificaciones@gha.com.co)

De usted Señor Juez, cordialmente,

**GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA**

C.C. No. 19.395.114 de Bogotá D.C.

T.P. No. 39.116 del C. S. de la J.

1. Corte Suprema de Justicia. Sentencia 41392. M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez. [↑](#footnote-ref-1)
2. Corte Suprema de Justicia. Sentencia 41392. M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez. [↑](#footnote-ref-2)
3. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 15 de febrero de 2018. M.P. Margarita Cabello Blanco. EXP: 2007-0299. [↑](#footnote-ref-3)
4. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 12 de junio de 2018. M.P. Luis Armando Tolosa Villabona. EXP: 2011-0736. [↑](#footnote-ref-4)
5. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 21 de noviembre de 2005. Expediente No. 11001-3103-003-1995-07113-01. M.P. Edgardo Villamil Portilla. [↑](#footnote-ref-5)
6. Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 24 de marzo de 2011. Radicado 66001-23-31-000-1998-00409-01 (19067) MP. Mauricio Fajardo Gómez. [↑](#footnote-ref-6)
7. Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 24 de marzo de 2011. Radicado 66001-23-31-000-1998-00409-01 (19067) MP. Mauricio Fajardo Gómez. [↑](#footnote-ref-7)
8. ZAVALA DE GONZÁLEZ, Matilde. Actuaciones por daños. Ed. Hammurabi, BA. Pág. 172. Del artículo de PATIÑO. Héctor. Las causales exonerativas de la responsabilidad extracontractual. [↑](#footnote-ref-8)
9. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. SC7534-2015. Sentencia del 16 de junio de 2015. [↑](#footnote-ref-9)
10. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 15 de marzo de 1941. [↑](#footnote-ref-10)
11. Corte suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 16 de diciembre de 2010. Expediente 1989- 00042 M.P. Arturo Solarte Rodríguez [↑](#footnote-ref-11)
12. Corte Suprema de Justicia. SC4420-2020. Expediente 2011-00093. M.P. Luis Armando Tolosa Villabona. [↑](#footnote-ref-12)
13. Ibidem. [↑](#footnote-ref-13)
14. Patiño, Héctor. “Responsabilidad extracontractual y causales de exoneración. Aproximación a la jurisprudencia del Consejo de Estado colombiano”. Revista Derecho Privado N14. Universidad Externado de Colombia. 2008 [↑](#footnote-ref-14)
15. Corte Suprema de Justicia. Sala Civil. Sentencia del 15 de enero de 2008. Expediente 87300. [↑](#footnote-ref-15)
16. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. SC 6279-2016. Noviembre 11 de 2016. [↑](#footnote-ref-16)
17. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Radicación No. 3579. No publicada. [↑](#footnote-ref-17)
18. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Expediente 11001-31-03-032-2011-00736-01. Junio 12 de 2018. [↑](#footnote-ref-18)
19. Corte Suprema de Justicia. Sentencia Rad. 2000-01141 del 24 de junio de 2008 [↑](#footnote-ref-19)
20. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. SC4966-2019. Expediente 2011-00298. M.P. Luis Alonso Rico Puerta [↑](#footnote-ref-20)
21. Sentencia de casación civil del 13 de mayo de 2008, Exp.1997-09327-01. [↑](#footnote-ref-21)
22. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 6 de mayo de 2016. Rad: 2004-032 (M.P: Luis Armando Tolosa Villabona) [↑](#footnote-ref-22)
23. Ídem [↑](#footnote-ref-23)
24. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 07/03/2019. MP Octavio Augusto Tejeiro Duque, Rad: 05001 31 03 016 2009-00005-01. [↑](#footnote-ref-24)
25. Tamayo, Javier. Tratado de Responsabilidad Civil. Tomo II. Prueba de los Perjuicios Morales Subjetivados. Pág. 508 [↑](#footnote-ref-25)
26. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 13 de mayo de 2008, radicado 11001-3103-006-1997- 09327-01. [↑](#footnote-ref-26)
27. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 12 de noviembre de 2019, radicado 73001-31-03-002- 2009-00114-01. [↑](#footnote-ref-27)
28. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. SC5340-2018 de 7 de diciembre de 2018. Magistrado Ponente: Arnoldo Wilson Quiroz Monsalvo. [↑](#footnote-ref-28)
29. Sentencia SC9193-2017, Rad. 11001-31-03-039-2011-00108-01, 28 de junio de 2017, M.P. Ariel Salazar Ramírez. [↑](#footnote-ref-29)
30. Sentencia SC 562-2020, Rad. 73001-31-03-004-2012-00279-01, 27 de febrero de 2020, M.P. Ariel Salazar Ramírez. [↑](#footnote-ref-30)
31. Corte suprema de Justicia, sentencia SCT16743 del 2019, MP. Luis Armando Tolosa. [↑](#footnote-ref-31)
32. Ibidem. [↑](#footnote-ref-32)
33. ÁLVAREZ GÓMEZ Marco Antonio. “Ensayos sobre el Código General del Proceso. Volumen I. Hipoteca, Fiducia mercantil, Prescripción, Seguros, Filiación, Partición de bienes en vida y otras cuestiones sobre obligaciones y contratos”. Segunda Edición. Editorial Temis, Bogotá, 2018. Pág. 121-125. [↑](#footnote-ref-33)
34. Sentencia SC2482-2019 de 9 de julio de 2019, Radicación n.° 11001-31-03-008-2001-00877-01. Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. MP: ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO [↑](#footnote-ref-34)
35. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil M.P. Dr. Pedro Octavio Munar Cadena. Exp. 1100131030241998417501 [↑](#footnote-ref-35)
36. Dice el precepto: “Con las restricciones legales, el asegurador podrá, a su arbitrio, asumir todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos el interés o la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del asegurado”. [↑](#footnote-ref-36)
37. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia SC4527-2020. M.P. Francisco Ternera Barrios. [↑](#footnote-ref-37)
38. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 31 de enero de 2007. Exp. 2000-5492-01. M.P. Carlos Ignacio Jaramillo. [↑](#footnote-ref-38)
39. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia SC5327-2018. Magistrado Ponente: Luis Alfonso Rico Puerta. [↑](#footnote-ref-39)
40. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 14 de diciembre de 2001. Mp. Jorge Antonio Castillo Rúgeles. EXP 5952. [↑](#footnote-ref-40)
41. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil, sentencia SC477-2018 del 05 de septiembre de 2018. M.P: Octavio Duque Tejeiro Duque [↑](#footnote-ref-41)
42. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sentencia SC780-2020. M.P. Ariel Salazar Ramírez [↑](#footnote-ref-42)
43. Ibídem [↑](#footnote-ref-43)
44. Corte Suprema de Justicia. Sentencia SC1947-2021. M.P. Álvaro Fernando García Restrepo. 26 de mayo de 2021. [↑](#footnote-ref-44)
45. Corte Suprema de Justicia, sentencia SC 5681 de 2018, MP. Ariel Salazar Ramírez. [↑](#footnote-ref-45)